

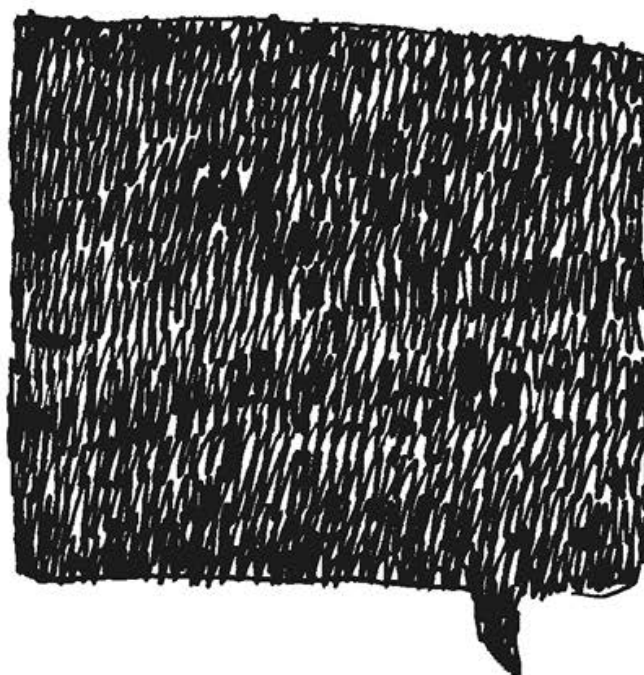
MENTIRAS, LUGARES COMUNES Y MEDIAS VERDADES

GÉNERO, NACIÓN Y POLÍTICA EN ESPAÑA

FERRAN ARCHILÉS

JULIÁN SANZ

(EDS.)



Índice

1. [PRESENTACIÓN. Ferran Archilés y Julián Sanz](#)
2. [PRIMERA PARTE. LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD Y EN LA POLÍTICA](#)
3. [CAPÍTULO 1. LAS MUJERES DEL CAMPO SE HAN OCUPADO DE LOS QUEHACERES DOMÉSTICOS Y DE AYUDAR. Ana Cabana Iglesia](#)
4. [CAPÍTULO 2. EN ESPAÑA. "LA MUJER" NO TRABAJÓ HASTA LOS AÑOS SESENTA. Marta del Moral Vargas](#)
5. [CAPÍTULO 3. ¿EL FEMINISMO ESPAÑOL HA SIDO EXCLUSIVAMENTE DE IZQUIERDAS?. María Pilar Salomón Chéliz](#)
6. [CAPÍTULO 4. EL FEMINISMO EN ESPAÑA EMPEZÓ CON CLARA CAMPOAMOR. Inmaculada Blasco Herranz](#)
7. [CAPÍTULO 5. MUJER SUFRAGIO EN LA SEGUNDA REPÚBLICA: ¿UN VOTO DE IDA Y VUELTA?. Sofía Rodríguez Serrador](#)
8. [SEGUNDA PARTE. IDENTIDAD ESPAÑOLA Y CUESTIÓN NACIONAL](#)
9. [CAPÍTULO 6. EL ESPAÑOL NUNCA FUE UNA LENGUA IMPUESTA. Aurelio Martí Bataller](#)
10. [CAPÍTULO 7. ESPAÑA ES EL PAÍS CON MÁS MOVIMIENTOS "NACIONALISTAS" DE EUROPA. Ferran Archilés](#)
11. [CAPÍTULO 8. EL MITO DE LA "IDENTIDAD DUAL". Jorge Cagiao y Conde](#)
12. [TERCERA PARTE. MONARQUÍA Y REPÚBLICA EN LA HISTORIA DE ESPAÑA](#)
13. [CAPÍTULO 9. ¿TIERRA DE TRONOS? LA NAVEGACIÓN DE UNA TRADICIÓN REPUBLICANA EN ESPAÑA. Sergio Sánchez Collantes](#)
14. [CAPÍTULO 10. MONARQUÍA Y DEMOCRACIA, ¿DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA?. Guillermo María Muñoz](#)
15. [CAPÍTULO 11. BULOS, ERRORES Y EQUÍVOCOS EN TORNO A LAS ELECCIONES Y LA POLÍTICA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA.](#)

Julián Sanz Hoya

16. CAPÍTULO 12. VIOLENCIA Y TÓPICOS DE LA PRIMAVERA DE 1936. Eduardo González Calleja
17. CAPÍTULO 13. EL ANTIFASCISMO ES UN DISFRAZ DEL COMUNISMO. Sergio Valero Gómez
18. CUARTA PARTE. LOS MITOS DEL FRANQUISMO Y SU HERENCIA. DERECHA Y EXTREMA DERECHA
19. CAPÍTULO 14. PERO FRANCO CREÓ LA SEGURIDAD SOCIAL...Damián A. González de Madrid y Manuel Ortiz Heras
20. CAPÍTULO 15. ¿UNA DICTADURA SIN APOYOS O UN PAÍS LLENO DE FRANQUISTAS?. Carlos Fuertes Muñoz
21. CAPÍTULO 16. LA DERECHA ESPAÑOLA HA ROTO CON EL FRANQUISMO. Jacobo López Felipe
22. CAPÍTULO 17. LA EXTREMA DERECHA ACTUAL O EL NACIONALISMO NEGADO. Ismael Saz Campos
23. QUINTA PARTE. LAS MIGRACIONES: PASADO Y PRESENTE
24. CAPÍTULO 18. CONTRA LOS MITOS SOBRE LAS MIGRACIONES INTERIORES DEL FRANQUISMO. Miguel Díaz Sánchez
25. CAPÍTULO 19. CON LOS PAPELES EN REGLA, POCAS MUJERES Y SOLO POR MOTIVOS ECONÓMICOS. Bárbara Ortuño Martínez
26. CAPÍTULO 20. LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS MIGRANTES NO LLEGA IRREGULARMENTE. Blanca Garcés y Emilia Martínez
27. SOBRE LOS AUTORES Y LAS AUTORAS

Ferran Archilés y Julián Sanz (eds.)

Mentiras, lugares comunes y medias verdades

GÉNERO, NACIÓN Y POLÍTICA EN ESPAÑA



COLECCIÓN INVESTIGACIÓN Y DEBATE

**LA PUBLICACIÓN DE ESTE LIBRO HA RECIBIDO UNA AYUDA DEL PROYECTO CIAICO/2021/234
FINANCIADO POR LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ DE LA GVA.**



© FERRAN ARCHILÉS CARDONA, INMACULADA BLASCO HERRANZ, ANA CABANA IGLESIA, JORGE CAGIAO Y CONDE, MIGUEL DÍAZ SÁNCHEZ, CARLOS FUERTES MUÑOZ, DAMIÁN A. GONZÁLEZ MADRID, EDUARDO GONZÁLEZ CALLEJA, BLANCA GARCÉS, JACOBO LÓPEZ FELIPE, GUILLERMO MARÍA MUÑOZ, AURELIO MARTÍ BATALLER, EMILIA MARTÍNEZ, MARTA DEL MORAL VARGAS, MANUEL ORTIZ HERAS, BÁRBARA ORTUÑO MARTÍNEZ, SOFÍA RODRÍGUEZ SERRADOR, MARÍA PILAR SALOMÓN CHÉLIZ, SERGIO SÁNCHEZ COLLANTES, JULIÁN SANZ HOYA, ISMAEL SAZ CAMPOS Y SERGIO VALERO GÓMEZ, 2025

**© LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2025
FUENCARRAL, 70**

28004 MADRID
TEL. 91 532 20 77
WWW.CATARATA.ORG

**MENTIRAS, LUGARES COMUNES Y MEDIAS VERDADES.
GÉNERO, NACIÓN Y POLÍTICA EN ESPAÑA**

ISBN-E: 978-84-1067-343-4
ISBN: 978-84-1067-322-9
DEPÓSITO LEGAL: M-9.707-2025
THEMA: JB/JBS/JBCTS/1DSE

ESTE LIBRO HA SIDO EDITADO PARA SER DISTRIBUIDO. LA INTENCIÓN DE LOS EDITORES ES QUE SEA UTILIZADO LO MÁS AMPLIAMENTE POSIBLE, QUE SEAN ADQUIRIDOS ORIGINALES PARA PERMITIR LA EDICIÓN DE OTROS NUEVOS Y QUE, DE REPRODUCIR PARTES, SE HAGA CONSTAR EL TÍTULO Y LA AUTORÍA.

PRESENTACIÓN

FERRAN ARCHILÉS Y JULIÁN SANZ

A finales de 2022 vio la luz en Los Libros de la Catarata *Contra los lugares comunes. Historia, memoria y nación en la España democrática*, coordinado por Ferran Archilés, Julián Sanz y Xavier Andreu. El libro planteaba un reto: ser capaces de combatir diversos lugares comunes presentes en la esfera pública española mediante textos breves, sin notas a pie de página, redactados por especialistas académicos. Nuestra voluntad era encontrar una vía para comunicar de la manera más sencilla y rigurosa lo que pensábamos que eran ideas equivocadas, tópicos o lugares comunes.

El libro fue bien recibido entre el público al que aspirábamos, más allá de los ámbitos universitarios. Un libro de esas características se enfrentaba al menos a dos problemas: por una parte, la capacidad de escribir para un público amplio, algo que las rutinas, las imposiciones burocráticas sobre la “excelencia” del trabajo universitario y diversas razones metafísicas suelen dificultar. Por otra parte, conseguir hacer un hueco entre el ruido de las redes sociales. No éramos ingenuos: la posibilidad de encontrar ese espacio era limitada. ¿Por qué es tan fácil difundir argumentos equívocos, retorcidos o falsos y tan difícil tratar de recuperar una discusión fundamentada? El descrédito de los saberes es asombroso. Despreciar la “academia” se ha

convertido en un tristísimo aliado de los discursos antiintelectuales y, al final de la jornada, de los negacionistas de los más diversos pelajes. El mundo universitario merece muchas críticas. Pero la universidad pública era y es, aun a pesar de todo, un bastión contra la barbarie (con rostro humano o de IA).

Así que volvemos a la carga. Porque no podemos abandonar esta lucha. *Mentiras, lugares comunes y medias verdades. Género, nación y política en España* insiste en el esfuerzo, tratando esta vez aspectos que no abordamos en el libro anterior o que complementan lo que entonces presentamos. El reto continúa siendo el mismo. 22 especialistas de 11 universidades españolas y europeas han agrupado aquí sus esfuerzos para ofrecer unas teselas más en el empeño de seguir discutiendo lo que merece ser discutido. Se trata, por tanto, de ofrecer argumentos frente a los que manipulan descaradamente o por ignorancia culpable. Frente a la obsesión por el *relato*, que significa asumir cualquier patraña si sirve a un interés predeterminado, este libro propone la necesidad de asumir la complejidad de los tiempos pasados y del presente.

Mentiras, lugares comunes y medias verdades. Género, nación y política en España no es un libro de autoayuda ni de *coaching*, como el lector ya sospechará a estas alturas. Lo que dijo William Butler Yeats de la poesía, que “no puede hacer que nada pase”, tal vez sea válido para cualquier libro, para cualquier proyecto intelectual. Pero no vamos a dejar de intentarlo.

PRIMERA PARTE
LAS MUJERES EN
LA SOCIEDAD Y EN LA POLÍTICA

CAPÍTULO 1

LAS MUJERES DEL CAMPO SE HAN OCUPADO DE LOS QUEHACERES DOMÉSTICOS Y DE AYUDAR EN LAS FAENAS AGRARIAS

ANA CABANA IGLESIA

Probablemente el título de este capítulo haga aflorar en el imaginario de quien lo lee la figura de una mujer —¿mayor y vestida de negro?— que no tiene descanso en una jornada definida por la salida y la puesta de sol. Sea por experiencia personal, y esa imagen mental refleje los rasgos de una abuela, o sea por la memoria visual de la cara de una actriz en un audiovisual —¿*Los santos inocentes*?—, lo que acostumbra a suceder es que las manos curtidas aparecen colocadas en espacios que podrían definirse como domésticos en tanto que confinados a las cuatro paredes de una casa —¿preparando comida?, ¿calcetando, quizás?—. Y si no es este el caso, la segunda opción más habitual es que esas manos se proyecten en alguna ocupación que remita inmediatamente al cuidado, ya sea de algún animal, planta del huerto o miembro de la familia. Y entre comidas y cuidados, colaboraban en el trabajo agrario. El corolario de ambas estampas es idéntico: que las actividades desarrolladas por mujeres del campo —etiqueta empleada como inclusiva de múltiples identidades: labradoras, ganaderas, jornaleras, artesanas, pastoras, etc.— parecieran no tener fin, pero han sido apreciadas como “ocupaciones”, como “labores” o como “ayuda”, pero no como “trabajo”.

Según la primera acepción del *Diccionario de la lengua española* de la RAE, trabajo es “la acción y el efecto de trabajar”, la segunda entrada, algo más restringida, lo define como “ocupación retribuida” y, más adelante, se determina que se trata del “esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, en contraposición a *capital*”. En las acepciones octava y novena se incluyen las ideas de “dificultad” y de “penalidad” y en la duodécima, aludiendo a cuando el sustantivo va en plural, a “miseria”. Si volvemos a las imágenes mentales mencionadas, es fácil darse cuenta de que cuando al sustantivo “trabajo” se une el sintagma preposicional “de las mujeres rurales” la primera y las últimas acepciones que reconoce el diccionario encajan perfectamente —la más genérica y aquellas que remiten a “pasar trabajos”—, pero no se vincula a la segunda, que es la que resulta decisiva en el contexto de una economía capitalista: sus actividades no implican retribución, no poseen, por tanto, valor. Y es por esta razón por lo que, cuando se hace referencia a su papel en la ejecución de tareas agrarias en las últimas centurias, aparecen conceptuadas con los términos de “ayuda familiar” o “colaboración” y, si se trata del desempeño de tareas tenidas por domésticas o de cuidado, se hace alusión a sus “deberes” o “sus labores”. Todos vocablos que evocan la condición de “esposas/hijas/hermanas de agricultor”, no a gestoras de una explotación ni a mano de obra remunerada en el sector agrario.

Resulta interesante reflexionar sobre la habitual ausencia de la palabra “trabajo” para referirse a cualquiera de los planos de la actividad femenina en el campo, que incluye fuentes documentales y los relatos memorísticos de las protagonistas. El lenguaje nunca es baladí, al contrario, es una de las construcciones sociales en las que mejor se advierte el poder. Los grupos dominantes son quienes se encargan de fabricar el lenguaje a medida de sus propios intereses. Y en un paradigma cultural definido por la imposición, desde la misma prehistoria, del sistema sexo-género (patriarcado), en el que la sexualidad biológica se convierte en un producto de la actividad humana (género) que sirve para organizar —y dividir— la sociedad, quienes han podido designar han sido los hombres. Ellos han sido los creadores de las construcciones sociales y de los convencionalismos con los que se piensan

tanto las realidades que les atañen como las que involucran a los sujetos que son dominados, léase, sobre todo, las mujeres. Valiéndose del control del lenguaje, se han designado y establecido relaciones jerárquicas en función de dichas palabras, que han profundizado en las desigualdades entre hombres y mujeres. Los términos que sirven para nombrar las actividades de las mujeres en el agro son un ejemplo paradigmático de la sanción de dicha desigualdad.

Si seguimos las conclusiones de las investigaciones realizadas en el campo de la economía feminista desde trabajos como los de Silvia Federici, el capitalismo tiene en el patriarcado uno de los sistemas de opresión de los que se vale para incrementar y acumular beneficios, pues consigue que parte de la población —las mujeres— generen un trabajo gratuito que resulta indispensable para su sostenimiento y viabilidad. El término que se emplea es el de “apropiación” del trabajo femenino. La economía neoclásica desde su posición hegemónica desde el siglo XIX asumió la separación que se había construido entre trabajo productivo y trabajo improductivo —que luego pasaría a denominarse reproductivo— y, como correlación, la divisoria entre espacio público y privado, decidiendo privilegiar el trabajo productivo desarrollado fuera del hogar, es decir, el que era remunerado. De esta manera, hasta bien entrada la década de los sesenta del siglo XX, la economía convencional circunscribió el trabajo al empleo y a la actividad que generaba valor de mercado (intercambio de bienes y servicios que adquieren valor monetario). Como correlato, las actividades que caían dentro de lo interpretado como reproductivo fueron menospreciadas y no fueron integradas bajo la categoría de “trabajo” —o el vocablo se combinó con el adjetivo “doméstico” para desvirtuarlo y naturalizarlo—, invisibilizándose. Esta distinción vino de la mano de la división por razón de sexo de las ocupaciones laborales, de modo que las que remitían a productivo quedaron en manos de varones (masculinización) y las consideradas improductivas o reproductivas en las de las mujeres (feminización).

La crítica a este arreglo dicotómico partió de señalar la pertinencia de incluir lo reproductivo en los análisis económicos, en línea con lo que reclamaban voces como la de Hannah Arendt en los años cincuenta. Desde la historia agraria o la geografía feminista se ha apuntado la pertinencia de otra

lectura: no se trata de tornar la mirada al ámbito desestimado y asumir la pervivencia de las dos esferas, sino de afirmar que en el trabajo en el agro no existía una clara limitación entre “lo productivo” y “lo reproductivo”. El trabajo reproductivo ha sido definido habitualmente como el conjunto de actividades del hogar cuyo fin es satisfacer las necesidades de la familia y garantizar la reproducción biológica y social de la fuerza de trabajo, y ha quedado históricamente reducido al espacio privado. Pero en el mundo rural esta noción no encaja, lo que tensiona estas categorías duales establecidas y asumidas por el liberalismo y el marxismo, y aun por una parte del feminismo ilustrado occidental. Algunas actividades consideradas reproductivas no se circunscribían en el pasado al ámbito doméstico (lavar ropa, cuidar niños pequeños, etc.) y viceversa, actividades consideradas productivas se desenvolvían dentro del hogar (producción artesanal). En el campo, la vida se desarrollaba en un espacio social, las unidades de explotación agrarias (como el caserío o *baserri* vasco, la casería asturiana, la masía catalana o la casa gallega) que incluían vivienda familiar, dependencias adyacentes (corrales, cuadras, pajares, bodegas, hornos, etc.) y tierras (cultivos, pastos, bosques), por lo que las fronteras entre vida y trabajo, y, por tanto, entre las actividades necesarias para sustentar ambas, han sido enormemente porosas.

Investigaciones recientes realizadas desde la perspectiva de la historia ambiental, los estudios feministas o la ecología política reivindican la centralidad del trabajo reproductivo que han desempeñado históricamente las mujeres del campo para el mantenimiento y la gestión de los agroecosistemas en el marco de producción ambientalmente sostenible. Ellas habrían sido “fuerzas de reproducción”, en palabras de Stefania Barca, y el valor de su labor se convertiría en incalculable e impagable en términos de remuneración monetaria. Tal trabajo reproductivo incluía la reproducción biológica y la actividad doméstica (muy exigentes ambas en tiempos), pero también la conservación de las infraestructuras que posibilitaban el cultivo o la transmisión de los conocimientos y saberes que sostenían la producción agraria (selección e intercambio de semillas, gestión de los recursos hídricos, salud de plantas, etc.). El giro interpretativo supone negar la dualidad productivo/reproductivo y juzgar que las actividades de cuidado deben dejar

de ser obviadas o secundarias para tornarse protagonistas de los análisis históricos.

Que se haya privilegiado el rol reproductivo en las representaciones sobre las mujeres del campo hasta el punto de llegar a invisibilizar la trascendencia económica del resto de su actividad laboral ha contribuido la hegemonía de la agricultura familiar. En España, al igual que en el resto de Europa, la agricultura familiar ha sido la fórmula de organización mayoritaria de la producción agraria y, en ella, relaciones familiares y laborales resultan concomitantes. Las explotaciones familiares siempre han sido dependientes de la mano de obra familiar, que ha perpetuado roles claramente diferenciados: el varón ejerce de jefe de la explotación como trasunto de su condición de titular de esta —y del ganapán urbano—, mientras que su esposa, igual que los hijos menores, ofrecen su mano de obra. En ningún caso la cónyuge dejaba rastro en títulos de propiedad o contratos laborales, por tanto, sus identidades no han podido construirse ni como mano de obra (empleadas) ni como propietarias, únicamente como “ayuda familiar”. Como consecuencia de ello, han sido sus “ocupaciones” reproductivas las que han servido para elemento clave en la construcción de identidades e ideales femeninos para las mujeres rurales. Dada la omnipresencia de la familia y la centralidad de la maternidad, y por extensión del cuidado de las personas de su unidad familiar o comunidad (maternidad entendida en términos sociales y no exclusivamente biológicos), como la función sobre la que debían pivotar sus tiempos, fue sencillo sobreponer una narrativa que relativizara y encubriera el trabajo productivo. Para ello bastó con describir como domésticas y como subordinadas las actividades agrarias que ellas desempeñaban y explicar que lo suyo eran “trabajos”, es decir, fatigas y miserias.

Trabajar en familia, sin sueldo ni título de propiedad de la explotación y dentro de los lindes de las explotaciones han sido las razones que han posibilitado hurtar a las mujeres su condición de trabajadoras comparables a los hombres. Y esta desigual valoración se ha reflejado en aspectos como que, ya en el marco del Estado del bienestar, no hayan conseguido generar los derechos —bajas o prestaciones— de los que sí ha podido disfrutar el varón

titular de la explotación, la mano de obra contratada o sus congéneres ocupadas en otros sectores económicos. Y de ahí que una de las reclamaciones capitales de las secretarías de mujeres de los sindicatos agrarios y de las asociaciones de mujeres del campo desde el final de la dictadura franquista haya sido una legislación que permitiera a las esposas compartir la titularidad de las explotaciones que estaban a nombre de sus maridos. La ley fue aprobada en octubre de 2011.

La ocultación del alcance económico del trabajo de las mujeres rurales es más fácil de explicar en el marco de la agricultura familiar que en otros sistemas agrarios donde ellas eran activos agrarios asalariados, en ocasiones ya desde el Antiguo Régimen. Su invisibilidad en este caso tiene que ver con la desvalorización social de sus faenas a causa de la vigencia de un tópico: su contribución era desestimable porque trabajaban solamente unos meses y a cambio de un salario muy bajo. Se generaba la idea de una “ayuda” o “colaboración” humilde a la renta final agraria y de una ocupación escamoteada al trabajo doméstico que no cabía apreciar. El cliché pervivió debido a la ausencia de estudios que dieran cuenta de la verdadera transcendencia de los salarios que ellas aportaban a la unidad familiar, tanto para su mantenimiento como para hacer viables, de haberlas, las pequeñas explotaciones familiares de las que salían para ganarse el jornal. Desde la historia agraria y económica se ha hecho un enorme esfuerzo en las últimas décadas por conocer las características de los mercados de trabajo femeninos en el ámbito rural. Ya fuera teniendo como objeto de estudio los trabajos agrarios (jornaleras o criadas), ya las ocupaciones que podrían llevarlas a abandonar el espacio rural o no (nodrizas, servicio doméstico, obreras industriales, etc.), se ha rebatido la imagen estereotipada de las mujeres del campo como sujetos limitados al ámbito de lo privado y lo doméstico, a la vez que se procedía a ponderar el impacto de sus sueldos en las economías familiares. La conclusión no deja lugar a dudas: su aporte ha resultado decisivo, pese a la estacionalidad de sus contratos y a la vigencia secular de la brecha salarial.

Las jornaleras que trabajaban en las viñas del Baix Ampordà en la década de 1830 cobraban el 25% del salario de sus homónimos varones; las que lo

hacían en Camp de Tarragona, casi un siglo después, percibían el 40% del de sus compañeros y al final del primer tercio del novecientos, el 68%. Si nos atenemos al Anuario Estadístico del INE de 1950, en 1939 el salario medio nominal de las obreras agrícolas españolas suponía del 56,36% al 64,05% del masculino y en 1948 oscilaba entre el 59,81 y el 66,34%. Andados los años, los convenios colectivos sindicales realizados por las hermandades sindicales de labradores y ganaderos sancionaban de nuevo la discriminación salarial. Por ejemplo, en el convenio de 1960 de Teba (Málaga), donde las jornaleras recogían olivas en invierno y arrancaban garbanzos durante el estío, se indica que su sueldo supondría el 80% del que percibirían los hombres, quedando equiparado el valor de su mano de obra al de la mano de obra infantil. El mismo estipendio se ratifica dos años después, a la vez que se apostilla que ellas no deberían contratarse en tanto que hubiera hombres en paro. Como han apuntado Cristina Borderías o Carmen Sarasúa, solo el peso del patriarcado en las relaciones sociales y económicas permite explicar esta discriminación salarial continuada.

Y si el género se consolidó en el tiempo como un condicionante salarial, no lo fue menos a la hora de dividir las faenas en función del género e identificar el mercado de trabajo femenino. La mano de obra agraria femenina se ocupaba de tareas calificadas socialmente como menores, es decir, las consideradas no cualificadas y peor pagadas, y, con frecuencia, llevadas a cabo a las órdenes de un varón. La narrativa de “lo pequeño” o de “cosas de mujeres” funcionará para jornaleras y para mujeres que se ocupan en explotaciones familiares y fluirán desde las más altas instancias políticas y económicas (discursos políticos y religiosos, literatura, instancias educativas, etc.). De hecho, el Ministerio de Agricultura, nacido en 1900 como una de las medidas para luchar contra los efectos de la crisis agraria finisecular, la asumirá recreando para las campesinas un discurso sobre los espacios y las faenas que les eran “propios” en función de su género. Y este discurso, replicado por intelectuales, prensa y personal encargado de dirigir los cambios económicos y técnicos del sector agrario y de dirigirse a la población rural (ingenieros, veterinarios, etc.) condicionó su representación social. Se recalcaron los vínculos entre sus ocupaciones y los atributos asociados a los

ideales del género femenino (cuidado, sensibilidad, detalle, esmero, pulcritud) o se establecieron analogías con lo doméstico (como coser, doblar, cuidar hijos, preparar la comida...) contradiciendo sin pudor la pericia o fuerza física que conllevaban estos trabajos agrícolas.

Bien es cierto que la distribución de las faenas ha de interpretarse, como todo lo que tiene que ver con la construcción del género, como susceptible de cambio, inversión o matización puntual. La alteración tiene un enorme coste social si es emprendida por las mujeres a nivel individual y sin consentimiento de las instancias de control social, pero no cuando son los poderes políticos o los económicos los que determinan su conveniencia. Si la mano de obra femenina era escasa, si mejoraba la consideración social de la faena —lo que venía usualmente asociado a asuntos como la subida de sueldo o la incorporación de tecnología— o si se reducía su estacionalidad, esta era susceptible de pasar de manos femeninas a masculinas. Bien al contrario, si las condiciones empeoraban, la actividad era susceptible de feminizarse. El análisis de libros de cuentas de las grandes propiedades mallorquinas a mediados del siglo XVII ha permitido constatar que la estacionalidad del trabajo de las jornaleras era menor de lo esperable debido a lo que acontecía en otros sistemas agrarios, pero también conocer cuáles eran los trabajos que las jornaleras desempeñaban y en cuáles no tenían presencia. Su mano de obra se destinaba a la recogida de aceitunas y algarrobas y nunca a trabajos de mantenimiento de la copa de los olivos y de las viñas. Tampoco se ocupaban del mantenimiento del suelo, salvo en una faena, entrecavar cereales y viñas. Ahora bien, el “pacto de género” se rompía en los meses en que la demanda de mano de obra femenina era tan alta que no había mujeres suficientes para sacar el trabajo adelante, por lo que los hombres se incorporaban a entrecavar viñas y cereal.

También hay abundante documentación que ha referido el fenómeno contrario. La ausencia o escasez de varones por razón de migración o por su dedicación a otras actividades económicas (pesca, industria, etc.), feminizaba actividades “tradicionalmente masculinas”. Es fácil toparse con comentarios sobre mujeres haciéndose cargo de “trabajos impropios de su sexo”. Francisco Feo Parrondo recoge en su estudio sobre los vaqueros de alzada

asturianos los comentarios de un médico de Tineo (Asturias) que apuntaba en 1907 que las mujeres del concejo “por falta de hombres hábiles y aunque causa lástima y espanto verlas dedicadas a trabajos impropios del sexo”, no tenían más remedio que asumir labores que demandaban tal fuerza física que se pensaban propias de varones. Mujeres embarazadas recorriendo largas distancias para ir a recoger forraje aun cuando la nieve les llegaba hasta las rodillas y luego teniendo que transportarlo a la casería, lo que suponía acarrear pesos de hasta 50 kilos sobre sus cabezas, es el ejemplo ofrecido por el galeno. La razón esgrimida para esa asunción era simple: no había otra mano de obra que pudiera suplir la de ellas; “si no quieren morir de hambre, ver vender sus fincas y la casa de sus padres”, escribía el doctor, deben afrontar “desde muy jóvenes tales sacrificios”. J. García Fernández incide en esta justificación. La explotación familiar asturiana “absorbía las fuerzas de toda la familia”, de modo que

el trabajo no respetaba ni siquiera a las mujeres, que además de ocuparse de las labores domésticas —poblar la morada— contribuían al trabajo de los campos casi en igual proporción que los hombres. En este aspecto, al contrario de lo que ocurría en otras regiones, la diferencia entre ambos sexos era escasa, quizá con la única excepción de que las tareas más duras se encomendaban a los hombres. Pero, en las demás, la mujer intervenía como un elemento de trabajo más, sin que esta participación en las labores agrícolas se considerase como deshonrosa o poco deseable. Era más bien una necesidad admitida por la costumbre.

El régimen franquista remachó el discurso de segregación del trabajo femenino con sus políticas y directrices para el campo, pero fotografías de época o el propio NO-DO, como ha examinado Victoria Martins, no dejaron de desvelar imágenes de mujeres que se afanaban en labores que estaban bien lejos de las indicadas por los cánones del arquetipo ideal de feminidad: arando los campos, tirando de yuntas, construyendo caminos, limpiando de piedras las tierras roturadas, construyendo muros, serrando madera, etc. Trabajaban “más que los hombres” y “en toda labor sin importar su condición de mujeres” eran comentarios usuales de viajeros por las comarcas agrarias —como lo habían sido desde hacía siglos— y también de informes internos del propio régimen que buscaban rectificar la promiscuidad laboral de los

agros y el embrutecimiento de los cuerpos femeninos. Así lo recogió la Sección Femenina en 1962 al referirse a las mujeres rurales de Zamora. Lo mismo acontecía en otras provincias y, sobre todo, en aquellas comarcas donde las tasas de emigración masculina las convertían en las cabezas de familia en la explotación familiar o la única mano de obra jornalera disponible. La desincentivación del trabajo agrario femenino por parte de las instituciones franquistas a través de discursos o leyes coercitivas se topaba con la exigencia de emplear todas las manos habidas para poder asegurar la supervivencia de las explotaciones familiares y con patronos que preferían la mano de obra femenina por barata y por estar despojada de derechos laborales. Es más, el propio Estado franquista, pese a los ideales reiterados, se sabía beneficiario de ese trabajo invisibilizado, igual que acontecía con el de las mujeres en las ciudades, por lo que lo consintió, pero se negó a reconocerlo y valorarlo en su justa medida. Lo denostó en el lenguaje y lo ocultó en censos y estadísticas.

El censo confeccionado por el INE en 1960 contabilizaba únicamente a las trabajadoras agrarias de municipios que superan los 100.000 habitantes, que eran los más urbanizados, y solo computa a las mujeres que acuden a las entrevistas a partir de las que elaboran las estadísticas, lo que puede dar idea del grado de falseamiento de los datos sobre el trabajo femenino. Para las provincias como las del sudeste andaluz, por ejemplo, el censo de 1960 recuenta 3.063 trabajadoras, mientras que el censo de mujeres campesinas de 1959 —elaborado por la Sección Femenina en un intento de dicha institución por hacer una demostración del peso numérico y económico del grupo sobre el que se ufanaba de tener ascendiente, pero sin trascendencia pública como el censo del INE— computa 30.021, diez veces más. La mayoría, dado el sistema agrario de la zona, eran jornaleras que, por obra y gracia de los registros oficiales, vieron como la predilecta etiqueta de “sus labores” suplantaba su condición de trabajadoras agrarias.

Además de invisibilizarlas, la dictadura demostró un enorme interés por moldear a las mujeres que habitaban y trabajaban el agro con el fin de consolidar la denominada ideología de la domesticidad. Se valió para ello de la acción de la Sección Femenina, desde los años cuarenta, y de las

ayudantes y agentes de economía doméstica de Extensión Agraria, a partir de los sesenta. Se creó toda una red de instituciones y proyectos de capacitación específica para ellas (cátedras ambulantes, escuelas hogar, etc.), cuyo propósito era imponer los parámetros de la moderna domesticidad emulando los modelos hegemónicos de feminidad urbanos (cuidado personal, atención a la prole, etc.). Los contenidos audiovisuales (documentales como los de José Neches, por ejemplo) o la prensa femenina resultaron decisivos en la diseminación de un ideal de feminidad rural. La *Revista de Extensión Agraria*, en 1963, llamaba a las mujeres a participar en “Mejora del hogar. Un original concurso de limpieza de cocinas”, y dos años después anunciaba para ellas un “Concurso de embellecimiento rural”. La meta última de todo este despliegue educativo y mediático era tratar de evitar que ellas abandonaran el campo, y para conseguirlo los discursos pivotaban cada vez más sobre ser ama de casa. Sus tiempos deberían llenarse de nuevas ocupaciones con las que se pretendía que alcanzaran las “comodidades domésticas” —desde la decoración al uso de electrodomésticos, pasando por la mejora de la habitabilidad de sus casas (contar con agua corriente, baños, etc.)— que las harían desistir de querer ir a las ciudades.

Investigaciones realizadas en el marco de la historia de las emigraciones y la sociología rural que se han ocupado del estudio del éxodo campo-ciudad integrando la perspectiva de género han demostrado que la salida de las mujeres del campo no menguó durante los últimos años de la dictadura y, ni siquiera, en las últimas décadas del siglo XX. Bien al contrario, ellas se convirtieron en protagonistas de ese trasvase de población, y dejar de ser “ayuda familiar” para granjearse la consideración de trabajadoras fue una de las razones esgrimidas para alejarse del agro.

BIBLIOGRAFÍA

- COLOMÉ FERRER, Josep (2024): “Trabajo agrario femenino en Cataluña, 1830-1930”, *Historia Agraria*, nº 93, pp. 1-31.
- GARCÍA RAMÓN, Maria Dolors *et al.* (1994): *Mujer y agricultura en España. Género, trabajo y contexto regional*, Vilassar de Mar, Oikos-Tau.
- GÓMEZ BENITO, Cristóbal y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Juan Jesús (eds.) (1997): *Agricultura y sociedad en la*

España contemporánea, Madrid, CIS-MAPA.

JOVER-ABELLÀ, Gabriel y PUJADAS-MORA, Joana María (2020): “Mercado de trabajo, género y especialización oleícola: Mallorca a mediados del siglo XVII”, *Historia Agraria*, nº 80, pp. 37-69.

ORTEGA LÓPEZ, Teresa María (2015): *Jornaleras, campesinas y agricultoras. La historia agraria desde una perspectiva de género*, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.

ORTEGA LÓPEZ, Teresa María y CABANA IGLESIA, Ana (2021): *Haberlas, haylas. Campesinas en la historia de España del siglo XX*, Madrid, Marcial Pons.

ORTEGA LÓPEZ, Teresa María *et al.* (2024): *Mujeres y agricultura en la política española del siglo XX*, Madrid, Cátedra.

CAPÍTULO 2

EN ESPAÑA, ‘LA MUJER’ NO TRABAJÓ HASTA LOS AÑOS SESENTA

MARTA DEL MORAL VARGAS

Una pregunta recurrente en las conversaciones de mi infancia se refería a las profesiones de nuestros padres y madres, y la respuesta, a veces repetida sobre estas, era “mi madre no trabaja”. Aunque esa afirmación se refería a que aquella mujer, en ese momento de su vida, no tenía un trabajo remunerado por cuenta ajena o propia, la etiquetaba en la inacción, debido a la forma más popular de entender la idea de trabajo. Desmontar la falsa creencia relativa a que, en España, “la mujer’ no trabajó hasta los años sesenta” pasa por destruir, al menos, tres ideas preconcebidas. La primera es la costumbre, popularizada en los medios de comunicación, de referirse al diverso colectivo integrado por las mujeres con la expresión “la mujer”. La segunda, es definir el “trabajo” según la fórmula acuñada por Karl Marx en 1867. La tercera es fruto del registro sesgado del trabajo femenino en las estadísticas oficiales. Las siguientes páginas se proponen dismantelar estas tres creencias, resumiendo algunos resultados de las investigaciones llevadas a cabo por las especialistas. Una vez que hayamos abordado las definiciones de los conceptos “mujer” y “trabajo”, el capítulo se referirá a los trabajos de las mujeres en España desde mediados del siglo XIX, en el tránsito a la modernidad, hasta los años sesenta del siglo XX. Con el término

“modernidad” nos referimos al sistema socioeconómico resultante de las transformaciones de la industrialización, la consolidación del sistema capitalista, el peso creciente de los sectores secundario y terciario en la economía y la extensión de la educación formal a capas cada vez más amplias de la sociedad. Además, nos centraremos preferentemente en los sectores industriales y, en menor medida, de servicios, ya que la historiadora Ana Cabana se ha ocupado en el capítulo anterior de desmontar el mito relativo a que “las mujeres rurales no trabajaban fuera del hogar”.

Cuando al comienzo de cada curso pregunto a mis estudiantes del Grado en Historia si existe alguna diferencia entre usar la expresión “mujer” o “mujeres”, la mayoría reconoce que nunca se lo han cuestionado. Tras unos minutos de reflexión, la respuesta general coincide en reconocer que la fórmula en plural tiene la capacidad de incluir realidades diversas. Además, argumentan que, habida cuenta de que en el pasado (al igual que en el presente), las mujeres han sido (y somos) muy distintas por diversas razones (edad, etnia, raza, clase social, nivel socioeconómico y de educación formal o informal, nacionalidad, estado civil, ideología, profesión, ser o no ser madre, etc.), utilizar la fórmula en singular da lugar a un reduccionismo de infinitas dimensiones simplificadoras. Sin embargo, al preguntarles si existe algún contexto en el que sea preferible usar la fórmula en singular, a la mayoría les resulta lógico adjudicar al singular un uso más ajustado a “un ideal de mujer” que, por definición, se formula como unívoco. Por ejemplo, las transformaciones económicas que experimentaron las sociedades europeas a partir del siglo XIX vinieron acompañadas de un ideal relativo a la división de funciones entre hombres y mujeres. En las sociedades preindustriales, cada hogar aunaba los trabajos de producción y reproducción que se repartían de formas diversas entre hombres y mujeres dependiendo de las regiones. La comunidad desempeñaba un papel clave en los cuidados y se compartían las tareas que garantizaban la supervivencia tales como la producción de alimentos mediante la agricultura y la ganadería. Sin embargo, paralelamente a la irrupción de las fábricas, el crecimiento urbano y la mecanización de las tareas agrícolas, se impuso el arquetipo según el cual a los varones les correspondía ganar un salario para mantener a su familia,

mientras que las mujeres debían cuidar de su esposo y de la prole confinadas en el hogar. Esta aspiración, inalcanzable para la mayor parte de las familias que poblaron la Europa decimonónica, se conoce como el “ideal de la domesticidad”. A pesar de que en la práctica solo las élites económicas pudieron ajustarse a este mismo ideal —si querían—, esa aspiración limitó de forma decisiva los comportamientos de las mujeres durante décadas. Por ejemplo, el derecho de familia y la normativa laboral se ajustaron en muchos países al par formado por el hombre “ganador de pan” y la mujer “ama de casa” a lo largo del siglo XIX y bien entrado el XX, como sucedió en España, que no terminó de desmantelarlo hasta la década de los ochenta.

Por otro lado, hemos de definir lo que entendemos por “trabajo”. Quizá para quien continúe leyendo estas líneas la respuesta es obvia y está bien asentada en la cultura popular. El trabajo es una actividad que realizamos a cambio de una recompensa, habitualmente en forma de dinero, y que da lugar a una ganancia de capital a quien la encarga y remunera. Esta es la definición consolidada por el primer tomo de *El capital* publicado por Karl Marx en 1867. Sin embargo, a partir de la década de los sesenta, el mundo académico comenzó a cuestionar esta conceptualización al tratar de interpretar el papel del trabajo doméstico en las economías capitalistas. Uno de los análisis más agudos fue el planteado por la socióloga francesa Christine Delphy que puso de manifiesto cómo la industrialización dio lugar a la consolidación de un modelo distintivo de explotación del trabajo de las mujeres por parte de los varones. A lo largo del siglo XIX, en el proceso codificador del derecho iniciado en Francia con el Código Civil de 1804, y su trasposición a la mayoría de los ordenamientos jurídicos del continente (Código Civil de 1889 en España), se legitimó por ley un modelo patriarcal según el cual el marido “debía proteger a la mujer” y esta “obedecer a su marido”. Así, en la transición hacia las economías capitalistas liberales, la explotación del trabajo de las mujeres quedaba en manos de los hombres y se trataba de restringirlas al trabajo doméstico. Como contrapartida, los varones habrían de ganar lo suficiente para garantizar la subsistencia de la familia. Delphy señaló que este sistema colocaba a las mujeres en una situación de dominación por parte de los varones que estaba por encima del capitalismo,

ya que todas las mujeres, independientemente de su clase social, quedaban sometidas a la misma legislación matrimonial. Según esta, las casadas no podrían vender, donar o hipotecar sus bienes, salvo los de consumo ordinario, ni contratar su trabajo o disponer de las ganancias derivadas de este sin la autorización expresa de su marido. La “lógica del patriarcado” se imponía sobre la “lógica capitalista” en el caso de las mujeres. En España, la vigencia del permiso marital y otras normativas que expulsaban a las mujeres de los mercados de trabajo hasta los años sesenta contribuyeron a reforzar el lugar común relativo a que “la mujer” no trabajó hasta entonces. Volveremos sobre ello más adelante.

Antes merece la pena considerar otro argumento sobre la polémica en torno al trabajo doméstico: su carácter necesario, señalado por Wally Seccombe. Esta socióloga argumentaba que el trabajo doméstico era fundamental ya que de él dependía no solo la reproducción biológica, sino también la renovación diaria de la fuerza de trabajo. Y es que si nadie se encargara de los llamados trabajos reproductivos, entendidos no solo como la gestación y primera crianza de un bebé, sino las recurrentes y nunca acabadas labores de limpieza, gestión y preparación de alimentos, atención a personas enfermas o dependientes, etc., la supervivencia de los grupos humanos quedaría en entredicho, por no hablar de la capacidad de un asalariado para retornar a su puesto de trabajo cada día. En las sociedades preindustriales esas tareas recaían en la comunidad y en la colaboración de los miembros de la familia. Las élites, por su parte, las delegaban en el servicio doméstico, las nodrizas y preceptores. Con la modernidad y la instauración del ideal de la domesticidad, los discursos médicos y los de los estadistas urgieron a las madres a responsabilizarse del cuidado bajo la supervisión del marido. Se inició así la transformación del modelo de división sexual del trabajo y una reducción de las personas dedicadas al sector del trabajo doméstico, muchas de ellas mujeres. Junto a ese proceso lento de concentración de los trabajos de cuidados en las madres tuvo lugar un fenómeno de desvalorización de estas tareas que culminó en el siglo XX y del que da buena muestra aquella afirmación de mis compañeras de clase sobre madres que “no hacían nada”, que “estaban en casa”. Esa desvalorización de

los cuidados es otra de las razones que explican el lugar común relativo a que “la mujer no trabajó hasta los sesenta”.

Almudena Hernando ha explicado las razones por las cuales la historia, es decir, el discurso que constituye la razón de ser de nuestras sociedades desde la industrialización, “no ha valorado las actividades de mantenimiento”. Hernando, arqueóloga especialista en el estudio de la identidad, argumenta que la disciplina de la historia es un discurso que incorpora la individualidad como elemento destacado del relato, a diferencia de los referentes míticos de las sociedades menos complejas, que se basan en las redes que unen al grupo. Las actividades de mantenimiento, como los relatos míticos de esas sociedades, sirven para reforzar los lazos entre sus miembros al proporcionar mecanismos esenciales para la supervivencia física y psíquica. Sin embargo, en las sociedades modernas, el relato histórico reemplaza al mito como discurso legitimador y, al estar basado en la individualidad, es incompatible con el reconocimiento del valor inherente para la supervivencia de las tareas (re)productivas o de mantenimiento. Según la autora, esa incoherencia motiva la ocultación de su importancia y, como consecuencia, la invisibilización de las personas a quienes están asignadas tales tareas. Como vimos más arriba, en las sociedades europeas desde mediados del siglo XIX, las tareas de mantenimiento se asignaron a las mujeres. La huelga de cuidados que, bajo el lema “cuando el trabajo de las mujeres nunca termina”, articuló con enorme éxito las reivindicaciones del 8 de marzo de 2018 en España puso de manifiesto que en el siglo XXI esas tareas se valoran cada vez menos. La pandemia que estalló dos años después lo evidenció aún más.

Hasta aquí, hemos comprobado cómo una definición estrecha del concepto de “trabajo” deja fuera multitud de actividades asignadas a las mujeres en exclusiva desde la modernidad. Sin embargo, ya hemos adelantado que en las sociedades europeas desde el siglo XIX eran muy pocas las familias que podían ajustarse al ideal de la domesticidad. Los bajos salarios obligaban a que casi todos sus miembros realizaran una labor remunerada para garantizar su supervivencia. Aun así, la hegemonía del ideal de la domesticidad no solo condicionó la legislación familiar y laboral, sino que sesgó la contabilidad de la actividad femenina desde los inicios de la estadística. La industrialización

en Europa no se produjo de igual forma ni con la misma intensidad en todo el continente, ni siquiera en cada Estado nación. En España, se inició en ciertas regiones desde mediados del XIX, como Barcelona y las poblaciones cercanas con sus factorías textiles, y no despegó en otras hasta entrado el XX dando lugar a diversos mercados de trabajo locales y regionales. Las primeras fases del desarrollo del textil en Europa implicaron tareas de hilado y tejido del algodón que llevaban a cabo mujeres de las zonas rurales cercanas a grandes núcleos como Rouen, Aberdeen o Augsburgo. Estos trabajos, sobre todo el hilado, esencial para el despegue de la primera industrialización, se realizaban en muchos casos a domicilio, es decir en las casas de las trabajadoras, y a destajo, esto es, que se retribuían de acuerdo con una cantidad de labor terminada, independientemente del número de horas que la trabajadora hubiera dedicado. Para los legisladores de la época y para los líderes varones del movimiento sindical, esta fórmula a domicilio encajaba a la perfección con el ideal de la domesticidad al mantener oculta la actividad remunerada realizada por las mujeres. Sin embargo, esto no impidió que, al igual que los varones, las mujeres se incorporaran a las fábricas desde los primeros momentos. No obstante, la pretendida objetividad de la estadística, ciencia al servicio del Estado nación para contabilizar sus fuerzas, quedó mediada también por el ideal de la domesticidad. Así, comprobamos como la idea preconcebida acerca de que la incorporación de las mujeres al trabajo extradoméstico tuvo lugar a partir de los años sesenta del siglo XX se basa en el subregistro de su actividad recogido por los censos nacionales. De acuerdo con esa fuente, las mujeres activas eran solo un 17,1% en 1877, un 15,2% en 1900, un 9,2% en 1930, un 15,8% en 1950, un 18,2% en 1960 y un 24,4% en 1970.

Frente a estas cifras, las investigaciones de historiadoras, sociólogas y economistas como Cristina Borderías, Enriqueta Camps, Pilar Pérez-Fuentes, Mercedes Arbaiza, Carmen Sarasúa o Luisa Muñoz Abeledo han demostrado para el caso español como los censos nacionales de población obviaron sistemáticamente las actividades productivas de las mujeres, especialmente de las casadas con hijos pequeños. El primer censo nacional elaborado en 1857 eximía a las mujeres casadas de declarar si ejercían una actividad

remunerada. Además, los datos se ofrecen por provincias, escondiendo la enorme complejidad local y regional de los mercados de trabajo en las décadas sucesivas. El resultado es un subregistro de la actividad femenina en general y la idea preconcebida según la cual una vez casadas y con descendencia, las obreras abandonaban los mercados de trabajo. La corrección de ese sesgo se ha realizado a partir de fuentes alternativas, solo disponibles en algunos casos. Diversos estudios regionales y locales ponen de manifiesto la ficción de las estadísticas que sostienen la afirmación que da título a este capítulo. Las mujeres, además de trabajar en todas las labores del sector primario, se emplearon en la enorme diversidad de oficios del secundario: en el textil y calzado, en la industria química, cerámica, la alimentación, el papel, tabaquera y sector terciario (en el servicio doméstico, el comercio, la enseñanza, la sanidad, las comunicaciones, etc.). En muchos casos, encadenaron tareas estacionales, que, por su carácter temporal, no eran tenidas en cuenta. Es bien conocido el fenómeno del subregistro del trabajo de las mujeres en el sector agropecuario, la artesanía y el comercio que solo eran viables gracias al esfuerzo compartido del núcleo familiar, si bien los censos y padrones solo reconocían al varón cabeza de familia como parte de la población activa. A las mujeres se las registraba con “sus labores” o “su sexo”, a pesar de ocuparse también de la actividad económica familiar. Hoy es práctica común corregir el subregistro en estos sectores de forma automática. El primer censo que recoge una tasa de población activa inferior al 50% en el sector agropecuario es el de 1930 (en 1940, tras la Guerra Civil, volvió a superar esa cifra), por lo que podemos inferir que, hasta entonces, la mitad de las trabajadoras se empleaban en este sector y, frecuentemente, lo hacían compatible con otras actividades remuneradas.

Sin embargo, ha costado más demostrar el subregistro de la actividad de las trabajadoras en el sector industrial. Por poner un ejemplo, la historiadora Cristina Borderías ha reconstruido las tasas de actividad femenina de 15 municipios catalanes en 1920. Según el censo nacional de esa fecha, la tasa de actividad femenina en Cataluña era de un 20%, si bien esta media se distribuía de forma poco homogénea. Los municipios de la muestra corresponden a las provincias de Barcelona, con un 30,46%, y Gerona, que

solo llegaba al 7,81%. Sin embargo, los censos obreros de las juntas locales de reformas sociales (1919-1923) han permitido a la autora demostrar que la tasa de actividad femenina entre las clases obreras de estos municipios oscilaba entre el 45,83 y 82,76%, poniendo de manifiesto su importancia para la supervivencia familiar y la enorme distancia con la tasa del censo nacional. Además, la investigación de Borderías ha desmantelado el prejuicio basado en los datos del padrón según el cual solo trabajaban el 25% de las obreras casadas y viudas. Sus datos indican que, en estas familias, tenían un trabajo remunerado el 82,88% de las solteras, el 67% de las casadas y el 40% de las viudas. Es decir, que allí donde el mercado de trabajo ofrecía oportunidades para las mujeres, estas las aprovechaban, aunque los censos prefirieran reflejar una ficción ajustada al ideal. Estrategias basadas en repartir los cuidados y el trabajo extradoméstico en equilibrios cambiantes entre los miembros de familias troncales formadas por abuelas, madres, hermanas e hijas hicieron posible mantener altas tasas de actividad femenina en diversas regiones de España.

El subregistro no afectó solo a la industria textil. Según la economista Luisa Muñoz Abeledo, en Galicia, donde predominaba la pluriactividad en las familias, las mujeres no abandonaban las actividades extradomésticas remuneradas en ninguna etapa de su vida. Por ejemplo, en Bueu (Pontevedra), se empleaban en la industria conservera, dando lugar a una tasa de actividad femenina del 74,86% en 1924. Se nos olvida que en España, al menos hasta finales de los años veinte, los salarios de los varones no alcanzaban a cubrir las necesidades económicas de las familias campesinas y obreras. Muñoz Abeledo y Borderías han demostrado que, en 1924, ni en Cataluña ni en Galicia, las familias trabajadoras se ajustaron al ideal del ganador de pan-ama de casa. Solo un 5% de los jornaleros, empleados en la construcción, oficios tradicionales y aquellos de mayor cualificación ganaban lo suficiente como para permitirse el lujo de no depender de las aportaciones salariales de sus esposas. Estas investigadoras, junto al economista Xavier Cussó, han demostrado que solo los canteros, metalúrgicos y albañiles de las capitales del norte del país ganaban lo justo para mantener a una familia de cinco miembros. Sin embargo, en 1929, ni siquiera esos profesionales

podieron cubrir con su jornal las necesidades básicas de una familia debido al deterioro de las condiciones económicas.

Hasta aquí, hemos abordado el subregistro de las obreras, pero desde las primeras décadas del siglo XX, comenzaron a abrirse puestos para “otras” mujeres con un mayor nivel de formación, que habían de garantizarse el sustento al no poder o no querer optar al matrimonio como estrategia de subsistencia. El desarrollo del sector servicios y de los empleos de oficina y la aprobación del Estatuto de funcionarios de 1918, que permitió a las mujeres optar a las escalas auxiliares de la Administración en igualdad con los hombres, dieron lugar a nuevas oportunidades laborales que se sumaron a la enseñanza y la sanidad. En 1930, un 13,12% de la población activa femenina se empleaba en el comercio, el transporte, la Administración pública, el clero y profesiones liberales. Aun así, la eliminación del permiso marital quedó pendiente al estallar la Guerra Civil, salvo en Cataluña, cuyo Estatuto lo hizo posible por ley en 1934. En 1938, en plena guerra, Franco no solo recuperó el Código Civil de 1889, sino que promulgó el Fuero del Trabajo según el cual, el Estado “libertar[ía] a la mujer casada del taller y de la fábrica” y garantizaría un salario suficiente al varón cabeza de familia. El cuadro se completó con la introducción de subsidios familiares y cláusulas de excedencia obligatoria para las trabajadoras al contraer matrimonio, con o sin compensación económica en forma de dote a cargo del Estado franquista. A pesar de ello, un buen número de sectores no impusieron esa excedencia obligatoria como el textil, que en Cataluña registró un aumento de trabajadoras durante el franquismo, calzado, artes gráficas, corcho, turrón, mazapán, panaderías, cajas de ahorro, entre otras. El intento de expulsar a las mujeres de los mercados de trabajo no surtió el efecto deseado como muestran las innumerables fuentes gráficas que atestiguan los trabajos realizados por las españolas en los años cuarenta y cincuenta o las investigaciones locales. Por ejemplo, Aritza Sáenz del Castillo ha corregido el subregistro de la actividad femenina en Vitoria, que en 1950 alcanzaría casi el 35% frente al 23,8% registrado por el recuento oficial.

Los cambios legislativos introducidos desde los sesenta, como la Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo

de la mujer, y los decretos de 1962 y 1970, que convertían en decisión de la trabajadora el cese de su actividad tras casarse, junto con las transformaciones económicas, sociales y de mentalidades vividas a lo largo de esta década, contribuyeron a consolidar la idea de que “la mujer se incorporaba entonces al mercado de trabajo”. Sin embargo, a pesar de las transformaciones económicas, las restricciones legislativas y el ideal del ganador de pan-ama de casa, las españolas aprovecharon las oportunidades ofrecidas por los diversos mercados de trabajo para garantizar su supervivencia y la de sus familias sin solución de continuidad antes y después de la industrialización.

BIBLIOGRAFÍA

- BORDERÍAS, Cristina (2011): “La reconstrucción de la actividad femenina en Cataluña *circa* 1920”, *Historia Contemporánea* 44, pp. 17-47.
- BORDERÍAS, Cristina y MUÑOZ-ALBELEDO, Luisa (2018): “¿Quién llevaba el pan a casa en la España de 1924? Trabajo y economías familiares de jornaleros y pescadores en Cataluña y Galicia”, *Revista de Historia Industrial*, nº 74, pp. 77-106.
- BORDERÍAS, Cristina; MUÑOZ-ALBELEDO, Luisa y CUSSÓ, Xavier (2021): “Breadwinners in Spanish Cities (1914-1930)”, *Revista de Historia Industrial*, vol. XXXI, nº 84, pp. 59-98.
- CARRASCO, Cristina; BORDERÍAS, Cristina y TORNÉS, Teresa (2019): *El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas*, Madrid, Los Libros de la Catarata.
- HERNANDO, Almudena (2005): “¿Por qué la historia no ha valorado las actividades de mantenimiento?”, *Treballs d'Arqueologia*, nº 11, pp. 115-133.
- NIELFA, Gloria (2003): “Trabajo, legislación y género en la España contemporánea: los orígenes de la legislación laboral”, en Carmen Sarasúa y Lina Gálvez (eds.), *¿Privilegios o eficiencia? Mujeres y hombres en los mercados de trabajo*, Alicante, Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones, pp. 39-53.
- SÁENZ DEL CASTILLO, Aritza (2015): *Las damas de hierro. La participación de las mujeres en el mercado laboral de Vitoria-Gasteiz (1950-1975)*, Bilbao, Universidad del País Vasco.

CAPÍTULO 3

¿EL FEMINISMO ESPAÑOL HA SIDO EXCLUSIVAMENTE DE IZQUIERDAS?

MARÍA PILAR SALOMÓN CHÉLIZ

El feminismo como movimiento social y político se ha desarrollado desde mediados del siglo XIX a la actualidad evolucionando y adaptándose a los contextos históricos y geográficos. A pesar de sus contribuciones fundamentales en la lucha por la igualdad de las mujeres y por la igualdad de género, el feminismo ha sido y es objeto de numerosos malentendidos y simplificaciones. Por ejemplo, es común pensar que el feminismo es un movimiento exclusivamente de izquierdas. En las siguientes páginas trataré de mostrar que ese lugar común contiene una visión distorsionada del feminismo histórico en España, que fue diverso tanto en sus enfoques como en sus protagonistas desde su nacimiento hasta los años treinta del siglo pasado.

Tanto si lo entendemos como lucha por los derechos de las mujeres o como movimiento político y social orientado a la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, el feminismo ha sido impulsado por personas y grupos con orientaciones políticas diversas, incluso desde tendencias conservadoras y liberales. El feminismo europeo de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, aunque a veces pusiera en práctica movilizaciones de corte radical, fue un movimiento de mujeres predominantemente de clases medias. Aunque

podían tener distintas adscripciones políticas, luchaban por los derechos civiles, sociales y políticos femeninos en unos países donde la creciente politización de las masas presionaba hacia una mayor democratización. En la medida en que las feministas de aquellas décadas demandaban derechos como mayor acceso a la educación, mejoras en el mercado laboral y participación política mediante el derecho al voto, solían formar parte de los sectores reformistas que abogaban por una democratización de los viejos sistemas políticos liberales, integrando también a las mujeres mediante el reconocimiento de sus derechos de ciudadanía política plena. La mayoría de ellas centraron su lucha en los derechos de las mujeres sin cuestionar las estructuras socioeconómicas capitalistas, lo que las diferenciaba claramente de aquellas que, desde el socialismo, el marxismo y el anarquismo abogaron además por profundas transformaciones revolucionarias, como Emma Goldman o Aleksandra Kolontái. En consecuencia, las relaciones entre el llamado feminismo burgués y el obrero fueron siempre difíciles.

En España, desde un punto de vista histórico, el feminismo encontró apoyo primordialmente en sectores progresistas, principalmente republicanos, aunque también la izquierda obrera contribuyó a su expansión. No fueron los únicos ámbitos desde donde se defendieron los derechos de las mujeres, como veremos más adelante. Dado que no hubo un potente movimiento sufragista a comienzos del XX, la historiografía española de los años setenta y ochenta del siglo pasado hizo hincapié en la debilidad del feminismo, atribuyéndolo a la escasez de clases medias, al predominio del conservadurismo político y al enorme poder sociocultural de la Iglesia.

Al igual que España, otros países europeos, especialmente en el mundo mediterráneo de tradición católica, carecían de potentes movimientos sufragistas en la primera década del siglo XX. Para valorar otras manifestaciones del feminismo histórico, fue necesario que la historiografía internacional empezara a poner de relieve que la lucha por los derechos de las mujeres y el avance en su consecución no siempre se habían realizado desde perspectivas igualitarias. Karen Offen destacó la importancia que había tenido en la Europa continental el feminismo relacional, que defendía los derechos de las mujeres basándose en unas capacidades consideradas

innatas a ellas y en la maternidad como mandato biológico. Las diferencias de género entre hombres y mujeres debían ser reconocidas y valoradas por igual por la sociedad, aceptando como derechos de las mujeres el mismo acceso a la educación que los hombres, el trabajo fuera del hogar y el sufragio. En la misma línea, el feminismo maternalista subrayaba la diferencia sexual de las mujeres y la relevancia social de la maternidad.

Siguiendo esta orientación, Mary Nash fue la primera en plantear la preeminencia en España de las demandas feministas propuestas desde planteamientos de la diferencia. La fuerte influencia de una educación basada en valores católicos explicaba el predominio de un feminismo social que se sustentaba en el discurso de la diferencia de género y en la aceptación de funciones sociales distintas para hombres y mujeres. Este planteamiento ha permitido reconocer la existencia de otros proyectos feministas que se asentaron sobre visiones de la feminidad que defendían tanto la diferencia sexual como la complementariedad de lo masculino y lo femenino a la hora de demandar derechos civiles, sociales y políticos para las mujeres. Ello no implica que en España no hubiera mujeres que defendieran principios igualitarios y discursos sobre la mujer emancipada. Además, los argumentos relacionales e individualistas no se presentaron como discursos completamente opuestos, ya que en las primeras décadas del siglo XX ambos enfoques a menudo se entremezclaban y complementaban, haciendo que las fronteras entre ellos resultaran difusas.

Concepción Arenal, pionera del feminismo en España en la segunda mitad del siglo XIX, fue una señora de fuertes convicciones católicas que abogó por el acceso de las mujeres a la educación y al trabajo. Partía de la convicción de la diferente naturaleza de hombres y mujeres y de la consiguiente distinción de deberes y responsabilidades en función del género, por lo que las mujeres debían ejercer su influencia en la sociedad desde el ámbito doméstico, como madres, hijas y esposas. Su ascendente se dejaría notar no solo entre quienes hablaron de feminismo católico desde principios de siglo XX. Dadas las estrechas relaciones que mantuvo con colaboradores de la Institución Libre de Enseñanza, su influjo trascendería también a quienes, desde presupuestos laicos, impulsaron y lideraron el feminismo en España.

El acceso de las mujeres a una educación de calidad, tanto para cambiar sus condiciones laborales y vitales como, sobre todo, para poder educar mejor a sus hijos, los futuros ciudadanos, fue la propuesta preferente de quienes desde distintas culturas políticas se plantearon favorecer la condición femenina a partir del Sexenio Democrático (1868-1874), ya fueran liberal-progresistas, republicanas o de izquierda obrera. De todos modos, la cuestión encontró muchas reticencias y resistencias, incluso entre los liberales avanzados, como puso de manifiesto Emilia Pardo Bazán, adalid del feminismo finisecular (por ejemplo, “La mujer española”, *La España Moderna*, nº XVII, mayo de 1890).

Concha Fagoaga destacó la herencia librepensadora del feminismo en nuestro país. En la España de finales del siglo XIX y principios del XX, muchas de las mujeres que promovían la emancipación femenina a través de la educación defendían un feminismo de corte librepensador. Su pensamiento integraba republicanism, laicismo, feminismo y obrerismo, según constató María Dolores Ramos. Mujeres como Rosario de Acuña, Belén Sárraga, Ángeles López de Ayala, Amalia Domingo Soler, las hermanas Amalia y Ana Carvia y Carmen de Burgos rompieron las restricciones tradicionales de la vida femenina, con su labor periodística, literaria o docente, y abrieron nuevas oportunidades para que las mujeres se incorporaran a la esfera pública. A ello contribuyeron también anarquistas como la maestra Antonia Maymón y la obrera Teresa Claramunt.

El debate sobre la educación de las mujeres no solo planteaba su nivel formativo o las profesiones a las que podrían acceder, sino que entraba de lleno en la aspiración central del feminismo, la emancipación de la mujer. La cuestión generaba controversia en todas las culturas políticas, como reflejó la enumeración de peligros que se asociaban a la lucha por los derechos de las mujeres: la disolución de la familia, las alteraciones para la identidad femenina, las perturbaciones en la esfera social y política, además de la dejación de funciones que correspondían a la mujer en la familia como esposa y madre.

Los republicanos reiteraban la necesidad de que las mujeres se emanciparan de la influencia clerical mediante la educación laica, lo que

favorecía el acomodo de las feministas en sus filas y la colaboración con ellas. Pero en la práctica, el anticlericalismo de los republicanos también presentó una cara menos amable para las demandas feministas. Como ha demostrado Luz Sanfeliu, se utilizó en muchos casos para justificar la falta de autonomía femenina: aunque el mensaje se centraba en alejar a las mujeres del confesionario, en el fondo perpetuaba la idea de que no podían decidir por sí mismas. Por su parte, para el mundo obrero socialista y anarquista la lucha feminista, con ser importante, no era considerada una prioridad, sino que formaba parte del proceso revolucionario general. Incluso se argumentaba que la lucha por los derechos de las mujeres como movimiento burgués podía desviar del verdadero objetivo del mundo del trabajo, la lucha sindical y revolucionaria.

A pesar de estas limitaciones, la herencia laicista del feminismo español propició un punto de encuentro entre mujeres vinculadas a distintas culturas políticas del republicanismo y de la izquierda obrera. Fue una lucha en el ámbito civil y social en defensa de la educación como un medio para acabar con la subordinación social de las mujeres, por lo que las feministas continuaron promoviendo la educación laica y luchando por la autonomía femenina, incluso después de que el enfrentamiento entre clericalismo y anticlericalismo perdiera la centralidad que había tenido en el debate político de la primera década del siglo XX.

Precisamente, la defensa de las posiciones confesionales en dicho conflicto contribuyó a favorecer la movilización de las mujeres católicas en el espacio público. Aunque Concepción Arenal había defendido que las mujeres no debían involucrarse directamente en la política pública, el mundo católico no fue ajeno a los debates que se plantearon en torno a la cuestión femenina desde finales del siglo XIX. Las propuestas en esta dirección vinieron principalmente desde el catolicismo social que abogaba por la acción social de las mujeres. María de Echarri, por ejemplo, una de las militantes católicas más caracterizadas de la época, se dedicó al proselitismo de los valores católicos, en especial a la educación y a la defensa de las mujeres obreras para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Como ella, otras mujeres como Dolors Monserdà, Teresa Luzzati, Carmen Cuesta de Muro o María de

Madariaga y Alonso también se moverían entre el catolicismo social y el feminismo católico.

La movilización de las mujeres católicas ha sido interpretada a menudo como un mero reflejo de la manipulación clerical o como un fenómeno en el que las mujeres actuaban en función de discursos ultraconservadores que las subordinaban. Sin embargo, otras perspectivas historiográficas destacan el papel activo que desempeñaron, subrayando que, a pesar de la dominación ejercida por la Iglesia, también encontraron en ella oportunidades de autonomía y acción que les permitieron acceder al ámbito público e incluso a la ciudadanía política. Según Inmaculada Blasco, las mujeres católicas de comienzos del siglo XX basaban su discurso en principios de dignidad igualitaria, complementariedad de papeles entre hombres y mujeres, superioridad moral femenina por su religiosidad y papel central de la maternidad social, extendiendo su papel maternal al ámbito público, lo que les confería el deber de expresarse públicamente en defensa de la religión y la Iglesia si las consideraban amenazadas. Bien por la vía de la movilización contrasecularizadora, bien por la de la acción social, la participación pública de las mujeres en el movimiento católico contribuyó a su politización, así como a la asimilación de ciertos elementos del discurso feminista que ganarían relevancia en los años veinte y treinta.

Fueran laicas o católicas, las feministas españolas solo consideraron el derecho al voto como objetivo preferente desde finales de la Primera Guerra Mundial. Por entonces, el sufragio femenino ganó impulso en numerosos países, lo que reflejó un cambio significativo en las percepciones sociales y políticas sobre el papel de las mujeres en reconocimiento por los sacrificios realizados durante la guerra, un cambio que llevó a integrarlas como ciudadanas en muchas de las democracias triunfantes.

El derecho a voto de las mujeres ya se había discutido en las Cortes españolas en 1877, en 1907 y en 1908, sin prosperar. En 1919, se presentó una enmienda que no llegó a votarse, pero generó algunas iniciativas sociales: por ejemplo, la Liga Española para el Progreso de la Mujer y la Cruzada de Mujeres Españolas solicitaron derechos civiles y políticos iguales a los hombres en 1920 y 1921. Por entonces, la Asociación Nacional de Mujeres

Españolas (ANME) fundada en 1918 era la principal organización que luchaba por la consecución del derecho al voto femenino. De carácter interclasista, estuvo liderada inicialmente por María Espinosa de los Monteros, que la había fundado junto a la periodista Consuelo González de Ramos (Celsia Regis). Sus integrantes se inclinaban por opciones políticas diversas: mientras las fundadoras colaborarían con la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, otra de sus integrantes, la periodista Isabel Oyarzábal, acabaría afiliándose al PSOE. De hecho, la ANME apoyaría la llegada de la República.

A comienzo de los años veinte, existían numerosas asociaciones de carácter feminista, como la Sociedad Progresiva Femenina o La Mujer del Porvenir, en Barcelona, o la Sociedad Concepción Arenal y la Liga Española para el Progreso de la Mujer, en Valencia, que, junto con la ANME coordinarían su actividad con la creación del Consejo Feminista de España en 1919. La Unión de Mujeres de España fue fundada a finales de 1918 por la marquesa del Ter junto con María Lejárraga (más conocida como María Martínez Sierra). En 1920, nació la Juventud Universitaria Femenina, ligada a la ANME. La Cruzada de Mujeres Españolas, creada por Carmen de Burgos, colaboró estrechamente con la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. Carmen Karr estableció Acción Femenina en Barcelona en 1921, de tendencia conservadora, pero reformista y profundamente sufragista. Las integrantes de estas y otras asociaciones constituían una élite femenina activa en la vida cultural y política de España, muchas de ellas comprometidas con el reformismo republicano y algunas con el socialismo. Demandaban igualdad de derechos políticos, civiles y sociales para las mujeres, aunque seguían recurriendo a argumentos propios del feminismo social y maternalista.

En aquellos años veinte en que la lucha por los derechos de las mujeres cobró mayor importancia en la esfera pública, católicas y socialistas compitieron por atraer y organizar a las mujeres. Ana Aguado señala que en esa década se intensificó el debate socialista sobre la participación política de las mujeres, en contraste con la movilización promovida por la Iglesia. En esta pugna, destacaron tanto mujeres intelectuales de clase media, como

Margarita Nelken (*La condición social de la mujer en España*, 1919), y otras de extracción popular, como María Cambrils (*Feminismo socialista*, 1925), quienes cuestionaron las propuestas del asociacionismo católico para mejorar tanto la cuestión social como la situación de las mujeres en España.

Por su parte, el asociacionismo católico femenino vivió una notable reestructuración con la fundación de Acción Católica de la Mujer en 1919, que promovería la acción social como vía para la intervención femenina en la sociedad. Como en la primera década de siglo, se seguía apelando a las mujeres como una fuerza moral capaz de liderar la recristianización y combatir la ignorancia, la irreligión y el indiferentismo. Sin embargo, el contexto había cambiado y las discusiones sobre los derechos civiles de las mujeres y el avance del feminismo impactaron en el asociacionismo católico. Las católicas debatieron y asumieron demandas relacionadas con sus derechos, como la educación, la capacitación profesional y la obtención de derechos civiles y políticos, incluido el voto, lo que representó toda una novedad en el ámbito católico.

Durante la dictadura de Primo de Rivera, algunas católicas intervinieron en la gestión de asuntos sociales en la Administración local y provincial, como la salud pública, la beneficencia, la cultura y la moralidad, invocando el maternalismo social. En 1924 se autorizó el voto para las elecciones municipales a las mujeres cabezas de familia, excluyendo a las casadas y las prostitutas, pero no llegó a ejercerse al no convocarse elecciones. Las mujeres sí pudieron votar en el plebiscito informal organizado por el dictador en 1926 para demostrar el apoyo popular. A pesar de ciertos avances en la visibilidad pública de las mujeres, los objetivos de las católicas permanecieron constantes: su implicación política se centró en la reconquista católica de una sociedad cada vez más secularizada, buscando detener el avance de ideologías que consideraban amenazadoras para el orden social y la Iglesia.

Con la proclamación de la República, las mujeres obtuvieron la ciudadanía política tan ansiada. El sufragio femenino fue aprobado por 161 votos a favor y 121 en contra, procedentes estos últimos sobre todo de los republicanos de izquierdas, los radicales y los radical-socialistas, los más declaradamente anticlericales. La implicación femenina en la política trascendió el simple

derecho al voto, manifestándose en un alto nivel de politización que dio lugar a la formación de numerosas organizaciones femeninas, como la Unión Republicana Femenina, fundada por Clara Campoamor, y la Asociación Femenina de Educación Cívica, establecida por María Lejárraga —por entonces, militante socialista—, que pretendían convertir a las mujeres en ciudadanas republicanas conscientes de sus derechos y responsabilidades.

Las feministas laicas sostenían que la República había sentado las bases para avanzar hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero se encontraron con la oposición de medios conservadores católicos y tradicionalistas, además de enfrentar resistencias desde dentro de la propia cultura política republicana. Dichas resistencias se fundamentaban en estereotipos de género perpetuados, entre otros, por un discurso anticlerical que asociaba el laicismo y el progreso con lo masculino, mientras relegaba lo femenino a la esfera privada, limitando la autonomía femenina. No eran estereotipos presentes solo en el republicanismo español. También existían en las culturas políticas republicanas francesas, por ejemplo, en las que, como señaló Joan W. Scott, el anticlericalismo contribuyó a abonar discursos antifeministas que contribuyeron a retrasar la aprobación del sufragio femenino en Francia hasta 1944.

La legislación laicista de la República generó una fuerte oposición de la jerarquía eclesiástica y de los católicos. La intensa politización de las mujeres católicas durante el bienio social-azañista se plasmó en movilizaciones en defensa de la Iglesia, de las órdenes religiosas y del modelo educativo y familiar confesionales. Según Inmaculada Blasco, muchas líderes planteaban el voto como un “deber de cristianas”, como un “arma política” que había que utilizar para apoyar las opciones políticas que defendieran la religión, la familia y el orden social. Dicha movilización alcanzaría su punto culminante en 1933: en la primavera, con el debate de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que prohibía la enseñanza de las órdenes religiosas, y luego durante la campaña para las elecciones generales de noviembre de 1933. Sin embargo, las católicas no aprovecharon estas oportunidades para profundizar en la lucha por los derechos de las mujeres, como habían hecho en la década anterior. En su lugar, promovieron

un discurso que enfatizaba el retorno de las mujeres a sus papeles tradicionales como madres y esposas, aunque sin renunciar a salir del hogar para luchar contra la legislación laicista republicana.

En conclusión, la idea de que el feminismo es un movimiento exclusivamente de izquierdas es una simplificación que no refleja la complejidad de su historia. Al analizar el feminismo histórico en España, por ejemplo, se comprueba que los sectores progresistas, especialmente los republicanos y la izquierda obrera, desempeñaron un papel fundamental en la lucha por los derechos de las mujeres. La herencia laica del feminismo español resulta incuestionable. Sin embargo, las investigaciones sobre el feminismo de la diferencia han permitido reconocer también la contribución de las feministas católicas a la lucha por los derechos de las mujeres y a su participación en la esfera pública. En el primer tercio del siglo XX, la creciente participación de las mujeres en la esfera pública se apoyó principalmente en principios del feminismo relacional y del maternalismo social, aunque esto no excluía los presupuestos de igualdad promovidos entre feministas laicistas. Esta dinámica no estuvo exenta de resistencias y contradicciones, evidentes sobre todo durante los años treinta, cuando las mujeres pudieron ejercer el derecho al sufragio reciente conquistado.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUADO, Ana y ORTEGA, Teresa María (eds.) (2011): *Feminismos y antifeminismos. Culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX*, Valencia, PUV.
- BLASCO, Inmaculada (2003): *Paradojas de la ortodoxia: política de masas y militancia católica femenina en España (1919-1939)*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.
- MORANT, Isabel (dir.) (2006): *Historia de las mujeres en España y América Latina*, vols. III y IV, Madrid, Cátedra.
- MOTILLA, María Jesús (2019): *Sufragismos y feminismos en Europa y América (1789-1948)*, Madrid, Síntesis.
- NASH, Mary (1994): “Experiencia y aprendizaje: la formación histórica de los feminismos en España”, *Historia Social*, nº 20, pp. 151-172.
- OFFEN, Karen (2015): *Feminismos europeos, 1700-1950* (original en inglés de 2000), Madrid, Akal.
- SANFELIU, Luz (2005): *[Republicanas](#): identidades de género en el blasquismo (1895-1910)*, Valencia, Universitat de València.

CAPÍTULO 4
EL FEMINISMO EN ESPAÑA EMPEZÓ
CON CLARA CAMPOAMOR

INMACULADA BLASCO HERRANZ

Ante la pregunta dirigida a mi alumnado de la asignatura de Historia Contemporánea de España impartida en el 4º curso del Grado de Historia “¿qué saben de la historia del feminismo en España?”, la respuesta generalizada es la siguiente: que Clara Campoamor consiguió el voto para las mujeres durante la Segunda República. El sentido común de gran parte de la población sobre este tema nos lleva directamente a 1931, cuando una de las primeras abogadas españolas defendió el voto femenino en un Parlamento en el que, como ella rememoraba tras el estallido de la guerra civil española, se había escenificado el día de la histeria masculina. Y se habían dado cita todos los argumentos entonces disponibles para rechazar el voto femenino, desde los eminentemente biologicistas hasta los que entrelazaban la manipulación de las mujeres por parte del clero con la falta de oportunidad (para una recién proclamada República aconfesional) o de preparación de las españolas para el ejercicio de la ciudadanía política. Para muchas personas el feminismo en España comienza con Clara Campoamor, en la Segunda República, y tiene sus precedentes a finales del siglo XIX en mujeres excepcionales como Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal. Por lo tanto, un primer lugar común es el de su inexistencia previa, salvo estas honrosas

excepciones. En parte, esta narrativa que simplifica un rico y complejo pasado es fruto de una concepción generalizada de la historia del feminismo para uso exclusivamente de feministas o, dicho de otro modo, que conocer la historia del feminismo (en España) solo interesa a quienes están implicadas o implicados en movimientos y luchas políticas feministas. Esto ha podido conducir a eludir, hasta muy recientemente, su incorporación como pensamiento, movimiento y objeto de debate que se entrelaza con otros fenómenos sociopolíticos de la contemporaneidad como la construcción de la nación y la reafirmación de los imperios, la expansión de las ideas liberales y los procesos de democratización y secularización, el surgimiento del reformismo social y la implantación del Estado del bienestar, las revoluciones socialistas o el crecimiento y triunfo de idearios autoritarios y fascistas durante el primer tercio del siglo XX.

El término feminismo irrumpió en España, procedente de Francia, de la mano del krauso-institucionista Adolfo Posada (*Feminismo*, 1899), de las pedagogas Alice Pestana y Concepción Saiz y de la anarcosindicalista Soledad Gustavo. Con él, se desencadenó un continuado debate a lo largo del primer tercio del siglo XX, que circuló a través de publicaciones, conferencias y artículos en prensa, y con él se fue configurando un asociacionismo diverso cuyas conexiones transnacionales solo recientemente estamos empezando a vislumbrar. Centrarnos en este primer tercio del siglo XX no presupone que a lo largo del siglo XIX, y con sustento en una raíz ilustrada que formuló ideas de igualdad entre los sexos, no tuvieran lugar también ricos, complejos y no lineales debates sobre las capacidades y la misión de las mujeres, que se vertebraron en torno a conceptos como esclavitud o emancipación, como han señalado Mónica Burguera, María Cruz Romeo o Gloria Espigado, entre otras historiadoras. Más aún, nuestra mirada al feminismo del primer tercio del siglo XX debería estar atenta a los potenciales legados decimonónicos, entre los cuales destacan los forjados durante el Sexenio Democrático, un periodo especialmente significativo, en el que se pusieron en marcha iniciativas que se han considerado pioneras en el feminismo, como las que surgieron del entorno intelectual y pedagógico krausista en materia de educación de las mujeres.

No obstante, la introducción del término feminismo se produjo en un contexto de crisis (nacional) finisecular y de formulación de alternativas regeneracionistas para la nación, que también lo fue de un incipiente proceso de democratización política, con todas sus imperfecciones (no olvidemos que el sufragio universal masculino fue aprobado en 1891, algo impensable para una buena parte de los liberales durante buena parte del siglo XIX). Todo ello fue crucial para alimentar un profuso debate sobre qué era el feminismo, si había feminismo en España y, en su caso, cuál era el feminismo que mejor se ajustaba al carácter nacional, entre otras cuestiones. Cualquiera que se acerque a las diversas fuentes primarias del periodo que transcurre entre 1900 y 1931 tiene un arduo trabajo por delante, porque el asunto importó mucho a las y los coetáneos, que sintieron la necesidad de fijar su significado y de concretar el contenido de la agenda feminista, y gran parte de esta historia la constituyó la disputa por apropiarse del término y por abanderar el “verdadero feminismo” (que en muchas ocasiones consistió en aquel más ajustado a la idiosincrasia nacional). Desde luego, la Primera Guerra Mundial no hizo sino ahondar en esta polémica, a la que se sumaron ansiedades derivadas de los efectos de la guerra sobre las relaciones de género y de la emergencia de idearios fascistas, entre otros grupos, temerosos de un desorden de género que, a sus ojos, la “mujer moderna” y el feminismo representaban.

Las primeras investigaciones realizadas desde los años setenta del siglo pasado, en el marco de una entonces incipiente historia de las mujeres, ya habían iluminado la existencia de debates y activismos feministas que, desde finales del siglo XIX, habían reclamado el derecho a la educación, el acceso a profesiones y la reforma del código civil (el de 1889, que rescató la dictadura franquista, consideraba a la mujer casada sin capacidad jurídica). Y, a partir de la segunda década del siglo, de un asociacionismo de ámbito local, que en 1919 se enunció como “nacional” con la ANME. Mostraron, en definitiva, que antes de Clara Campoamor hubo feminismo en España. Sin embargo, durante varias décadas, la historiografía española sobre feminismo histórico lo había evaluado a través del tamiz del atraso y la debilidad, probablemente como resultado de la reproducción de la metanarrativa del fracaso que

vertebró la investigación histórica acerca de otros aspectos de la España contemporánea como la construcción nacional, la revolución liberal o el desarrollo del capitalismo liberal-moderno. En efecto, si se comparaba con el ideal de movimiento feminista por antonomasia, el movimiento sufragista británico o el estadounidense, el feminismo español era no solo débil, sino también imperfecto. En definitiva, había feminismo en la España del primer tercio del siglo XX, pero era, como todo lo demás, débil, atrasado, inacabado y, en todo caso, diferente al del resto de los Estados nación occidentales. De manera implícita, se valoraba la experiencia histórica nacional en razón de un modelo exitoso, al que se tenía como referente y pauta a seguir. Ya en los años noventa del siglo pasado, la historiadora Mary Nash cuestionó estas apreciaciones, no tanto a través de la crítica a los presupuestos de la debilidad de los procesos de “modernización” hispanos, sino inspirándose en el concepto de experiencia de Edward Palmer Thompson y apoyándose en la investigación realizada por la historiadora norteamericana Karen Offen sobre Europa. Esta última apuntaba a la existencia de un feminismo “relacional”, que habría sido más característico de la Europa continental y que habría coexistido con un feminismo “individualista” imperante en el mundo anglosajón (una no puede dejar de ver aquí la traslación del debate coetáneo entre igualdad y diferencia en el feminismo). El primero sería el que habría triunfado en España, dando lugar a un feminismo social que no colocó el sufragio entre sus reivindicaciones, salvo excepciones, hasta los años veinte, y que centró sus demandas en alcanzar mejoras sociales para las mujeres (educación, igualdad salarial, protección de la maternidad, etc.), en un país donde un sistema electoral edificado sobre el fraude electoral había “viciado” el voto, como decía Adolfo Posada en 1899, y donde eran hegemónicos unos esquemas culturales de género basados en la domesticidad (aunque ahora sabemos que esto no fue exclusivo del caso español). No obstante, una distinción tan tajante entre feminismo anglosajón y continental podía conducir a minimizar el hecho de que ideas de igualdad y diferencia entre los sexos no siempre se presentaron tan nítidamente separadas (ni en España ni en ningún otro Estado nación europeo). Más bien al contrario, se entrelazaron en un mismo sujeto feminista, como había insinuado ya la propia Offen, y

pusieron en evidencia, desde otra aproximación teórica, el análisis de la historia del feminismo francés por parte de Joan W. Scott, a través del significativo título *Only Paradoxes to Offer*.

Además de dejar de equiparar feminismo con sufragismo, desembarazarse de las valoraciones de debilidad posibilitó descubrir, en las décadas siguientes, un rico y diverso mundo de ideas y activismos feministas por parte de una muy abundante literatura histórica (muy prolífica en el estudio del asociacionismo y en la publicación de biografías) que contrasta con el casi completo desconocimiento ciudadano del fenómeno. Este mundo se había articulado a comienzos de siglo no tanto en torno a un asociacionismo eminentemente feminista, es decir, que situaba la cuestión de los derechos (civiles, políticos y sociales) de las mujeres en el centro, sino más bien en diferentes plataformas ideológicas (krausismo, republicanism, socialismo, catolicismo-social, catalanismo político, anarcosindicalismo), en las que especialmente mujeres en ellos implicadas o por ellos interpeladas, en mayor o menor medida, pensaron y discutieron la “cuestión femenina” desde los marcos de sentido de dichos idearios. Visiones no siempre coincidentes sobre lo que era el feminismo derivaron en disputas entre estos diferentes posicionamientos. La propia identificación como feministas, al asociarse con un movimiento e ideario de ascendencia burguesa, fue objeto de controversia entre militantes socialistas (que, solo a mediados de los años veinte, a través de la pluma de María Cambrils, formularon un “feminismo socialista”) y entre reconocidas figuras anarquistas (que cuestionaron, como lo hizo Federica Montseny, en sintonía con Emma Goldman, los “caminos erróneos” que estaba adoptando el feminismo, aludiendo a la frivolidad de la emancipación de la mujer moderna y al exceso de confianza en la ley-Estado de un feminismo “político”). Estas tensiones y conflictos entre diferentes feminismos insertos en corrientes ideológicas en ocasiones abiertamente enfrentadas afectaron a la posibilidad de participar en un movimiento internacional (la Asociación Internacional por el Sufragio de las Mujeres) y llevaron al fracaso los intentos de crear una unión del feminismo español.

A pesar de entender el feminismo de diferente forma y de las tensiones que suscitó la identificación con este en algunos casos, estas culturas políticas

compartieron una misma noción de “mujeres” articulada en torno a una muy particular comprensión de la maternidad, entendida ahora como función social, que había sido resignificada desde las coordenadas del reformismo social y de la regeneración nacional, y que constituyó la base argumental para la formulación de sus demandas de igualdad y de derechos. La reconstrucción histórica del debate feminista y de la compleja formación de los sujetos feministas a lo largo del primer tercio del siglo XX requiere, por lo tanto, no solo de un análisis de cómo las mujeres movilizadas en diferentes ideologías y movimientos sociales articularon un feminismo siempre adjetivado. Sería pertinente analizar los marcos de posibilidad (epistémica) o, dicho de otro modo, las coordenadas de sentido y los debates en cuyo seno se fue definiendo y redefiniendo tanto el feminismo como la diferencia sexual sobre la que se sustentó y también las maneras en las que las feministas alteraron estos límites. Uno de ellos fue el discurso del positivismo científico, que, entrelazado con el médico-biológico, tal y como concluyó Nerea Aresti, enfatizó la inferioridad física y moral de las mujeres. Esto empujó a las primeras “feministas” a insistir en la diferencia para rebatir la supuesta inferioridad y a recurrir (salvo aquellas vinculadas al librepensamiento y al laicismo) al catolicismo, en particular a la idea de la igualdad de las almas, frente a la misoginia de los discursos científicos.

Pero hubo otros marcos discursivos, que tuvieron además implicaciones prácticas evidentes, como el de la reforma social y la regeneración nacional, en cuyas coordenadas la diferencia sexual fue reformulada en un sentido que condicionó la elaboración de la agenda feminista y el propio significado que muchas atribuyeron al feminismo. La nueva concepción de sociedad, bajo el influjo de visiones organicistas, que había surgido a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX al calor de las ciencias sociales emergentes, de la medicina social y del higienismo, como una entidad susceptible de reforma (y a finales del siglo XIX, necesitada de intervención estatal), la hizo profundamente generizada. Que en la sociedad existía una diferenciación de funciones sociales derivadas directamente de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres estuvo en el corazón del pensamiento social del momento. Y permeó a amplios sectores del feminismo, que compartieron la idea de que

la maternidad era la función social principal de las mujeres y abogaron por su reconocimiento público. El papel asignado a las mujeres y que el feminismo se abrogó fue el de reformar la sociedad proyectando sobre ella cualidades femeninas hasta ahora malgastadas en la vida doméstica. De ahí que el feminismo se autoconcibió, al menos hasta los años veinte, como un movimiento de regeneración social que debía alentar en las mujeres el sentido y la responsabilidad social. La agenda feminista fue en gran medida definida en razón de esta concepción del feminismo como un reformismo social y un proyecto civilizatorio, que compensaría los excesos cometidos por los hombres en el pasado: protección de la maternidad (obrero), protección de la infancia, educación de las mujeres para ejercer una maternidad más consciente y lucha contra la prostitución y contra la guerra. Como se preguntaba María Vinyals en 1918, “¿por qué no decir la verdad y demostrar que el ‘credo’ feminista tiene por principio la protección a la mujer en sus funciones más augustas: lactancia y maternidad?”. La petición de derechos civiles y políticos se sustentó generalmente en esta diferencia de funciones sociales, al plantearse como objetivo último cumplir mejor los deberes sociales que dichas funciones llevaban aparejadas y corregir la civilización masculina. El voto femenino, se imaginaba, serviría para que los Gobiernos prestaran atención a los problemas sociales y para eliminar las guerras. La igualdad civil se planteó con el objetivo de alcanzar la armonía en el matrimonio (heterosexual) para procurar el equilibrio social imaginado en ese proyecto reformista.

Desde luego, no podemos olvidar que este proyecto de reforma social se declinó en términos nacionales. A nadie se le escapa el impacto de 1898 como crisis de identidad nacional, en pleno auge de las naciones imperiales en competencia, que impulsaron un imperialismo de compensación en Marruecos. De manera que, tal y como señala Lucy Delap en su *Feminisms. A Global History* (2020), el debate feminista se nacionalizó, al tiempo que se desplegó en un espacio transnacional y transimperial, que albergó implícita o explícitamente jerarquías y lógicas coloniales. En un periodo en el que se experimentó un salto cualitativo en medios de transporte y comunicación, que facilitaron las interconexiones y la circulación de ideas y personas, los

debates feministas circularon en una dinámica y cada vez más rápida red de intercambios, traducciones, encuentros, correspondencia y amistad. Por poner solo algunos ejemplos, entre otros muchos: la sufragista finlandesa Alexandra Gripenberg visitó España en 1906; Carmen de Burgos encontró inspiración en su amiga portuguesa Ana de Castro Osório para fundar la Cruzada de Mujeres Españolas; laicistas como Belén Sárraga visitaron varias veces, obligadas por sus exilios políticos, América Latina; la médica argentina Paulina Luisi y la reformista social mexicana Elena Landázuri impartieron varias conferencias en España durante los años veinte; la feminista socialista checoslovaca Františka Plamínková fue invitada a España en 1927.

En definitiva, al reflexionar sobre qué conocemos sobre feminismo histórico en España, nos encontramos con capas de sentidos comunes de los que nuestras fuentes primarias nos invitan a sospechar y que la realización de investigaciones rigurosas está contribuyendo a desbancar. Al transitar este camino, se nos revela, en lugar de un erial, una imagen de profusión, de riqueza del debate feminista desde que irrumpió el término en España, alimentado en un marco transnacional y global de circulación de ideas y que recibió impulso tras la Primera Guerra Mundial y las aprobaciones del sufragio femenino. Una segunda capa remite a una comprensión del feminismo español que rehúye evaluarlo en clave de éxito o fracaso y que intenta explicarlo en el seno de unas particularidades nacionales que no pueden desvincularse de procesos europeos más amplios. Esto sin obviar que, como otros feminismos coetáneos, buscó también definirse en términos nacionales, al mismo tiempo que quedó inserto en un debate feminista que viajó transnacionalmente y entre los imperios y sus colonias. Un último sentido común, y este es uno que comparte con una aproximación muy extendida al pasado, tiende a ver el feminismo y a las feministas en marcos contextuales que son como escenarios en los cuales mujeres y hombres como nosotras y nosotros formularon sus demandas, escenarios que les afectaron pero que no los constituyeron como sujetos políticos ni modelaron sus peticiones. Lo que subyace también a estos sentidos comunes es una manera de pensar en el pasado como un lugar exento de complejidad y muy similar al

presente que habitamos, también a veces sin reflexionar sobre las densidades de nuestros contextos, que nos modelan y nos hacen devenir lo que somos.

BIBLIOGRAFÍA

ARESTI, Nerea (2023): “Beyond Models: The Many Paths to Feminism in Modern Spain”, *European History Quarterly*, vol. 52, n° 2, pp. 277-296.

ANDREU-MIRALLES, Xavier y BURGUERA, Mónica (2023): “Culturas políticas e identidades colectivas después del giro cultural: nación y género en la historiografía española contemporánea”, *Historia y Política*, n° 50, pp. 71-104.

DELAP, Lucy (2020): *Feminisms. A Global History*, Chicago, The University of Chicago Press.

NASH, Mary (1994): “Experiencia y aprendizaje: la formación histórica de los feminismos en España”, *Historia Social*, n° 20, pp. 151-172.

OFFEN, Karen (2000): *Feminismos europeos, 1700-1950*, Madrid, Akal.

SCOTT, Joan W. (1996): *Only Paradoxes to Offer. French feminists and the rights of man*, Cambridge, Harvard University Press.

CAPÍTULO 5

MUJER Y SUFRAGIO EN LA SEGUNDA REPÚBLICA: ¿UN VOTO DE IDA Y VUELTA?

SOFÍA RODRÍGUEZ SERRADOR

Con el titular “¡Mujeres, a votar!” la revista *Estampa* se hacía eco de la invitación hecha por la República a las españolas, por primera vez y en unas elecciones municipales, de ejercer el sufragio otorgado por la Constitución de 1931. Si bien estos comicios dieron los primeros síntomas de un cambio en la orientación del voto de la sociedad española, con la victoria del centro-derecha y la derecha en las elecciones generales, celebradas a finales de 1933, se responsabilizó a las mujeres de los resultados electorales. Fue entonces cuando se extendió el mito de la República perdida a causa de las mujeres, cuestionándose la pertinencia del sufragio femenino.

La Segunda República, a través del articulado constitucional, había convertido en una realidad la igualdad legal entre los sexos. Sin embargo, el pleno reconocimiento de los derechos políticos no había sido fácil. Los debates constitucionales sobre el sufragio femenino reflejaron los prejuicios y el arraigo de concepciones estereotipadas sobre la identidad política femenina. Es conocido el desencuentro de opinión entre las diputadas Clara Campoamor, del Partido Republicano Radical (PRR), y Victoria Kent, del Partido Republicano Radical Socialista (PRRS). Campoamor defendió el pleno reconocimiento del sufragio en la Constitución y terminaría sosteniendo

su criterio en contra del posicionamiento de sus propios compañeros de partido. Kent argumentó la necesidad de posponer el sufragio femenino por el temor de una falta de identificación —y comprensión— de las mujeres ante el nuevo sistema democrático. Muchos de los parlamentarios republicanos dieron muestras inequívocas de su desconfianza ante la participación política de las mujeres, a las que consideraban vinculadas con la religión, la Iglesia y una mentalidad tradicional. El miedo de estos sectores responde a una conceptualización de las mujeres como electoras preferentes de las agrupaciones derechistas y contrarias a la República, por lo que su participación política se concebía como una amenaza para el nuevo régimen democrático. Una actitud atravesada también por la misoginia al presuponer que la mujer carecía de autonomía en sus decisiones y que vivía sometida a la voluntad del marido o del sacerdote. No fueron pocos los políticos que consideraron a las mujeres incapaces de comprender el funcionamiento político moderno o de valorar el alcance de su participación en él, y mucho menos apreciar los beneficios que suponía para ellas la República naciente. Tópicos repetidos desde la centuria anterior y que importantes sectores liberales y progresistas también habían asumido. Finalmente, el 1 de octubre se reconoció a las mujeres como electoras —en igualdad de condiciones que los hombres—, por 161 votos a favor, frente a 121 en contra. El resultado fue posible, como reconoció Campoamor, por el compromiso del PSOE con el sufragio femenino, integrado en su programa político desde 1918. Los socialistas aportaron 84 de los votos favorables, el 52,17% del total, y por ello fueron criticados en la prensa por diputados del PRRS —que, pese al nombre, no era socialista, ni tenía vinculación con el PSOE— y el PRR. Ambas agrupaciones habían votado en contra, salvo dos notables excepciones, Luis López Dóriga (PRRS) y Clara Campoamor. Si bien la principal oposición al sufragio femenino provino de los partidos republicanos, también se sumaron diputados de las derechas.

Parte de los discursos que se habían expuesto en la Cámara parecían ignorar el cambio en los modelos de género acontecido en la década de los años veinte —influenciado por un movimiento feminista en expansión— y que se había caracterizado también por un interés creciente en las mujeres de

las cuestiones políticas. Las reticencias de muchos diputados a la extensión del sufragio fueron criticadas tempranamente por el movimiento feminista. Pero también por destacados miembros del Gobierno, como Manuel Azaña, que desdeñaba la idea del hundimiento de la república a manos del electorado femenino, afirmando que si de ello dependía la supervenía del nuevo Gobierno, es que habían alumbrado una República “anémica y agusanada”.

Aunque el sufragio femenino no conllevó una masiva incorporación de las mujeres a la vida política, los partidos buscaron atraerse al nuevo electorado. Con anterioridad, encontramos formaciones políticas para su integración exclusiva, como las agrupaciones femeninas socialistas —que comenzaron su andadura a inicios de siglo XX y continuaron su actividad en el periodo republicano— o una vertiente republicana representada por las Damas Rojas en la década de los años diez. Pero fue a partir del reconocimiento del sufragio cuando las diferentes agrupaciones políticas se dirigieron por primera vez a las mujeres —potenciales votantes— con discursos específicos sobre lo que consideraban sus intereses preferentes, buscando su militancia a través de diversas estrategias. El número de afiliadas a partidos y sindicatos creció durante el quinquenio republicano y su presencia en la opinión pública se multiplicó, especialmente ante las campañas electorales. Agrupaciones femeninas/feministas activas desde los años veinte y que habían reivindicado el voto femenino, junto a otras nuevas fundadas en esta etapa —como la Asociación Femenina de Educación Cívica, impulsada por María Lejárraga—, se orientaron a unas dinámicas y relaciones políticas más profundas, en estrecho contacto muchas veces con el republicanismo y el socialismo. También en las derechas hubo una notable organización formal de las católicas, creando secciones femeninas de Acción Popular, CEDA, Renovación Española o Comunión Tradicionalista, e incluso de Falange Española. Los intentos de dinamización político-social de las católicas se tradujeron en un liderazgo femenino que encarnaron, entre otras militantes, Pilar Velasco, Pilar Careaga o María Rosa Urraca Pastor y que se presentaban como un modelo de modernidad femenina —imbuido de valores católicos y patrióticos— alternativo al encarnado por las mujeres republicanas y

socialistas.

El voto femenino se estrenaba en las elecciones municipales parciales de abril. Si bien afectaba únicamente al 10% del cuerpo electoral, las mujeres estuvieron muy activas en la campaña electoral. Unión Republicana Femenina (URF), agrupación impulsada por Clara Campoamor para fomentar la participación política de las mujeres, animó a otras agrupaciones femeninas y a los partidos republicanos a integrar en sus listas a líderes destacadas para arrastrar el voto femenino. URF se ofreció a impulsar estas candidaturas, a la vez que instruyó a afiliadas e interesadas en el funcionamiento electoral. Los resultados arrojados por las urnas desterraron, por el momento, las suspicacias sobre el sufragio femenino. URF defendió que el voto femenino “había servido [...] a la República”, celebrando, como apuntara la periodista y política Eulalia Vicenti, que no habían ocurrido “los fieros males atribuidos por muchos republicanos”.

La expectación creció en las elecciones generales de noviembre, las primeras en las que pudieron votar todas las españolas. Los comicios se habían convocado para el 19 de noviembre en primera vuelta y para el 3 de diciembre en segunda. Y la cuestión sobre la orientación política femenina atrajo una parte del debate político, en una coyuntura muy diferente a la de 1931, pero que reproducía el argumentario de los debates constitucionales. Aunque la prensa daba cobertura a la novedad del voto femenino y sus posibles consecuencias, el interés que suscitaba su participación no tuvo el mismo reflejo en todos los medios de comunicación. *Estampa* recogía la presencia femenina en mítines de diversa orientación política y su participación como propagandistas de toda condición. En algunos medios el seguimiento de las candidaturas femeninas y los análisis del impacto del sufragio femenino, incluso en su mismo marco ideológico, fue anecdótico. Aunque es notable que muchas veces las campañas de republicanos y socialistas dedicadas a las mujeres no tuvieron cabida en los diarios derechistas.

La sociedad daba muestras de un más que posible cambio de tendencia política, los partidos de izquierdas no parecían ser capaces de garantizar los votos —desunidos y desgastados por la práctica gubernativa— y la sintonía y

el entendimiento que habían permitido los Gobiernos del primer bienio estaba rota. Con una ley electoral que premiaba las mayorías, algunos políticos y medios periodísticos predijeron los resultados electorales, contribuyendo a un discurso derrotista que empezaba a responsabilizar a las mujeres de la situación futura. *Heraldo de Madrid* preguntaba a Campoamor si el voto de la mujer sería “extremista de la derecha o de la izquierda” como apuntaban muchos. La respuesta perfilaba a la mujer como un “elemento moderado”, temerosa de la izquierda “por lo que lleva en sí de aventura y de incógnita” y de la derecha “por lo que esta ofrece de oscuro, de impreciso”. Consuelo Berges, vicepresidenta de URF, denunciaba la “absurda conducta de todos los partidos que lloran y se lamentan de que el [voto] femenino va a ser extremista”, pero no procuraban atraerse a las electoras. Efectivamente, los partidos republicanos apenas hicieron una campaña específicamente orientada a las mujeres, mientras los socialistas —a través de mítines o conferencias con sus líderes más destacadas— y las derechas —repartiendo propagandas en las calles y en visitas a domicilio— se preocupaban de atraer el voto femenino.

Los partidos —y la prensa— de derechas apelaron en su propaganda a la obligación moral de las mujeres de ejercer el voto para proteger a su familia, a sus hijos y a la Iglesia. Una argumentación simplista que apelaba a lo emocional, pero que era repetida constantemente. Mientras, las izquierdas hicieron de la equiparación de los derechos femeninos por la República el eje de su campaña. Aunque también en ocasiones se apeló a su participación en calidad de “madres”, con un argumentario similar, a veces, a las opciones derechistas. Desde URF señalaban la necesidad de que todas las candidaturas republicanas integrasen en sus filas a mujeres, para actuar de “imán”, a la vez que animaban a las mujeres a votar “en republicano” porque a la República debían el reconocimiento de sus derechos civiles y sociales. Pocos días antes del encuentro electoral llegó a plantearse en la prensa la pertinencia de presentar papeletas diferenciadas para las mujeres, con la intención de saber definitivamente la opinión política de las españolas, idea que se desechó por ser anticonstitucional.

En cuanto a la actitud femenina ante las elecciones, la prensa señalaba su

“entusiasmo” durante la jornada electoral, actuando incluso en ese día como “voceadoras”. La Casa del Pueblo de Madrid concitó a lo largo de la jornada una amplia concurrencia femenina, dentro y fuera del edificio. También predominaban las mujeres en las colas electorales en las diversas provincias, como recogían los periódicos.

El país y los líderes políticos se mantuvieron expectantes ante los resultados electorales. Las urnas arrojaron el innegable triunfo de las opciones conservadoras de derechas, favorecidas por la ley electoral. Pero el cambio de tendencia política no se explicaba exclusivamente por el voto femenino. Aunque las mujeres pudieran haberse decantado más por agrupaciones derechistas, ellas solas no bastaban para explicar los resultados. Más bien eran fruto de una conjunción de elementos como el desencanto de la población con las medidas gubernamentales y el desgaste de la coalición republicana-socialista, tanto por la labor de gobierno como por cuestiones internas de las diferentes agrupaciones. A ello había que sumar que el Partido Radical estaba descontento con el peso en el Gobierno previo y que había experimentado en esos dos años un giro conservador que lo distanciaba de sus antiguos compañeros, acercándose a las derechas. Además, la CEDA —como coalición derechista— fue capaz de articular una campaña electoral sin precedentes, con medios modernos y con una participación femenina más que notable. De este modo, el contexto político y social favorecía a las derechas.

En cuanto a las candidatas presentadas, no parece que tuvieran una capacidad de atracción determinante para el electorado femenino. Aunque habían concurrido a la primera vuelta un total de 42 candidatas, por 33 circunscripciones —tres veces más que en junio de 1931—, únicamente llegaron al Parlamento cinco mujeres. Por el PSOE, Margarita Nelken (que repetía), Matilde de la Torre, Veneranda García-Blanco y María de la O Lejárraga. Por la CEDA, entraba la leonesa Francisca Bohigas. Estos resultados apuntaban la ausencia de un apoyo del electorado a las candidaturas femeninas por motivos de género. La elección de diputado no vino determinada ni por el sexo del votante ni del candidato, sino por una identificación ideológica más general. Además, las mujeres obtuvieron un

número de votos similar a los de sus compañeros de lista.

Al conocerse los resultados electorales —109 diputados para la CEDA y 100 para el PRR—, llegaron las primeras reacciones. Inicialmente incluso aquellos que habían manifestado sus reticencias ante el voto femenino, como Indalecio Prieto, descartaron que la victoria de las derechas se debiera exclusivamente a las mujeres. *Heraldo de Madrid* responsabilizaba de la derrota a la “división suicida de los republicanos y de todas las fuerzas de la izquierda”, pero también reconocía que las derechas habían contado con el voto femenino, señalando que la mujer aún no se había “emancipado del influjo de la sacristía”. El republicano Martínez Barrio, presidente del Gobierno convocante, atribuía los resultados al sufragio femenino, que comparó con un navajazo a la República, pero también al sistema electoral. Alejandro Lerroux achacaba el triunfo primero a las mujeres, que, en su opinión, habían sido ofendidas en sus sentimientos por las políticas del primer bienio, y luego a los errores del Gobierno.

Pero pronto muchos medios republicanos, liberales o progresistas responsabilizaron a las mujeres de los resultados electorales, dictaminando que la concesión del sufragio femenino había sido precipitada. En este sentido se manifestó *Heraldo de Madrid*. La participación femenina empezaba a ser una excusa que justificaba el éxito de los partidos de derecha y centro-derecha en las elecciones. *Ahora* señalaba que la “señora de clase media [...] que no entiende nada de política, pero que quiere por encima de todo que haya paz y orden [...] es la que ha decidido el rumbo que ha de seguir España”. Otros medios conservadores también adscribían el éxito electoral a las mujeres, capitalizando el éxito a través de una identidad religiosa femenina, pero también minimizaban su papel protagónico. Sin embargo, ambos sectores contribuyeron a asentar la idea colectiva de que las artífices de los resultados habían sido las mujeres. Importaba más señalar un culpable que entender el proceso conducente al vuelco electoral.

Mientras, los sectores feministas buscaron desligar desde el primer momento el resultado electoral del protagonismo femenino y denunciaron las acusaciones en su contra. Un día después de las elecciones, Paulina Luisi, médica, prestigiosa sufragista uruguaya y líder de la Asociación Internacional

Pro Voto de la Mujer, afirmaba en la sede de URF que si bien las mujeres “no habían influido en el resultado de la votación”, se iba a “achacar” a las mujeres “la ventaja numérica [de] los candidatos”. Desde URF se recordaba la casi inexistente propaganda republicana en los entornos rurales —donde la asociación había participado de la inspección electoral— a diferencia de la socialista y la católica. Enseguida se sucedieron los ataques —especialmente por parte de republicanos y socialistas— contra Clara Campoamor, que ofreció rápidamente un análisis comparativo de los datos electorales de 1931 y de 1933 para explicar que el factor decisivo del fracaso de las izquierdas era consecuencia de la falta de unión entre republicanos y socialistas, y de la conjunción de las candidaturas de derechas. Otros analistas y publicaciones también señalaron como otros factores pesaron mucho más que el sufragio femenino en el cambio de orientación del voto, aclarando que el voto no se había fragmentado en función del sexo y que los varones tampoco sostuvieron las mismas opciones políticas que en 1931. Aunque el análisis de Campoamor era precipitado —e incompleto—, acertaba al señalar algunos de los elementos que explicaban el triunfo electoral de las derechas, especialmente al insistir en una confluencia de factores.

Realmente es muy difícil precisar hasta qué punto los resultados electorales son achacables al electorado femenino, independientemente de que las fuentes de la época señalen la enorme participación femenina en las urnas. Es muy complicado ofrecer pruebas irrefutables de las consecuencias de sus votos, en uno u otro sentido. A los elementos condicionadores del voto que hemos señalado habría que sumar la abstención, más alta entre las clases trabajadoras, y especialmente notable en los sectores anarcosindicalistas, lo que favorecería a los sectores conservadores. No puede obviarse tampoco el proceso generalizado de derechización de la sociedad en la coyuntura del año 1933 o el auge de las tendencias fascistas en Europa. Únicamente el análisis minucioso de los resultados electorales —incompleto todavía— sería válido para confirmar la tan manida afirmación de que las mujeres votaron a las derechas en las elecciones de 1933 provocando el cambio de Gobierno. Esta idea pervivió durante un tiempo en la historiografía a fuerza de repetir los mismos discursos, ya fueran vindicativos o condenatorios, entonados en aquel

año.

En última instancia, no fue una victoria atribuible al voto masculino o femenino como elementos separados pero concluyentes. Si bien algunos de los análisis electorales apuntan a unos datos que permiten deducir, en los distritos estudiados, que las mujeres votasen en mayor número opciones derechistas, la victoria de esas candidaturas también procede de la retirada del apoyo masculino a opciones izquierdistas. El comportamiento político de los electores se vio condicionado con mayor profundidad por la coyuntura del momento, su propio contexto socioeconómico y las identidades políticas individuales y no solo por las religiosas o de género.

Sin embargo, el protagonismo concedido al sufragio femenino en 1933 no jugó el mismo papel en las elecciones de 1936. Preguntada de nuevo por el voto de las mujeres, Campoamor respondía que, por sentido de la responsabilidad y para la salvación del país y de la República, debía ser un voto de izquierdas —como el de los hombres—, pero también porque debía a la República las conquistas legales y sociales de las que disfrutaba.

El triunfo del Frente Popular no fue mayoritariamente atribuido al voto de las mujeres. El cambio en los resultados electorales —con el hundimiento del PRR— de las últimas elecciones del quinquenio estaba igualmente relacionado con un cambio generalizado en la orientación del voto. Y también con el modo en que la ley electoral favorecía las mayorías. Los resultados de estas elecciones permiten entender que en el electorado femenino podían pesar más los argumentos de pertenencia a una clase social y las identidades políticas, al margen nuevamente de las religiosas o de género.

Y aunque esta cita electoral no desencadenó un cuestionamiento sobre el sufragio femenino, las izquierdas buscaron rendir un homenaje a las mujeres por su contribución a la victoria electoral. De este modo, fueron varias las celebraciones organizadas en el país en torno al 8 de marzo. Estos actos fueron dedicados al reconocimiento a la “mujer republicana”, a las “mujeres de izquierdas” o a la “mujer antifascista”, dependiendo de la localidad y periódico que diese la noticia. En el homenaje de Madrid alguna pancarta instaba a agradecer el voto a Clara Campoamor y Dolores Ibárruri; al dirigirse a las mujeres allí presentes, les recordó que habían demostrado ser dignas del

derecho reconocido en la Constitución.

El golpe de Estado de julio de 1936 interrumpió el proceso modernizador y democrático iniciado en el país cinco años antes. No puede aventurarse la evolución del comportamiento político de las mujeres ni los debates sobre su maduración política de haber continuado la República. Pero es justo recordar que no era responsabilidad de las mujeres sostener un resultado electoral concreto. Igualmente, que todos los debates —coetáneos y posteriores— en torno a su comprensión del contexto político y social pasan de puntillas por una realidad obvia, el derecho de las mujeres a apoyar o poner en duda al Gobierno de turno. Igual que sus compañeros masculinos.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUADO, Ana (2005): “Entre lo público y lo privado: sufragio y divorcio en la Segunda República”, *Ayer*, nº 60, pp. 105-134.
- ÁLVAREZ, Jagoba (2023): *El PSOE y el sufragio femenino*, Madrid, Libros.com.
- CAMINO RODRÍGUEZ, Alejandro (2017): “La influencia de las mujeres españolas en los resultados de las elecciones generales de 1933”, *Revista Historia Autónoma*, nº 11, pp. 179-197.
- CAMPOAMOR, Clara (2018 [1935]): *Mi pecado mortal: el voto femenino y yo*, Sevilla, Renacimiento.
- ORTEGA LÓPEZ, Teresa M.; AGUADO HIGÓN, Ana y HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena (2019): *Mujeres, dones, mulleres, emakumeak: estudios sobre historia de las mujeres y del género*, Madrid, Cátedra.
- SANFELIU, Luz y AGUADO, Ana (2021): “Sociabilidad política y asociacionismo femenino como prácticas de ciudadanía (1931-1933)”, *Historia Social*, nº 100, pp. 117-136.
- VILLALAÍN GARCÍA, Pablo (2000): *Mujer y política. La participación de las mujeres en las elecciones generales celebradas en Madrid durante la II República (1931-1936)*, Madrid, Instituto de la Mujer.

SEGUNDA PARTE
IDENTIDAD ESPAÑOLA
Y CUESTIÓN NACIONAL

CAPÍTULO 6

EL ESPAÑOL NUNCA FUE UNA LENGUA IMPUESTA

AURELIO MARTÍ BATALLER

“Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo, por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes”. Estas palabras fueron pronunciadas por Juan Carlos I, el 23 de abril de 2001, en la entrega del Premio Cervantes a Francisco Umbral, galardonado en el año 2000. El discurso del entonces titular de la Corona generó mucho descontento, fundamentalmente, en los territorios de lenguas distintas a la castellana en el Estado español, al margen de lo que en tierras americanas se pudo opinar.

Aquella afirmación forma parte del prejuicio cultural propio del nacionalismo lingüístico español castellanista sobre la superioridad de la lengua castellana respecto a las lenguas con las que ha convivido en la península ibérica. Y para lo que aquí interesa, además, reproduce un lugar común en la historia de España que entiende como natural, lógica y positiva, deseada y deseable la extensión del castellano y la desaparición del resto de lenguas en España (y en los territorios americanos y africanos).

Una mirada a la historia contemporánea española evidencia la falsedad del mito. Las relaciones entre lenguas, y comunidades lingüísticas, son

relaciones de poder en cuyo desarrollo en la historia española las instituciones estatales no han sido, ni son, neutrales en ningún caso. Ello y no las propiedades intrínsecas de ninguna lengua explican la minorización y progresiva desaparición de las lenguas no castellanas en España. El marco jurídico-político puede no ser único factor, ni el determinante, en los procesos de sustitución lingüística y cabe dar cuenta de las dinámicas sociales. Sin embargo, no se puede obviar su incidencia, especialmente en materia de represión de la diversidad —probablemente más que en su promoción—. En la situación de contacto y conflicto lingüístico, el Estado ha favorecido la imposición del castellano, ha desamparado el resto de lenguas, ha contribuido a la extensión del bilingüismo y de la diglosia entre las comunidades lingüísticas no castellanas y, finalmente, ha alimentado los procesos de sustitución lingüística. Por el contrario, ha imposibilitado y problematizado la política lingüística de protección y recuperación de las lenguas no castellanas. Para demostrar todo ello, a continuación, se centra la explicación en el caso del catalán, aunque no exclusivamente, por ser la principal lengua en número de hablantes y extensión territorial tras el castellano, y representar en buena medida el enemigo interior del nacionalismo español.

Al asomar la época contemporánea, la diversidad lingüística en España no contaba con reconocimiento alguno. El catalán, el gallego, el euskera o el asturleonés, por citar algunas lenguas, estaban proscritas de la Administración del Estado. Tras la guerra de sucesión, a lo largo del siglo XVIII, el castellano se había confirmado como única lengua de la Administración. El Estado borbónico, además, fomentó la codificación del castellano, amparando a la Real Academia Española (1714), mediante la cual se promovió en aquella centuria una mayor fijación ortográfica y gramatical, y la extensión de sus usos en ámbitos de la vida pública, como la enseñanza o en el teatro, de cuyas representaciones se dictó la prohibición en lengua no castellana en 1799 —algo sobre lo que se incidió en 1801 y todavía en 1867, cuando se prohibieron obras exclusivamente escritas en “lenguas de las provincias”—. Aquella extensión del castellano como lengua del poder, asociada al Estado, se sumó a su consideración de lengua de cultura entre

buena parte de la élite ilustrada de la segunda mitad del XVIII. Con todo ello se contribuyó a aumentar la castellanización lingüística de las élites sociales del conjunto de la monarquía. Ahora bien, y a pesar de que ya se habrían iniciado procesos de sustitución lingüística —caso del sur del antiguo reino de Valencia— a la llegada del siglo XIX, más allá de las minorías políticas, culturales y económicas, las lenguas no castellanas eran el vehículo de comunicación habitual y de expresión de la cultura oral para la enorme mayoría social. En cierto modo, persistían las comunidades lingüísticas catalana o gallega, por ejemplo, como realidades monolingües, aunque la diglosia estaba ya muy presente entre las élites.

Seguidamente, la construcción del Estado liberal se produjo de la mano de la promoción del castellano como única lengua reconocida y de la marginación del resto de los usos públicos. Así sucedió muy rápidamente en la educación, materia en la cual en 1838 el reglamento escolar de enseñanza primaria elemental ordenaba la enseñanza únicamente de gramática y ortografía en castellano, en 1845 el Plan Pidal situaba dicho idioma como eje de la educación secundaria junto al latín, mientras que en 1849 el reglamento para las escuelas normales superiores y elementales de instrucción pública disponía igualmente la enseñanza exclusivamente del castellano. Este camino siguió la conocida como ley Moyano (1857), la principal ley en materia educativa del siglo XIX —vigente durante parte del XX—, que prescribía la enseñanza de la gramática y la ortografía castellanas exclusivamente y explicitaba que únicamente aquellas debían seguirse en la enseñanza pública.

Más allá del campo educativo, el reconocimiento del castellano se implantó también en ámbitos como el derecho notarial, mediante la ley de 1862, que mandaba la redacción exclusiva en lengua castellana, y el Registro Civil, para el cual el Gobierno de la Primera República en 1870 impuso la obligación de disponer de traducción certificada al castellano de cualquier documento en idioma extranjero o “dialecto del país” —lo que equiparaba su condición en este aspecto—.

Esta imposición derivaba de la consideración del castellano como única lengua nacional, a pesar de que ninguna de las constituciones liberales del

siglo XIX —efectivamente vigentes o no— se hubiera pronunciado explícitamente sobre la cuestión lingüística. No fue necesario, pues la herencia del Estado borbónico absolutista en este sentido no fue cuestionada en dicha centuria. Amparado por el poder simbólico y efectivo del Estado nación, el castellano ampliaba sus funciones y usos a nivel público administrativo y económico, pero también adquiría prestigio como lengua nacional y de cultura, mediante la cual se recibía mayoritariamente la cultura escrita europea. Así, en los territorios con lengua propia extendió su presencia y se difundieron los comportamientos diglósicos en aquellas comunidades lingüísticas.

Prueba y motor de esta dinámica fue el proceso de institucionalización cultural nacional española, en el cual el Estado mantuvo un papel material de activo promotor, así como de polo de atracción social. En este sentido, las reales academias, los ateneos y las sociedades de Amigos del País funcionaron como entramado de referencia, conectado a los centros de investigación y producción cultural, mayoritariamente alimentado por un nacionalismo español de corte castellanista lingüístico e histórico. El acceso y participación en estas instituciones y el consiguiente reconocimiento social pasaban necesariamente por el uso del castellano escrito y, con ello, de la aceptación de las lógicas de subordinación lingüística.

El periodo de la Restauración marcó una aceleración en la castellanización, *de facto* y *de iure*, de las poblaciones con lengua propia. La voluntad del Estado era clara y no se modificó. La eclosión del regionalismo político y del nacionalismo alternativo puso en duda aquel orden de cosas. Derivado solo indirectamente de las dinámicas de la *Renaixença* de la segunda mitad del siglo XIX, el regionalismo abanderó la reivindicación de la descentralización política del Estado monárquico y del reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística. La punta de lanza de todo ello fue el catalanismo, que trató de impulsar la normativización y normalización lingüística a través de la consecución de espacios de autogobierno. El resultado más visible fue la constitución de la *Mancomunitat de Catalunya* (1914-1925), mediante la cual se dio un primer cobijo institucional a la difusión y consolidación de la normativa gramatical elaborada por Pompeu

Fabra (1912) y la ortografía desarrollada desde el Institut d'Estudis Catalans (1913). A pesar de las limitaciones presupuestarias y de competencias, y de su escasa duración temporal, por primera vez en la época contemporánea, el catalán contaba con un imprescindible apoyo institucional para sancionar la normativa lingüística y poder hacer frente a los procesos de dialectalización, fragmentación y confusión normativa que venía experimentando.

Sin embargo, la dictadura de Miguel Primo de Rivera frenó aquellas iniciativas y cualquier otra propuesta y reivindicación similar planteada fuera de Cataluña. De hecho, se dio una intensificación en la persecución de las lenguas no castellanas, particularmente del catalán. Pocos días después del golpe de Estado, el real decreto “contra el separatismo”, entre otras cosas, prohibía en los actos públicos e institucionales el uso de otro idioma que no fuera el castellano, considerado único idioma oficial del Estado, en el cual debían redactarse los libros oficiales de registros y actas. A continuación, una real orden imponía la obligación de enseñar únicamente en castellano en toda España y, sucesivamente, se publicaron circulares y órdenes diversas reiterando la prohibición del uso en las escuelas de cualquiera que no fuera “el idioma patrio”, es decir el castellano, y de la debida vigilancia por parte de los inspectores y las consiguientes sanciones a los docentes que incumplieran lo dispuesto. Además, la Mancomunitat de Catalunya fue disuelta en 1925. En conjunto, nuevamente, la pluralidad lingüística en España fue negada institucionalmente y perseguida jurídicamente, aunque, en consonancia con la vocación folklorista y de apropiación regional del proyecto autoritario primorriverista, entre noviembre de 1926 y mayo de 1930 estuvieron en vigor sillones en la RAE para los idiomas gallego, euskera y catalán —con su variante valenciana y mallorquina—.

Así pues, hasta la tercera década del siglo XX, apenas se dio cobertura a la diversidad lingüística en España, mediante la combinación de una negación implícita y la explícita marginación y prohibición en favor del castellano. Evidentemente, esta última supuso la vía más visible de la imposición del castellano, pero la falta de reconocimiento y de protección condujo al mismo resultado de jerarquización lingüística. Las comunidades lingüísticas no castellanas experimentaron la inseguridad lingüística cada vez

más, la imposibilidad de vivir en sus propias lenguas, de manera cotidiana y no solo en sus relaciones con la Administración, y vieron dificultada la transmisión generacional con normalidad, mientras se reforzaba y extendía la diglosia.

La sociedad de masas española de las primeras décadas del siglo XX da buena prueba de ello. En la prensa y el mercado editorial en general, como en la radio y en el cine, el castellano fue la lengua predominante, prácticamente exclusiva por lo que afecta al cine —aunque la obligación del doblaje en castellano llegó en 1940-1941—, en el conjunto de España. Y, además, aquel idioma ocupaba los ámbitos de prestigio: era la lengua de la política, cuando esta devino política de masas —y casi exclusivamente la única lengua escrita en la información, propaganda y vida interna de las organizaciones obreristas— y de la novela, entendida como superior manifestación cultural literaria, como también de buena parte del ocio y los medios de comunicación de masas —incluso se llegó a dictar la prohibición de hablar en catalán y euskera por teléfono en 1896—. De este modo, espacios clave en la socialización individual y colectiva en las comunidades lingüísticas no castellanas se desarrollaban, sin embargo, en castellano. El apoyo estatal al castellano y su falta al resto de lenguas condicionó la presencia de estas ante el desarrollo de aquellos modernos espacios y condujo a la reproducción de relaciones lingüísticas desiguales y al reforzamiento del castellano como lengua de “la” modernidad.

La democracia de la Segunda República cambió parcialmente la situación. Además de la posible descentralización regional autonómica, la Constitución de diciembre de 1931 mencionaba la existencia de lenguas regionales, cuyos derechos podían ser reconocidos por el Estado. Asimismo, incluso antes de la aprobación constitucional, el Gobierno provisional decretó la posibilidad en Cataluña del uso del catalán en las escuelas maternas, de párvulos y primaria y ordenó la formación en catalán de los maestros en las escuelas normales; igualmente, anunciaba la posibilidad de extender esas mismas medidas a otras lenguas peninsulares, algo que nunca ocurrió, ni siquiera en el resto del dominio lingüístico catalán fuera de Cataluña, a pesar de las peticiones oficiales y de la demanda social.

Realmente, la desigualdad lingüística favorable al castellano se mantuvo. Por primera vez en la historia contemporánea, oficialmente se establecía el idioma castellano como único nacional y se prescribía la obligación de su conocimiento y la garantía de su uso; mientras que, en cambio, “a nadie se le podría exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional”. Asimismo, la Constitución también afirmaba que las regiones autónomas podían organizar la enseñanza en sus lenguas, pero el estudio de la lengua castellana era obligatorio y se disponía su uso como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria; por último, también el Estado se arrogaba la capacidad de mantener y crear en las regiones autónomas instituciones docentes de todos los niveles educativos en el idioma oficial. Por lo tanto, constitucionalmente se imponía el castellano como lengua de enseñanza, aun reconociendo la posibilidad de que se usaran otras, mientras que la organización de la enseñanza por parte de las autonomías podría contar con la abierta competencia del Estado. Finalmente, únicamente el catalán, en Cataluña, a partir de 1932 tuvo rango de idioma cooficial, mientras que ya en 1937, durante la Guerra Civil, el euskera también lo fue en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

La dictadura franquista puso fin a todo reconocimiento de las lenguas no castellanas. Se trató de un proceso de glotofagia que, en el fondo, retomaba muchas dinámicas previas. Las lenguas no castellanas, y el catalán explícitamente, fueron prohibidas en la Administración y la enseñanza —no se volvió a permitir la enseñanza de lenguas regionales hasta el decreto de mayo de 1975—, como también de los registros civiles, la actividad industrial y los medios de prensa y radio, incluso en los usos publicitarios, en una política iniciada ya en plena Guerra Civil mediante la abolición del Estatuto de Cataluña, y la legislación y disposiciones derivadas de él, y la ley sobre la reforma de la enseñanza media en 1938. A partir de la década de 1960, tímidamente, la relajación de la censura permitió el uso de otras lenguas en los medios de comunicación, así como en el mercado editorial —aunque las limitaciones se ejemplifican significativamente en la multa a *La Voz de Galicia*, por parte del ministro Manuel Fraga en 1967, por premiar un artículo en gallego sobre los usos lingüísticos castellanófonos de la Iglesia en Galicia

—. Ahora bien, por un lado, una novedad estuvo en la abierta consideración franquista del castellano como lengua imperial, cuyo cultivo garantizaba el renacer nacional español, mientras que, por otro lado, la persistencia temporal de la dictadura y la dureza de la represión hicieron del periodo franquista un episodio especialmente perjudicial para la diversidad lingüística. La finalidad del franquismo no fue otra que la eliminación de las lenguas no castellanas y, en todo caso, su reducción al ámbito estrictamente privado y folklórico, desprovistos de toda noción de utilidad pública y validez intelectual —incluso, como en el caso catalán, mediante el fomento del retroceso a formas escritas prenormativas—.

Por consiguiente, el franquismo contribuyó notablemente a la intensificación de los procesos de sustitución lingüística a favor del castellano. La interrupción generacional de la transmisión de la lengua propia se convirtió en un requisito y en una inversión en capital social para buena parte de los sectores, especialmente urbanos, que aspiraban a ascender socialmente.

La imposición de la lengua castellana por parte de la dictadura, de la mano del nacionalcatolicismo centralista, ayudó a la identificación entre antifranquismo y respeto por la diversidad lingüística y cultural y la incorporación de aquella cuestión en la agenda política de la transición y la nueva democracia. Al respecto, en el articulado de la Constitución de 1978 consta el compromiso de proteger las culturas, tradiciones y lenguas de los pueblos de España y de respetar la diversidad lingüística en el acceso a los medios de comunicación públicos. Al mismo tiempo, la Constitución capacita a las comunidades autónomas para fomentar, en su caso, la enseñanza de la lengua de la comunidad.

Ahora bien, al mismo tiempo, el texto constitucional blindó la preeminencia castellana al indicar que el castellano es la lengua española oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar; a su vez, el resto de lenguas españolas podrán tener rango de oficialidad según lo indiquen los estatutos autonómicos. De manera similar a la legislación republicana, por lo tanto, se reconoce abiertamente el plurilingüismo y se asienta, sin embargo, una ordenación jerárquica de la

diversidad lingüística que dista mucho de garantizar la seguridad lingüística a las comunidades no castellanas. El castellano, única lengua explícitamente referida en la Constitución, es de obligado conocimiento para el conjunto de la ciudadanía, por lo que los poderes públicos tienen el compromiso de su enseñanza, pero no necesariamente el del resto de lenguas, cuya cooficialidad depende de la legislación autonómica y no implica obligación de su conocimiento ni uso preferente por los poderes públicos, como ha venido asentando el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. En este sentido, conviene tener presente que las fronteras lingüísticas y las administrativas autonómicas no coinciden, cosa que ha comportado grados de reconocimiento y protección muy diversos, incluso inexistentes, para una misma lengua según el territorio.

Por lo tanto, el marco constitucional, el de mayor tolerancia y reconocimiento de la diversidad lingüística en la historia contemporánea española, perpetua un régimen lingüístico desigual entre el castellano y el resto. La descentralización autonómica y la atribución de las competencias educativas a las autonomías han permitido activar la normalización lingüística y la recuperación de usos sociales para las lenguas minorizadas. Sin embargo, no han frenado los procesos de sustitución lingüística. Ello no es el resultado de una natural y mera elección individual, sino, en buena medida, de la falta de incentivos normativos para la fidelidad lingüística y de las dificultades en el desarrollo de políticas educativas, culturales y sociales promotoras de la igualdad. Esto se ha hecho patente en el recurso a la justicia contra el modelo educativo de inmersión lingüística, validado por el Tribunal Constitucional en las décadas de 1980 y 1990, pero contradicho en la de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya; en el permanente cuestionamiento de la obligación del conocimiento de las lenguas no castellanas para el ejercicio de la función pública —cuestión también llevada a los tribunales en múltiples ocasiones— o en el apoyo al secesionismo lingüístico en el ámbito catalán por parte de Gobiernos autonómicos, e incluso de la monarquía, con la concesión del título de Real a entidades que niegan la unidad de la lengua catalana —Juan Carlos I lo hizo con la Real Acadèmia de Cultura Valenciana y Felipe VI, con la Reyal Acadèmi de sa

Llengo Baléà—. Asimismo, el castellano se ha beneficiado de una mayor presencia en la esfera pública a través de medios de comunicación de masas como la televisión y la radio públicas —y privadas—, y en el siglo XXI predomina en los medios digitales, las redes sociales y las plataformas audiovisuales (cuya regulación igualitaria desde el punto de vista lingüístico persiste como una asignatura pendiente).

El marco jurídico y su desarrollo es perfectible, indudablemente. Sin embargo, no invita a la esperanza el histórico bajo nivel de tolerancia y reconocimiento de la diversidad lingüística por parte institucional, también en los años de la presente democracia. La intolerancia del nacionalismo español castellanista y del supremacismo lingüístico continúa y, entre otros hechos, se ha manifestado, también, en la resistencia a la presencia de las lenguas no castellanas en los espacios de poder del Estado, como el Congreso. Al hilo de esto último, tras casi cinco décadas de vigencia democrática, en 2022 el diputado del Bloque Nacionalista Gallego Néstor Rego recordó las frases de Juan Carlos I sobre la imposición del castellano antes de que le retiraran el turno de palabra en el Congreso por defender, en gallego (!), una reforma del reglamento para permitir el uso generalizado de las lenguas dichas cooficiales. PSOE, Vox, Ciudadanos y Partido Popular se opusieron y tumbaron la iniciativa.

BIBLIOGRAFÍA

- ALCARAZ, Manuel (1999): *El pluralismo lingüístico en la Constitución española*, Madrid, Congreso de los Diputados.
- ARCHILÉS, Ferran (ed.) (2018): *No solo cívica. Nación y nacionalismo cultural español*, València, Tirant Humanidades.
- GARCÍA CARRIÓN, Marta (2015): “Cultura nacional y nacionalismo español”, en Carlos Forcadell y Manuel Suárez Cortina (eds.), *La Restauración y la República, 1874-1936*, Madrid/Zaragoza, Marcial Pons/PUZ, pp. 169-198.
- MARFANY, Joan Lluís (2001): *La llengua maltractada. El castellà i el català a Catalunya del segle XVI al segle XIX*, Barcelona, Empúries.
- MORENO CABRERA, Juan Carlos (2015): *Los dominios del español. Guía del imperialismo lingüístico panhispánico*, Madrid, Síntesis.
- SENZ, Silvia y ALBERTE, Montserrat (eds.) (2011): *El dardo en la Academia. Esencia y vigencia de las academias de la lengua española*, 2 volúmenes, Barcelona, Melusina.

TASA FUSTER, Vicenta (2019): *Llengua i Estat. Suïssa i Espanya davant la diversitat lingüística*, València, PUV.

CAPÍTULO 7

ESPAÑA ES EL PAÍS CON MÁS MOVIMIENTOS ‘NACIONALISTAS’ DE EUROPA

FERRAN ARCHILÉS

Europa ya no comienza en los Pirineos. La historia contemporánea de España ya no es tan anómala como solía (¡hasta tenemos una extrema derecha como los demás, oiga!). Pero hay al menos una supuesta anomalía que no cambia: España es el país con más movimientos “nacionalistas” de Europa. Por supuesto, esto es culpa de estos movimientos troglodíticos que siguen sin darse cuenta de que el futuro es posnacional, global y deslocalizado. Pero, en fin, un poco de culpa sería también de la fallida vertebración española que José Ortega y Gasset sentenció como destino patrio y que solo la “conllevancia” resolvería y, en realidad ni eso, claro está.

Sin embargo, la situación española está lejos de ser una singularidad, ahora o en el pasado. La historia de las naciones europeas es siempre la historia de los diferentes modelos de “composición” nacional. Nada gusta más a los discursos nacionalistas (y entre ellos al español) que presentar una línea del tiempo recta, antigua y sin impurezas en su unidad.

La miopía suele ser de poca ayuda a la hora de interpretar la realidad. Pero la hipermetropía no lo es mucho más. Los discursos sobre las anomalías en la historia de España solo son posibles en términos comparativos. Entonces, a propósito de la floración de nacionalismos, ¿con qué casos debe compararse

España? Una premisa de partida incuestionable es que el espacio de la llamada Europa central —donde la diversidad nacional, la fragmentación y la recomposición han sido norma y no excepción— debe quedar excluido del horizonte de comparaciones. Lo mismo sucede, desde luego, con la Europa de “los Balcanes” que de hecho es el epítome de la inestabilidad nacional(ista) misma. Aunque a veces la balcanización de España aparece como fantasma o como sueño húmedo de los nacionalistas españoles más aguerridos. Por cierto, que en la idea de lo que sean los Balcanes se excluye a Grecia, como si —en la “cuna de Europa”, que nada debería tener que ver con los bárbaros Balcanes— la historia de su construcción nacional moderna no fuera precisamente la historia de una inestabilidad continua y el resultado de guerras con sus vecinos y masivos desplazamientos forzosos de población hasta establecer sus límites actuales (además de la precaria situación de Chipre).

Asimismo, una verdad universalmente aceptada es que hay que excluir del marco comparativo al Reino Unido, porque, aunque es un caso evidente de composición nacional históricamente compleja, de que su articulación territorial se parece mucho hoy a la de un modelo federalizante y a pesar de que cuenta con poderosos movimientos nacionalistas —e incluso abiertamente independentistas— en sus periferias galesa, escocesa e irlandesa..., también en esto hay un Brexit mental.

Y qué duda cabe de que tampoco deben entrar en la comparación los países escandinavos, demasiado lejanos, claro, aunque su historia sea precisamente una inacabable historia de secesiones e independencias en el siglo XX entre Noruega, Suecia, Islandia, Dinamarca y Finlandia. Y aunque movimientos como los que afectan a las islas Feroe y Groenlandia sigan activos. ¡Ay, Groenlandia!

Y al final, aún quedan dos casos raros que conviene aislar. Suiza, como excepción absoluta, país improbable (que se unificó tras una guerra civil, aunque esto suela recordarse poco), refugiado en sus montañas alpinas de dinero y neutralidades, que sin embargo pervive como nación. Y en contraste, Bélgica, el Estado fallido perfecto, dividido entre flamencos y valones que se conllevan (poco, al parecer) federalmente, con Bruselas en el filo.

En realidad, en este mapa ideal siempre caben unas referencias oblicuas a Italia, el país diverso por antonomasia. Ciertamente se impone la imagen de un país mal cuajado, irremediablemente indisciplinado..., pero hermoso; italianísimo, fatalmente. Como si nadie, ni los mismos italianos, pudiesen destruir Italia.

En definitiva, argumentos fundamentados o más o menos peregrinos han convenido, pues, en resaltar el *a priori* de la singularidad de la situación española. No es fácil dejar de pensar que, en la práctica, el marco comparativo queda reducido a... Francia. Estamos, de nuevo, ante el espectro que recorre la historiografía española sobre la cuestión nacional: Francia, el país que convirtió el “jacobinismo” en una de las bellas artes y redujo las regiones a denominaciones de origen del queso.

Así pues, la partida se juega en la comparación entre una secularmente invertebrada España y una idealizada unidad francesa, lo que implica excluir de la postal las fracturas y cicatrices que la clase, el género, la raza o el imperio han supuesto en la construcción nacional francesa, como ha mostrado Anne-Marie Thiesse.

Sin embargo, en España, el país siempre amenazado de disolución por la —inaudita— proliferación de movimientos nacionalistas, no se ha producido desde hace más de dos siglos ninguna modificación de sus fronteras nacionales (solo los territorios coloniales se independizaron: pero los territorios coloniales nunca fueron parte verdadera de la nación en pie de igualdad con los territorios de la metrópolis). La continuidad del Estado ha sido una constante. Aunque se hayan producido cambios de régimen y de sistema político profundos (revolución liberal, monarquías, repúblicas o dictaduras y tras diversas guerras civiles), el Estado ha sobrevivido intacto. No ha sido fácil, ningún sugestivo proyecto de vida en común se ha impuesto sin disputas o violencia. Pero en más de dos siglos ningún movimiento nacionalista ha conseguido la independencia de su territorio. Cabe destacar, además, que ningún Estado europeo —ni africano— ha forzado la modificación de las fronteras de España (a diferencia de lo sucedido en Francia, Alemania o Italia). Gibraltar es una excepción, pero lo es ya desde el siglo XVIII. Ni siquiera Ceuta y Melilla han experimentado cambios.

En cambio, si miramos hacia la situación europea a lo largo de los dos últimos siglos, la norma ha sido la continua modificación de fronteras y la creación de nuevos Estados, sean o no el resultado de procesos de secesión. Tan solo un remarcablemente exitoso ejercicio de “nacionalismo metodológico” —que es la variante del nacionalismo banal que aflige a los estudiosos de los fenómenos nacionales— puede explicar la naturalización de las fronteras actuales de los actuales Estados nación, como si no hubieran sufrido cambios, como si cualquier mapa anterior no hubiera sido otra cosa que la prefiguración natural del estado actual de las cosas, acaso su destino.

A la tónica más habitual en la Europa del Este y los Balcanes cabe añadir las complejas unificaciones de Alemania e Italia, en absoluto pacíficas y cuyas composiciones territoriales fueron cualquier cosa menos obvias o naturales; la historia convulsa de Austria, la modificación de las fronteras de Grecia (y Turquía), la redefinición territorial o fundación de los Países Bajos, Bélgica o Luxemburgo, la demarcación e independencia de Dinamarca, de Noruega, Islandia o Finlandia, o, en fin, la situación de Irlanda. Valga como ejemplo que las fronteras actuales de Francia, Alemania o Italia no se fijaron hasta años después de la Segunda Guerra Mundial (y aun Alemania se reunificó en 1989).

Si centramos la mirada en el caso de Francia, sus fronteras nacionales en los siglos XIX y XX son el resultado de un proceso complejo de negociación, adquisición o conquista. Hasta la década de los sesenta del siglo XIX no se incorporaron territorios como Saboya o la zona de Niza. El segundo imperio intentó la compra de Liechtenstein, pero fracasó en su intento. Y Alsacia y Lorena han sido durante décadas el epítome de las fronteras en disputa hasta 1945. El hexágono no es ni ha sido nunca “natural”. Y fuera del hexágono, cabe recordar que Argelia fue considerada parte del territorio nacional hasta la independencia en 1962.

A lo largo y ancho de Europa muchas de las diversidades culturales o territoriales se han resuelto en época contemporánea con la creación de nuevos Estados nación. Tendemos a pensar exclusivamente en la Europa oriental o balcánica como crisol de naciones. Ello implica ignorar, por ejemplo, que un reducido espacio en el noroeste europeo cobija a los Países

Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Dinamarca y Francia. Esto es: hasta seis Estados que entre los siglos XIX y XX se han “repartido” la diversidad y que, por tanto, han atenuado —excepto en Bélgica— los “conflictos nacionales” que estas diversidades podrían suponer (aunque la cuestión de la población frisona, flamenca o limburguesa es aun transfronteriza).

En contraste, en el caso español, la larga estabilidad de las fronteras, el mantenimiento de la unidad territorial y la continuidad del Estado —y por tanto que no se haya producido ninguna secesión o reordenamiento de las poblaciones— es lo que explica que las diversidades culturales e identitarias se hayan convertido a la postre en “cuestiones nacionales” irresueltas. No han acabado por ser otros Estados, como ha sucedido en buena parte de Europa Occidental. Pero, además, tampoco una propuesta de tipo federal los ha acomodado y por tanto las reivindicaciones han quedado sin atender bajo un modelo centralista, lo que las ha cronificado.

En los últimos dos siglos, no han existido diferencias religiosas significativas en el seno del Estado nación español. Tampoco ha habido “minorías nacionales” que pudiesen vindicarse como parte de otras naciones vecinas. Casos como la ciudad de Olivença o el Val d’Aran están muy localizados. Las diferencias “raciales”, a su vez, quedaron confinadas en los ámbitos coloniales (americanos, africanos y asiáticos), y aunque fueron enormemente importantes en origen, no afectaron territorialmente a la metrópolis. Tampoco afectó en términos de estabilidad nacional la presencia de población gitana (que de hecho ha sido utilizada para reinventar los imaginarios nacionales españoles). Y menor peso aún han tenido otras minorías o supuestos grupos “étnicos” (maragatos, *xuetes*, pasiegos...).

Es por todo ello —por la unidad territorial intacta y el limitado rango de diferencias internas— por lo que las tensiones identitarias han sido en España de carácter cultural/lingüístico y es en torno a ellas donde se han articulado las reivindicaciones políticas. Es especialmente relevante, además, que la distribución de esta diversidad se caracteriza por estar agrupada de manera concentrada y no dispersa. Es decir, el dominio lingüístico del catalán, euskera o gallego se distribuye en territorios contiguos, sin que existan significativas poblaciones de hablantes dispersas. En España, la

diversidad lingüística se ha doblado necesariamente en vindicación territorial. Como nos recuerda Michael Hechter, lo que distingue a un “grupo étnico” de una nación es precisamente la territorialidad. Por otra parte, la presencia de hablantes de catalán o euskera en territorio francés (o italiano) tiene gran importancia simbólica, pero no ha puesto en peligro tampoco la integridad de los Estados afectados. También el caso del gallego y del portugués prueban la eficacia de las fronteras.

Dado que la construcción nacional española se ha basado durante los siglos XIX y XX (con la excepción parcial de los periodos abiertos en 1873, 1931 y 1978) en un modelo político centralista y doctrinalmente antifederal, en el rechazo al reconocimiento oficial de la diferencia cultural y la hegemonía e imposición del castellano como fundamento de la cultura nacional, el círculo vicioso ha sido perfecto. La construcción de movimientos culturales primero y políticos después —regionalistas o nacionalistas— ha sido la respuesta más habitual, que a su vez ha activado una dialéctica de redefinición continua del modelo territorial.

A finales del siglo XIX es cuando surgieron en España los movimientos nacionalistas alternativos que aún perduran. Fue en los años de la Restauración cuando se produjo la confluencia de una cada vez más robusta acción del Estado, la consolidación de un mercado económico integrado (bajo principios proteccionistas), de un espacio político nacional (con sufragio universal masculino) unificado y la creación de una esfera de comunicación y cultura de masas nacionalizada. Nunca como entonces se había construido un proyecto nacional de voluntad homogeneizadora tan intenso. La crisis imperial abierta —la de las “naciones latinas” en decadencia— en 1898 no fue nada excepcional (Francia, Italia o Portugal la experimentaron). Pero no fue solo el “desastre” de 1898 —y la reacción de unas turbias burguesías de alma contable— lo que propició el surgimiento del regionalismo. En realidad, en España, como en Europa, la mayor interacción y conexión con el Estado estaba provocando en los territorios un efecto doble, de proximidad y alejamiento del centro. Las nuevas tecnologías como el ferrocarril o el telégrafo, las élites profesionales, el turismo o el mercado interior iban creando competencias y diferencias entre ciudades y regiones.

En toda Europa la nación se construyó a través de identidades regionales. Región y nación eran ámbitos identitarios confluyentes (que a veces podían convertirse en antagónicos también). Todas las identidades colectivas y territoriales, también las regionales, se habían basado desde el romanticismo en una dimensión cultural. El crecimiento del Estado nación y el temor a la desaparición de la diferencia cultural fue similar en Cataluña al de Irlanda, Bretaña o las tierras occitanas.

Mucho más que invertebrada, España salió del siglo XIX como una nación diversa y en muchos aspectos “asimétrica”, como lo son la mayoría de los Estados nación europeos de cierta extensión y formados por agregación de territorios. Por gusto o por fuerza, los movimientos regionalistas fueron en España descentralizadores, foralistas o federalistas, a elegir. Solo de manera minoritaria e intermitente fueron secesionistas (con la posible excepción, aunque casi siempre retórica y en todo caso impotente, del nacionalismo vasco). Su desempeño mayoritario fue por una España “diferente”. El catalanismo sintió desde el principio la tentación de la España grande. Bismarck y Bolívar, claro. Y el catalanismo ha sido siempre el rompeolas de todas las (otras) Españas. Si algo debería sorprender, sin embargo, fue la cerrazón del nacionalismo español, de los doloridos intelectuales del 98 a los políticos con mando en plaza, por no hablar, en fin, del ejército.

El momento decisivo en toda Europa para las cuestiones nacionales fue 1918. ¿Había por entonces más movimientos nacionalistas en España que en el resto de Europa? En absoluto, de hecho, había menos que en la mayoría de países. El “momento Wilson” se vivió con ilusión y despiste. El desmembramiento de los Estados vencedores —o neutrales, para el caso— no estaba en la agenda. España, por su parte, bloqueó con incomodidad, pero sin dificultades, todas las aspiraciones del catalanismo por estar en el escaparate internacional.

Por otra parte, a los movimientos nacionalistas vasco o catalán nunca les gustó ser considerados “minorías nacionales” que es lo que la Sociedad de Naciones abordó. Todo era cuestión, por tanto, de encontrar un encaje, una forma de autogobierno. De “autonomía”, como empezó a ser llamado el autogobierno hacia 1919 y la fórmula vino para quedarse. La voluntad de

secesión fue ruidosa y altamente simbólica en Prats de Molló, pero poco más. En realidad, en el entorno de Europa Occidental ni uno solo de los movimientos nacionalistas consiguió la independencia, con la excepción de Irlanda. Y tampoco obtuvieron un régimen de autogobierno hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, por cierto. Irónicamente, Cataluña, Euskadi (y Galicia) sí lo conseguirían, en los años treinta.

En realidad, la verdadera anomalía en la historia contemporánea española es la larga duración de la dictadura franquista (aunque no la existencia de una dictadura en sí). El franquismo emprendió un programa de nacionalización autoritaria, a golpes de yugo y flechas y de escapularios al viento. Y en parte tal vez funcionó, al menos, para consolidar en la mayoría de la población la imagen de las demás identidades en España como anomalía o aberración. El régimen franquista explotó las posibilidades de la prensa, la radio, el cine o la televisión. Nunca antes el Estado dispuso en España de tantas herramientas para difundir un modelo político y cultura nacional(ista). Esta presión provocó —sin que el régimen pudiera impedirlo— la reactivación de las demandas de los nacionalismos periféricos, que quedaron vinculados a la lucha antifranquista y la democracia, inevitablemente. Además, en contraste con algunos movimientos (bretón, flamenco o felibrista) que sintieron la tentación de la colaboración con los nazis y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial, los nacionalismos periféricos en España se opusieron al franquismo en 1936.

Desde los años sesenta, en Europa, la “regionalización” económica y la descentralización administrativa, en formato tecnocrático, parecía seducir a las élites políticas. La dictadura franquista intentó adaptarse, pero su incapacidad para ofrecer un programa coherente de descentralización o regionalización —y su insistencia pútrida en el regionalismo “bien entendido”— reforzó los nacionalismos alternativos. Por otra parte, el contexto de las luchas anticoloniales sirvió como revulsivo. Movimientos nacionalistas en Irlanda o Escocia, reivindicaciones culturales bretonas, occitanas o corsas compartieron el nuevo renacer con Cataluña, Euskadi, Galicia o País Valenciano, entre otros.

¿Fue la transición a la democracia otra anomalía que debilitó la nación?

La aprobación de la Constitución de 1978 transcurrió, en realidad, en paralelo a iniciativas de transformación territorial en nuestro entorno. Italia había empezado a implementar en la primera mitad de los años setenta la generalización de las regiones; en el Reino Unido, en 1979, hubo dos referéndums para la *devolution* en Escocia y Gales; Bélgica se transformó en estos años en lo que nunca había sido: un Estado federal. Francia, en fin, que venía amagando reformas tras el referéndum fallido de De Gaulle en 1969, implementaría la ley Defferre en 1981.

Así pues, las demandas para la descentralización o el autogobierno que se dieron en España tampoco fueron una singularidad. Fueron los legados de la dictadura los que convirtieron la situación en diferente. Democracia significaba resolver la cuestión territorial: catalana o vasca. Se suele hablar de un “olvido de España” por parte de la izquierda española que, acomplejada, se habría dejado engatusar inmoderadamente por los nacionalismos periféricos. Pero en realidad el problema fue que las élites del Estado, los herederos o gestores del posfranquismo, estaban poco o mal preparados para pensar la rearticulación del Estado. El franquismo no había dejado atada y bien atada la cuestión territorial. Ni de lejos. Los reformistas que acabaron agrupados en la UCD debían romper con un pasado con el que no podían romper. Ni hablemos de la derecha de Fraga y de la de más allá. Si el cambio político de mentalidad sobre el modelo territorial fue lento, en el campo de los referentes históricos y culturales ni se intentó. Tras la inflación del nacionalismo español y el centralismo, solo un cambio profundo tenía sentido y este vino forzado por la presión de las periferias.

Sin embargo, la estrecha vinculación entre democratización y cuestión territorial hizo que las demandas de los nacionalismos periféricos se plantearan —de nuevo— como formas de reformar “todo” el Estado nación. Nuevos regeneracionistas españoles o catalanistas pragmáticos coincidieron. La independencia no fue el objetivo fundamental, sino que lo fue el autogobierno. La Constitución de 1978 dibujó un Estado descentralizado, más regional a la manera italiana que federal a la manera alemana. Y con toques asimétricos (como en el País Vasco y Navarra). El café para todos se volvió algo amargo. Pero indisoluble. La unidad territorial se mantuvo intacta.

Ningún movimiento nacionalista tuvo fuerza para plantear otra cosa.

Paradójicamente se vendió (y maldijo) la idea de que España era el país más descentralizado de Europa. ¡La España de la movida y del Ave radial! La España de una hipostasiada capital de capitales (ya que no hay nación de naciones) como es Madrid. A la postre, casi 40 años de modelo autonómico muestran que en España no ha surgido ningún movimiento nacionalista significativo donde no había uno ya antes. Los nacionalismos periféricos más fuertes no han podido ni cambiar la Constitución ni obtener la independencia. ¿Habrán sido unos fabulosos tigres de papel? Reformar los estatutos no autoriza, en fin, la épica. Es un tanto sorprendente que la reforma del Estatuto de Cataluña provocara en la derecha española —y no solo, claro— boicots, espasmos místicos y una dialéctica de palos de bandera y sentencias judiciales. Y todo lo que vendría después. Porque en eso llegó la anomalía del *procés*. *Quod erat demonstrandum*. Pero ni siquiera fue, hablando en propiedad, algo inédito, pues en 2014 Escocia ya había celebrado un referéndum de independencia, precisamente.

Lejos de ser solo una anomalía española, el Estado nación está afectado por turbulencias y ansiedades en toda Europa. Referéndums en Nueva Caledonia en 2021 y, con otro alcance, los celebrados en Véneto y Lombardía; el auge del nacionalismo flamenco en Bélgica; el crecimiento del nacionalismo corso, o de los movimientos sardo, bretón o galés; la normalización del nacionalismo radical irlandés, al norte y sur de la isla. Ninguno de estos movimientos ha logrado, ciertamente, alcanzar la independencia (la situación del nacionalismo catalán tampoco es en esto excepcional pues). Debido en gran medida a estos movimientos tectónicos, el Reino Unido ha puesto en marcha fórmulas de avanzado autogobierno en tres de sus cuatro territorios o naciones constituyentes. Bélgica, Alemania y Suiza han redefinido sus modelos federales ya existentes y Dinamarca ha implementado Gobiernos territoriales autónomos (para las islas Feroe y Groenlandia). Italia está embarcada en una transformación de sus marcos regionales, discutida pero intensa, siempre en el sentido de mayor autogobierno. Francia sigue profundizando la reforma de su milhojas administrativo, en una dinámica descentralizadora y de regionalización que

teme su nombre. En 2024, además, se ha iniciado una reforma de gran calado para situar la especificidad de Córcega en la Constitución. Solo los Países Bajos e Irlanda (a los que cabría añadir Portugal, con sus reformas paralizadas) no han puesto en marcha cambios.

Estamos ante una más de las oleadas de reajuste del Estado nación que vienen produciéndose desde los años sesenta del siglo XX y que en todo caso se han acelerado. La tendencia a la descentralización y regionalización, es constante en los países más avanzados de Europa, del mundo. La articulación territorial de los Estados es un proceso, no una fotografía fija. Contrariamente a lo que amigos o enemigos de la idea proclaman, incluso los Estados con modelos federales están siempre en redefinición en sus equilibrios. No hay ninguna peculiaridad en la “España de las autonomías”. Lo que sucede es que aquí las reglas son más confusas.

Además, está la acción de la Unión Europea, que, si bien garantiza a sus Estados la integridad, a la vez ha supuesto la absorción de funciones consideradas tradicionales (lo que se combina con los procesos de descentralización y regionalización puestos en marcha por los mismos Estados). Todo ello genera una inestabilidad, una ansiedad en los relatos nacionales legitimadores en buena parte de las opiniones públicas de los Estados nación europeos. Esta ansiedad toma la forma de percepción de una amenaza hacia los cimientos de la identidad nacional, precisamente. Inmigración y relato histórico (¡el pasado glorioso de la nación!) se ofrecen en el altar de la patria. España se rompe, Francia va a ser “reemplazada”, Italia se diluye, el Reino Unido se disgrega. ¿Serán todas las naciones europeas “invertebradas” finalmente?

¡Quién lo iba a decir: el escenario europeo se parece mucho al escenario español! Surgimiento de movimientos nacionalpopulistas o neofascistas, construcción europea y sus desafíos, nuevas demandas a escala subestatal. Ciertamente, los movimientos nacionalistas catalán y vasco están entre los más duraderos de Europa. La pulsión centralista por acción u omisión no va a resolver nunca el encaje de la diversidad. Mantiene la unidad territorial, pero ¿a qué precio?

Lo cierto es que la evolución socioeconómica y cultural está transformando

profundamente todas las “sociedades nacionales” en las últimas décadas. Jérôme Fourquet habla en sus trabajos de “archipiélago francés” para describir una nación múltiple y dividida. ¡Ah, Francia!

BIBLIOGRAFÍA

ARCHILÉS, Ferran (2024): “Casi (todo) a la vez en todas partes. La cuestión nacional en España y Europa”, *La Maleta de Portbou*, n° 66, pp. 85-93.

LEERSSEN, Joseph (2019): *El pensament nacional a Europa. Una història cultural*, Catarroja-València, Afers-PUV.

NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M. (1998): *Movimientos nacionalistas en Europa, siglo XX*, Madrid, Síntesis.

THIESSE, Anne-Marie (2017): *França. Quina identitat nacional?*, Catarroja-València, Afers-PUV.

CAPÍTULO 8

EL MITO DE LA 'IDENTIDAD DUAL'

JORGE CAGIAO Y CONDE

Se trata de una tesis conocida que ha tenido un desarrollo académico de lo más exitoso de la mano de Luis Moreno, politólogo de reconocido prestigio del CSIC. En sustancia, viene a decir que lo normal entre los españoles es tener una doble identidad nacional, la que correspondería, por una parte, a su comunidad autónoma y, por la otra, al Estado. Los españoles tendríamos, así, una doble nacionalidad como andaluces, gallegos, catalanes, manchegos, etc., por una parte, y españoles, por la otra. Así expuesta, la tesis parece captar una realidad difícilmente cuestionable: todas las personas tienen diferentes identidades etnoterritoriales que vienen a conformar una identidad personal mixta, compleja, con diferentes capas que, lejos de excluirse, son por lo general complementarias. El oriundo de la ciudad de A Coruña, por ejemplo, sería como mínimo, esto es, dejando ahora de lado las eventuales peripecias vitales que hayan podido llevarle a adquirir identidades etnoterritoriales suplementarias, coruñés, gallego, español y europeo.

El problema de la tesis aparece cuando se pretende inferir de ella, como así se hace, una explicación de perfil político sobre el dualismo de identidades nacionales que caracterizaría una democracia como la española. Aquí deviene necesario hacerse alguna que otra pregunta. ¿Realmente la

diversidad de identidades etnoterritoriales de las personas implica una situación de pluralismo nacional identitario o, por decirlo con el término más de moda, la “plurinacionalidad” de los españoles? Porque a tal conclusión ha llevado la tesis que nos interesa. Para entender el error en el que se cae al proceder de ese modo, importa primero ver con brevedad cómo se construye la tesis, antes de poner el foco, ya en un segundo momento, en los graves problemas que tiene para medir y captar con la debida pertinencia el grado de pluralismo nacional de una sociedad.

LA IDENTIDAD NACIONAL DUAL: ¿(CASI) TODOS PLURINACIONALES!

La “pregunta Moreno” empieza a utilizarse en las encuestas sociológicas en los años 1980-1990. Cada individuo encuestado ha de decidir si se siente 1) únicamente español, 2) más español que gallego, andaluz, vasco, etc., 3) tan español como gallego, andaluz, vasco, etc., 4) más gallego, andaluz, vasco, etc., que español, o bien 5) únicamente gallego, andaluz, vasco, etc. El modelo de pregunta ha podido utilizarse, es claro, en otros países en los que había también interés por el tema de las identidades etnoterritoriales. De hecho, la primera vez que Luis Moreno lo usa es en relación con el caso de Escocia en el Reino Unido, que se compara con el de Cataluña en España.

Si nos fijamos en el último estudio sobre identidades culturales, nacionales y europeas realizado por el CIS (mayo de 2023), las respuestas de las personas consultadas dejan un 52,8% que se siente tan español como gallego, andaluz, vasco, etc.; un 15,3% que se siente más gallego, andaluz, vasco, etc., que español; un 12,4% que se siente más español que gallego, andaluz, vasco, etc.; un 9,3% que solo se siente español y un 5,9% que solo se siente gallego, andaluz, vasco, etc. La interpretación que el modelo analítico de Moreno propone a partir de esas respuestas, seguida ampliamente por otros científicos sociales, es que, en total, tendríamos en torno a un 80% de españoles con una identidad dual, ya sea esta simétrica (en la gran mayoría de los casos), ya asimétrica, esto es, con una preferencia por una de las dos. El 20% restante tendría en cambio una identidad nacional exclusiva.

Ha de notarse que no ha cambiado mucho la situación desde las primeras encuestas realizadas en los años 1980-1990 utilizadas por Moreno para acuñar el concepto de identidad dual. En ellas, podía notarse ya que en torno a un 70% de la población afirmaba sentirse a la vez español y gallego, andaluz, vasco, etc., mientras que la identidad exclusiva se encontraba en un 30% de los casos. El examen de las respuestas en cada comunidad autónoma durante el periodo 1990-1995 vendría a confirmar también la tesis de una identidad dual muy extendida en España por aquellas fechas. Pero deja también algunas dudas, sobre las que volveré luego. En efecto, importa notar como el porcentaje de personas con identidad dual en comunidades autónomas tan diferentes desde el punto de vista del dinamismo y de los resultados electorales del nacionalismo subestatal, como Aragón, Asturias, Cataluña, Andalucía, Galicia o Canarias, se sitúa de 1990 a 1995 en unos valores muy próximos que oscilan en función de los años entre el 60 y el 80%. Si nos fijamos concretamente en los resultados obtenidos en Andalucía, Cataluña y Galicia en 1995, podremos ver que la identidad dual sería de un 71,1, 78,8 y 84,9% respectivamente, con además un bastante sorprendente porcentaje (19,3 y 25,9%) de personas que en Andalucía y Galicia decían sentirse más andaluzas o gallegas que españolas, frente a solo un 18% en Cataluña. Esto puede llevar a la conclusión de que, en términos de identidad nacional dual, no habría diferencias sustanciales entre esos tres territorios.

Es lo que la tesis de la identidad dual y las lealtades compartidas postula. La sociedad española se encontraría caracterizada por un sentimiento dual y compatible de pertenencia nacional de los ciudadanos. Y esa doble identidad nacional de los españoles y, por lo tanto, también de España, como “nación de naciones”, estaría de alguna forma mostrando la pertinencia del modelo de Estado descentralizando e incluso invitando (en Moreno esto se aprecia con claridad) a adoptar de manera más decidida la forma federal de Estado, aquella que es con frecuencia presentada como la mejor adaptada a una buena articulación de la diversidad en la unidad. Pues bien, esta es la tesis. Tratemos ahora de ver qué es lo que falla en ella.

¿IDENTIDAD NACIONAL DUAL SIN NACIONES (O MUY POCAS) SUBESTATALES?

La representación de España como una sociedad ampliamente atravesada por un sentimiento ciudadano de pertenencia a dos naciones, la subestatal y la estatal, tiene un marcado perfil ideológico. No se trata de una tesis científica que describa y analice la realidad de la sociedad española, sino que nos presenta una versión deformada y políticamente interesada de ella. Para percibirlo con claridad, bastará aquí con pasar dicha tesis por un doble filtro. El primero es de perfil teórico, atento a lo que los estudios especializados explican sobre el fenómeno del nacionalismo, la nación y, también, es claro, la identidad nacional. El segundo es empírico y atiende, una vez politizado, como es debido, al tema de la identidad nacional, a las situaciones tan dispares que encontramos en los diferentes territorios españoles en atención a la politización (en términos de partidos políticos, voto ciudadano, etc.) de la identidad nacional subestatal.

LA TESIS DE LA IDENTIDAD DUAL NO ENCUENTRA UN APOYO CLARO Y SÓLIDO EN LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN NACIONALISMO

Es sin duda el flanco más débil del concepto de identidad dual. Importa aquí centrarse en la idea moderna de nación, que surge de las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII y que va a ser la que se acabe imponiendo en sociedades que aspiran a organizarse democráticamente. Nada que ver, por lo tanto, con la idea de nación que domina hasta entonces, de perfil étnico, aquella que la define en función de criterios objetivos de tipo cultural, como la lengua, la religión o la raza. El concepto moderno de nación añade a esos rasgos objetivos (siempre presentes de alguna manera), por un lado, un criterio subjetivo, como lo es la voluntad ciudadana de formar parte de un mismo proyecto de vida en común, y ello independientemente de las diferencias de tipo étnico o cultural que puedan existir entre los miembros de la comunidad nacional; y, por el otro, una aspiración política, como lo es

disponer de la libertad de gobernarse sin intromisiones de otras naciones. La nación en su acepción moderna puede definirse, por lo tanto, como lo hace Núñez Seixas, como “una comunidad imaginada, inherentemente soberana y delimitada territorialmente, integrada por un colectivo de individuos que se sienten vinculados entre sí, con base en factores muy variables y dependientes de la coyuntura concreta [...]; y que, sobre todo, consideran que ese conjunto de individuos es el sujeto soberano de derechos políticos colectivos”. La relación entre nación y soberanía deviene de este modo central en la transición hacia la modernidad política.

Pues bien, esta idea moderna de nación trae consigo obviamente toda una serie de cambios y consecuencias lógicas. Si las naciones ya no son comunidades humanas meramente heredadas, caracterizadas únicamente por sus rasgos culturales objetivos, sino comunidades construidas y de dimensión de hecho mucho mayor, por lo general, que las naciones étnicas, entonces eso nos está diciendo que las naciones modernas son construcciones sociales, es decir, el producto de actores políticos capaces de crearlas. La tesis es conocida, pero es necesario recordarla aquí: son los nacionalismos los que crean las naciones, y no al revés. Y como no es posible que exista identidad nacional (en el sentido moderno indicado) sin nación, entonces eso también significa forzosamente que la presencia de un nacionalismo capaz de crear una comunidad nacional diferenciada es necesario para que podamos hablar de identidad nacional con propiedad. No hace falta llevar más lejos la explicación, pues aquí se empiezan a torcer las cosas para la tesis de la identidad nacional dual.

¿De qué identidad se habla al hablar de una identidad dual? Porque parece claro que la identidad española es una auténtica identidad nacional. Es decir, es una identidad que corresponde a una nación en el sentido moderno indicado (políticamente soberana), construida a lo largo del tiempo por un nacionalismo que ha sido capaz de dotarla de unos rasgos reconocibles y reconocidos en el concierto mundial de naciones. Pero ¿y la identidad andaluza, gallega, valenciana, aragonesa? ¿Podemos con un mínimo de rigor pretender que se trata de una identidad comparable a la identidad nacional española, de tal suerte que la combinación de ambas genere ese dualismo de

identidades nacionales del que se habla? Nótese que no estoy poniendo en tela de juicio que en Andalucía, Galicia o Aragón las personas tengan una identidad etnoterritorial propia y diferenciada. Lo que estoy diciendo es que esa identidad no es nacional, al menos en el sentido moderno del concepto de nación, que es aquel, por otro lado, al que se supone que ha de remitir la tesis de la identidad nacional dual en una democracia contemporánea como la española.

La literatura especializada en el tema de la nación y el nacionalismo revela, pues, y de manera tan clara como rotunda, que no hay identidad nacional dual en la gran mayoría del territorio español. Porque si no hay nación andaluza, ni aragonesa, ni gallega, ni canaria, etc., en el sentido moderno del término, no puede haber una identidad nacional subestatal ampliamente extendida entre la población de dichos territorios. Lo que predomina con claridad en todos ellos es el nacionalismo español, es decir, la nación y la identidad nacional española. Ese sí es un sentimiento de pertenencia y una identidad nacional ampliamente extendido entre los andaluces, aragoneses, gallegos o canarios. Por lo tanto, que allí exista de manera dominante una identidad regional, por supuesto. Que dicha identidad regional sea perfectamente compatible con la identidad nacional española (y dé lugar a “lealtades compartidas”), por descontado. Ahora bien, la identidad nacional dual solo puede darse en territorios en los que compiten dos proyectos de construcción nacional o de nacionalización, dos nacionalismos, por lo tanto, que son los que podrán quizás transmitir a la población algo parecido a una doble identidad nacional.

LA TESIS DE LA IDENTIDAD DUAL DESPOLITIZA Y BANALIZA LO NACIONAL

El éxito de la tesis sorprende no solo por estar construida contra las lecciones de los estudios especializados y la buena teoría que se ha hecho cargo de la nación y del nacionalismo. Y es que puede pensarse que no sería tampoco necesario apelar a un enfoque teórico sobre la nación para entender que la tesis de la identidad dual no funciona en la mayor parte del territorio español.

Bastaría, de hecho, con fijarse en la evidencia empírica, en los actores políticos, sus programas y proyectos, su eventual éxito, etc. Y es que, como queda dicho, sin un nacionalismo subestatal capaz de construir un proyecto nacional que pueda competir con el del Estado, no puede haber ni nación ni identidad nacional a nivel subestatal.

Pues bien, ¿qué nos muestran en ese sentido los 45 años de experiencia democrática en España? La respuesta parece clara: solo en Cataluña y en el País Vasco existe un nacionalismo subestatal (con sus subdivisiones ideológicas internas, de izquierda y de derecha) capaz de generar esa creencia en la existencia de una nación vasca y catalana que compite con la española por la adhesión, apoyo y voto de los ciudadanos de dichos territorios. Y no es solo que esos nacionalismos existan, porque haberlos también los hay (o al menos así se definen) en Galicia, Canarias o Aragón. El problema de casos como estos últimos es que los partidos y organizaciones nacionalistas son tan minoritarios, en algunos casos incluso marginales, que su trayectoria no puede razonablemente ser vista más que como el fracaso (hasta la fecha) de ese nacionalismo subestatal. Un fracaso que arrastra consigo a la nación subestatal y la eventual identidad nacional que allí hubiese podido emerger. Un fracaso que implica también necesariamente el éxito de otro nacionalismo y, por lo tanto, de otra nación e identidad nacional: la española.

La situación es muy diferente en el País Vasco y en Cataluña, en donde el nacionalismo subestatal ha gobernado durante la mayor parte de esos 45 años e incluso ha sido capaz de echar a andar un proyecto político independentista. ¿Qué sentido puede tener, entonces, poner en el mismo nivel al hablar de identidad nacional a comunidades autónomas con un nacionalismo subestatal muy minoritario e incluso marginal (cuando no directamente inexistente) y a territorios como el vasco o el catalán, en donde sí parece tener sentido hablar de una identidad nacional subestatal diferente de la española? Desde el punto de vista analítico, desde luego, ninguno. En el fondo, vendría a ser lo mismo (por lo falaz de la asociación) que hablar de identidad nacional para otras identidades etnoterritoriales que también tienen las personas, como las que podemos encontrar asociadas a su ciudad o

provincia de residencia, o al hecho de vivir en el campo o en la ciudad. Son también, es claro, identidades etnoterritoriales. Pero nacionales, desde luego no.

Si desde el punto de vista académico no tiene sentido comparar la identidad catalana con la andaluza en términos de “nación” (como no sea, es claro, para decir que la andaluza en realidad es española, y ahí ya sí estaríamos hablando de una identidad nacional), no se ha de ser quizás especialmente malicioso para verle a esa tesis de la identidad dual un significado político (consciente o inconsciente: el nacionalismo banal, ya saben): si la identidad andaluza o la gallega es tan nacional como la vasca, entonces puede jugar plenamente su papel esa otra tesis falaz producida por los nacionalismos estatales (también desde la academia, por supuesto), que quiere que todo nacionalismo subestatal que compite de manera eficaz contra ellos, discutiendo así su hegemonía en el marco del territorio estatal, sea un nacionalismo étnico, peligroso para la democracia y extremo en sus demandas. Y es que mucho más modestos son, ciertamente (si se adopta semejante punto de vista), los nacionalismos andaluz o aragonés, que, por no pedir, es posible que ni hubiesen pedido la autonomía política de no haber estado ahí esos dos otros nacionalismos subestatales, estos sí más y mejor organizados, el vasco y el catalán, que bien pueden ser vistos como la auténtica locomotora y razón de ser de la descentralización política en España desde 1978.

Al despolitizar y banalizar de este modo lo nacional, lo que se hace es nivelarlo por abajo, reducirlo a su dimensión cultural premoderna, como fenómenos (nacionalismo, nación e identidad nacional) que no necesitan estar politizados para existir y merecer ser tenidos en cuenta. No solo no lo necesitan (como el nacionalismo de Estado dice que pasa con su nación), sino que, a nivel subestatal, se entiende que es deseable que no lo estén. La tesis de la identidad dual encaja a la perfección en esa particular representación de las cosas (la del nacionalismo dominante), pues podría así estar sugiriendo a los nacionalismos más pujantes que un perfil bajo es mucho más razonable: hagan ustedes como los andaluces o los gallegos, que ellos también tienen identidad nacional, pero no son una molestia para el proceso de

nacionalización español. Son, en efecto, identidades regionales espontáneamente compatibles con la española. Y lo son porque, en realidad, no tienen nada de nacional.

BIBLIOGRAFÍA

- CAGIAO Y CONDE, Jorge (2022): *Democracia y nación. España en el laberinto plurinacional*, Madrid, Los Libros de la Catarata.
- GARCÍA, Lluís y GRANDE, Imma (2012): *L'invent de l'espanyolitat. La construcció pseudocientífica de l'espanyolitat*, Barcelona, Fundació Catalunya-Estat.
- GARCÍA, Lluís; GRANDE, Imma y CUSSÓ, Roser (2017): “La question Moreno face à l'essor du séparatisme en Catalogne. L'identité duale est-elle nationale?”, *Revue Pole Sud*, n° 47, pp. 119-132.
- MORENO, Luis (1986): *Decentralization in Britain and Spain: the Cases of Scotland and Catalonia*, tesis doctoral, Edimburgo, Universidad de Edimburgo.
- (1997): *La federalización de España. Poder político y territorio*, Madrid, Siglo XXI.
- NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M. (2018): *Suspiros de España. El nacionalismo español (1808-2018)*, Barcelona, Crítica.

TERCERA PARTE
MONARQUÍA Y REPÚBLICA
EN LA HISTORIA DE ESPAÑA

CAPÍTULO 9

¿TIERRA DE TRONOS? LA NEGACIÓN DE UNA TRADICIÓN REPUBLICANA EN ESPAÑA

SERGIO SÁNCHEZ COLLANTES

Hay quienes presuponen, desde apriorismos esencialistas, que España no es un país de repúblicas; que la forma de gobierno que resulta consustancial a este rincón de Europa es la monarquía, y de ahí el secular arraigo del trono. En relación con esa premisa, se han formulado tesis muy conectadas: que aquí no hubo republicanos, o que no gozaron de suficiente fuerza, y que no existió una verdadera tradición republicana. Este tipo de asertos se difundieron interesadamente en el contexto de las luchas políticas, con el objeto de desacreditar otras alternativas de Gobierno. Del régimen de 1873 se dijo que fue una “República sin republicanos”, igual que del proclamado en 1931. Lo mismo se afirmó en su día de la Tercera República Francesa o de la de Weimar.

¿Cómo sostener que el republicanismo no tuvo arraigo en España? Es un fenómeno suficientemente documentado. Una estrategia ha consistido en identificarlo únicamente con las experiencias de Gobierno sobrevenidas en 1873 y en 1931, incidiendo además en su brevedad o fracaso, con lo que se soslaya lo que representó fuera de esos periodos en términos de cultura política, que se difundió y actuó sin necesidad de que existiera una república. Subyace ahí una concepción harto restrictiva del concepto de

“tradicción política”. Ante la evidencia de que, en efecto, el republicanismo sí había alcanzado notable implantación en España, se concibió en paralelo otro argumentario deslegitimador que enfatizaba la amenaza del tumulto popular, la naturaleza funesta de sus proyectos, el componente demagógico o la ruina en la que habría de sumir al país.

De modo que, con los años, se generaron paradojas llamativas. Como el gato de Schrödinger, que puede estar muerto y vivo al mismo tiempo, se ha subrayado tanto la debilidad del republicanismo patrio (fueron repúblicas sin base social) como su inexorable poder destructor (las turbas sembraron la anarquía y cundió el desgobierno). Curiosa tesis la del republicanismo débil o inexistente que, al mismo tiempo, se revela con la vigorosa capacidad de poner España patas arriba.

Algunos discursos antirrepublicanos de las últimas décadas han explorado otros senderos, tratando de disputarle al republicanismo la victoria moral que sus partidarios le atribuían en materia de derechos y libertades ciudadanas. Así, sus detractores se han esforzado en quitarle méritos como agente democratizador y le han opuesto las virtudes de la monarquía, aduciendo logros que van desde la estabilidad que trajo la Restauración de Cánovas hasta el papel de Juan Carlos I en la transición. Pero esta labor no parece sencilla ni en la teoría ni en la praxis. De un lado, el simple análisis de la prensa, los programas, los folletos y los discursos republicanos evidencia que la democracia —con el alcance semántico del concepto en el siglo XIX— constituyó un elemento doctrinal medular desde sus inicios, como en otros países del suroeste europeo. De otro lado, las propias dinámicas de funcionamiento interno —por ejemplo, en la elección o la gestión de las juntas directivas de los comités, los centros de reunión, los ateneos u otras sociedades— revelan el interés en socializar a las bases en prácticas que especialistas como Manuel Morales Muñoz han considerado una “escuela de ciudadanía”.

Naturalmente, quienes antaño manifestaron su preferencia por la república también incurrieron en contradicciones. Aunque esto no refuta lo dicho, hay que evitar la idealización y la “tentación mitificadora” sobre las que llamó la atención José Antonio Piqueras en los noventa. Al fin y al cabo, la historia de

todas las culturas políticas está repleta de paradojas e incoherencias. Así, que los ataques al caciquismo fueron un eje vertebral de los discursos republicanos es tan cierto como que hubo dirigentes y militantes que acudieron a los mismos procedimientos clientelares que denunciaban. Eran hijos de su tiempo. De igual forma, muchos republicanos tomaron parte en insurrecciones armadas o tentativas de acceso al poder por cauces no institucionales que consideraban legítimos, como de hecho ocurrió en toda Europa y América, mientras que otros, fuese por prudencia o convicción, se mostraron reticentes a tales aventuras. En fin, que el diputado Manuel Hilario Ayuso se opusiera al derecho de voto igualitario en 1931 es tan verídico como que su agrupación, el Partido Republicano Federal, había alumbrado las especulaciones más avanzadas en materia de sufragio femenino antes del novecientos, recogidas en algunos proyectos constitucionales del federalismo de la década de 1880.

Esos contrastes han dado pie a inexactitudes o distorsiones de bulto, no exentas de sesgos presentistas. A base de tergiversaciones, medias verdades y dobles raseros, habrá quien le niegue a la Segunda República el mérito de haber traído el derecho de voto a las mujeres alegando que hubo republicanos que se posicionaron en contra o que Primo de Rivera ya había concedido un “sufragio femenino”, sin detallar su carácter limitado y que no llegó a ejercerse. También se podrá culpar al federalismo de 1873 de provocar una guerra civil mientras se omiten todas las que se venían librando en nombre de reyes o dinastías. Y se podrá objetar la inestabilidad de aquel régimen por la sucesión de presidentes del Gobierno como si no se hubiera dado una fugacidad similar en gabinetes monárquicos, desde los umbrales del Estado liberal a la crisis de la Restauración.

Volviendo al inicio, la tradición republicana en España sumaba alrededor de un siglo de historia cuando se proclamó la Segunda República. Más allá de las expresiones ambiguas, circunstanciales o inciertas —según los casos— de las primeras décadas del XIX, en los treinta se fueron consolidando unas ideas políticas radicales a la izquierda del progresismo. No está de más recordar que allá por 1842 hubo un diputado, Pedro Méndez Vigo, que en las Cortes se definió públicamente como republicano. En años posteriores,

quienes profesaban tales doctrinas impulsaron o participaron en un sinfín de asociaciones de socorros mutuos, sociedades instructivo-recreativas y otros espacios donde circuló su ideario, sin renunciar, en algunos casos, a la vía insurreccional o conspirativa. Y a partir de los años cincuenta, ya inequívocamente, se hizo visible el republicanismo organizado. El asesinato en 1858 de un popular demócrata en Sagunto, Tomás Bru, estimuló una suscripción de apoyo que hizo aflorar un sinfín de grupos en toda España, a menudo liderados por quienes luego se distinguirán al frente de los partidos locales. Florencia Peyrou ha rastreado esos núcleos y contabilizado hasta 28.630 firmantes, de un total de 346 poblaciones, incluyendo 1.265 mujeres. Pocos meses después, en junio de 1861, la sonada insurrección de Loja juntó a 6.000 sublevados como mínimo. Eso sí, ya entonces el republicanismo no constituía una doctrina monolítica y abundaron las controversias doctrinales, como se aprecia en los periódicos demócratas de los sesenta. A la altura de 1868, ya se había configurado un universo propio de símbolos, héroes y mártires que se enriquecerá en el futuro y que interiorizaron numerosos artesanos y obreros, clases medias y hasta conspicuos representantes de la burguesía de provincias.

Las investigaciones más recientes confirman la amplia difusión del republicanismo, incluso en áreas rurales que se tenían por inmunes a su penetración. De esto, naturalmente, no hay que deducir que fuesen ideas mayoritarias, pero cuando la legalidad permitió que estas oposiciones se mostrasen sin cortapisas, el republicanismo emergió con una fuerza considerable, particularmente —aunque no solo— en los entornos urbanos. Un par de meses después de la revolución de 1868, por ejemplo, una serie de manifestaciones recorrieron las calles de varias ciudades españolas movilizando a una legión de simpatizantes en unas cantidades que ni siquiera la prensa conservadora pudo negar. Sorprenderá menos que la asistencia estimada en Barcelona oscilase entre 40.000 y 60.000 personas, o que se hablase de 20.000 en Valencia, Zaragoza o Sevilla; pero hubo muchas localidades para las que se dieron cifras en absoluto desdeñables (Málaga, 16.000; Alcoy, 15.000; Gerona y Cartagena, 12.000; Tortosa, Córdoba y Santander, 8.000; Huesca, Cádiz u Oviedo en torno a 7.000; 4.000 en Reus,

Teruel o Valdepeñas; unas 1.500 en Logroño, etc.). Aquellos días, cerca de 14.000 electores votaron el comité republicano de Madrid. Incluso para las insurrecciones de 1869, se calcularon unos 50.000 federales implicados, según unas declaraciones hechas pocos años después en el Congreso sin que nadie rectificara la cifra. En aquellos tiempos, por cierto, Juan Prim negó en las Cortes más de una vez que en España hubiera republicanos.

La primera experiencia de Gobierno republicano, en 1873, con frecuencia es sometida a un escrutinio y un rasero que tampoco resistirían fácilmente otros periodos de gestión monárquica. Como estudió Jover Zamora, la construcción del mito antirrepublicano se intensificó a raíz de aquel bullicioso ensayo, aprovechado para vincular el republicanismo con el desorden, la anarquía e incluso el asesinato. Desde luego, siempre ha existido entre sus afines un contramito dulcificado de aquella República, pero no resultó tan poderoso como el negativo, que ha perdurado hasta la actualidad; más aún, el recuerdo de 1873 ni siquiera parece muy reivindicado por quienes hoy profesan ideas republicanas, en cuyo imaginario domina absolutamente el régimen de 1931. A todo ello contribuyó mucho el estallido cantonal, que sí representó un desafío al orden político y social vigente pero no un pulso separatista, como tantas veces se ha sostenido: aquellos territorios invocaron su soberanía para, en un proceso revolucionario desatado de abajo arriba, construir una República Federal española de la que jamás negaron ser parte.

En cualquier caso, salta a la vista que la historia de la Primera República se ha presentado casi siempre “desde arriba”, reduciéndola a una sucesión de presidentes y de lances parlamentarios que margina e ignora las numerosas iniciativas promovidas en el ámbito de los municipios. Dicho escenario local, por añadidura, constituía el horizonte preferente de la actuación republicana, como ha subrayado Ángel Duarte, aunque a veces lo fuera también por un repliegue forzoso. Descendiendo a la escala micro, sigue habiendo un campo de trabajo de lo más estimulante para las futuras investigaciones. En este sentido, no es casual que muchas poblaciones, con el tiempo, adquirieran fama de “ciudades republicanas”, como Valencia, Barcelona, Cádiz, Reus, Alicante... De hecho, en algunas hubo mayoría de

concejales republicanos durante mucho tiempo, y no siempre se trata de los “casos estrella”, como ilustra La Coruña, donde mantuvieron la hegemonía entre 1891 y 1923. Incluso en poblaciones como Oviedo, identificadas en el imaginario colectivo con la autoridad clerical y el conservadurismo, gozaron de esa mayoría en el ayuntamiento durante la primera fase de la Restauración, momento especialmente adverso para la idea republicana. Admitiendo que deben manejarse con cautela, parecen significativos los resultados electorales de ciertos municipios, máxime cuando empezaron a votar todos los varones mayores de 25 años.

Por otro lado, resulta llamativo que el primer tramo de la Restauración, periodo tradicionalmente interpretado como de una gran debilidad y postración republicana tras el fracaso de 1873, sea justo cuando se asiste al surgimiento del mayor número de partidos políticos republicanos antes de 1931, al multiplicarse el número de las formaciones que rechazaban de forma expresa la monarquía. Sin negar la importante fuga operada en las bases hacia posiciones dinásticas, por parte de sectores desencantados, no hay que olvidar que también se asiste al fenómeno inverso, destacando el afianzamiento de un proceso iniciado en 1873: la republicanización de una parte sustancial del radicalismo liderado por Manuel Ruiz Zorrilla y de posiciones accidentalistas persuadidas de la inviabilidad de una democratización del sistema por la vía monárquica. Lo que no es un mito, efectivamente, es la endémica división que imperó en el campo republicano, que sin duda le restó fuerza, aunque tampoco se pueda considerar un rasgo privativo de dicho espacio político. Si acaso, lo que ayuda poco a entender la penetración del republicanismo sería incidir más en las diferencias que en los puntos que tuvieron en común.

Para tratarse de una idea en teoría vencida y con débiles apoyos, el republicanismo no dejó de causar gran preocupación en las autoridades restauracionistas, que desde el primer momento se cuidaron de prohibir “de un modo terminante y absoluto atacar directa o indirectamente, ni por medio de alegorías, metáforas o dibujos al sistema monárquico-constitucional”. Pero nada impidió que en los años posteriores se tejiera una amplia red de comités republicanos en la mayoría de las provincias, a menudo como parte de una

constelación asociativa que incluyó clubes políticos, centros instructivos y redacciones de periódicos, por no hablar del ascendiente que ejercían sobre infinidad de espacios populares y obreros. La amplia supervivencia del republicanismo se manifestó cada 11 de febrero en el sinnúmero de celebraciones que, con diversa concurrencia, se organizaron en todas las regiones para evocar la proclamación de la Primera República española y también en las medidas ordenadas por el Ministerio de la Gobernación y los gobernadores civiles para vigilar estrechamente lo que sucedía en tales actos.

Hacia finales del ochocientos, la tradición republicana ya era lo suficientemente dilatada como para que varios publicistas se lanzasen a escribir su propia historia. Enrique Rodríguez Solís, Antonio Sánchez Pérez o Enrique Vera y González construyeron relatos que, por supuesto, trataban de hacerla artificiosamente remota y dotarla de antecedentes gloriosos incluso anteriores al medievo, reinventándose el pasado como una cadena de batallas por la libertad. Estas partes del relato sí que fueron pródigas en fabulaciones al servicio del mito republicano.

Otro lugar común sobre el periodo de la Restauración tiene que ver con la actitud de las clases trabajadoras y artesanas hacia la República. Durante mucho tiempo se creyó que 1873 había supuesto un enorme desengaño, que había generado alejamiento y una gran transferencia de bases sociales hacia el obrerismo militante; sin embargo, diversos estudios locales documentan la continuidad de esos vínculos por lo menos hasta el cambio de siglo. Los discursos republicanos, sobre todo del campo federal, siguieron cautivando a miles de trabajadores en la España restauracionista, aun cuando sus expectativas fueran más ambiciosas en términos de emancipación de clase, como revela la asimilación sui géneris de ideas, con relecturas más plebeyas de la fraternidad e interpretaciones de la futura República en clave social e igualitaria. Muchos dirigentes del anarquismo y del socialismo de principios del XX se habían formado políticamente en las filas republicanas o en entornos familiares situados bajo el ascendiente de dicha tradición política. No hay que subestimar, además, el calado de esa doble militancia — republicana e internacionalista— que varias investigaciones han constatado durante el Sexenio Democrático y que invita a reflexionar sobre la naturaleza

compleja y fluctuante de las lealtades políticas.

Por lo demás, no solo está suficientemente probado que hubo un buen número de republicanos en España, sino también republicanas, aspecto este que tardó en visibilizarse en la propia historiografía. Las investigaciones de las últimas décadas han exhumado un universo de simpatías femeninas más allá del activismo militante, cuyas formas de participación no eran las de sus correligionarios masculinos, por lo que hay que buscarlas en otros espacios y actividades sobre los que las fuentes callan muchos detalles, como ha podido comprobar Gloria Espigado al rastrear su presencia anterior a 1873. Más tarde, los círculos librepensadores les brindaron unos mecanismos de inserción en el terreno de la política que han desentrañado autoras como Dolores Ramos. Desde una Guillermina Rojas hasta una Belén Sárraga o una Carmen de Burgos, por citar un puñado de nombres, se aprecia una genealogía cuya proyección en otras republicanas más anónimas también van constatando sucesivos estudios.

El cambio originado en 1931, en definitiva, no se comprendería del todo sin reconocer la existencia de una larga tradición de cultura política que, con la diversidad y las contradicciones que se quieran objetar, se ancló en unas bases sociales que aseguraron su pervivencia sin la necesidad de que hubiera una república proclamada. Más aún, tras el golpe de Estado de 1936, la purga que los sublevados desataron contra los partidarios de la idea republicana tampoco se olvidó de sus predecesores, fenómeno que ilustran las quemaduras de libros publicados en las décadas anteriores o la supresión en el callejero de nombres como Pi y Margall, Salmerón o Rosario de Acuña, entre otros muchos. En cualquier caso, es necesario seguir reflexionando sobre las propias incapacidades del republicanismo, que ni siquiera acertó a prever los virajes sobrevenidos el 11 de febrero de 1873 o el 14 de abril de 1931.

Precisamente, la reacción de sus adversarios en distintos momentos sugiere que la pujanza republicana en España no fue cosa menor. Tampoco parece responder a un fenómeno marginal el hecho de que el diccionario terminase incluyendo una acepción que define la república como un “lugar donde reina el desorden”. Muchos estereotipos sobre el republicanismo histórico, en algunos casos forjados al calor de las disputas políticas, han sido

desmentidos o, cuando menos, matizados por las investigaciones de los últimos años. Sin embargo, y quizás por ello, también ha cobrado fuerza un revisionismo histórico tan pródigo en censuras como parco en ecuanimidad. Minusvalorar o invisibilizar la agencia del republicanismo en España, incluso criminalizarlo, fue una práctica extendida en el siglo XIX que se prolongó en el XX, tratando incluso de achacarle la responsabilidad de la Guerra Civil o simplemente negando su contribución a la democratización del país. En relación con esto último, han llegado a escamotearse hasta los precedentes en el campo monárquico, encarnados por la figura de Amadeo. Es de suponer que con ello se pretendía reforzar el capital simbólico de Juan Carlos I y de un relato mítico que, por otro lado, ha acabado diluyéndose en medio de un rosario de escándalos. Todavía hoy, hay quienes piensan que España es más monárquica que republicana, pero el CIS no pregunta por estos temas desde 2015.

BIBLIOGRAFÍA

- BERJOAN, Nicolás; HIGUERAS CASTAÑEDA, Eduardo y SÁNCHEZ COLLANTES, Sergio (eds.) (2021): *El republicanismo en el espacio ibérico contemporáneo. Recorridos y perspectivas*, Madrid, Casa de Velázquez.
- DUARTE, Ángel (2013): *El republicanismo. Una pasión política*, Madrid, Cátedra.
- JOVER ZAMORA, José María (1991): *Realidad y mito de la Primera República*, Madrid, Espasa-Calpe.
- OROBON, Marie-Angèle *et al.* (dir.) (2024): *Diccionario simbólico del republicanismo histórico español (siglos XIX-XX)*, Granada, Comares.
- PEYROU, Florencia (2008): *Tribunos del pueblo. Demócratas y republicanos durante el reinado de Isabel II*, Madrid, CEPC.
- PIQUERAS, José Antonio y CHUST, Manuel (eds.) (1996): *Republicanos y repúblicas en España*, Madrid, Siglo XXI.
- RAMOS PALOMO, María Dolores (eds.) (2005): “República y republicanas en España”, *Ayer*, nº 60, pp. 9-224.

CAPÍTULO 10
MONARQUÍA Y DEMOCRACIA,
¿DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA?

GUILLERMO MARÍA MUÑOZ

Desde un tiempo a esta parte está recobrando fuerza uno de los mitos políticos más potentes de la historia reciente de España. Este defiende que la democracia tiene su razón de ser en el régimen monárquico, equiparando ambos como las dos caras de una misma moneda. Según esta narrativa, la mayoría de las democracias más consolidadas del mundo son monarquías, gracias a las cuales han conseguido tal desarrollo político. La Corona, a pesar de perder toda su capacidad de acción política, sigue conservando un poder simbólico que evitaría posibles tendencias autoritarias de un presidente o un partido político. Por el contrario, las repúblicas democráticas, al carecer de esta fuerza moderadora, tendrían menos trabas para realizar dicha conversión a una dictadura. Buen ejemplo de ello —según este argumentario— serían la cantidad de repúblicas que son dictaduras autoritarias o totalitarias. Es decir, las monarquías producirían mejores democracias que las repúblicas. Este relato se corresponde, más bien, en realidad, con un verdadero mito político, que, en España, además, comenzó a adquirir importancia desde la transición, a tenor del papel democratizador de Juan Carlos I. Sus recientes escándalos financieros —amén de los amorosos— y la consecuente pérdida de prestigio de la Corona han hecho que algunos sectores saquen a relucir, otra vez, el

mito de la monarquía y la democracia como las dos caras de un mismo binomio, a fin de mantener la reputación y la razón de ser del trono.

Existen varios problemas con esta interpretación. En primer lugar, defender una posible intervención del rey en favor de la moderación política puede resultar algo harto peligroso. Más en una sociedad como la actual, donde las *fake news* tienden cada vez más a distorsionar la realidad. ¿Qué se consideraría “radical” o peligroso para la democracia? ¿Cuál sería la circunstancia a partir de la cual el monarca tendría que intervenir en pro de la democracia? ¿Y si el rey considera algo como “radical” a pesar de no serlo? ¿Estaría justificada su intervención? Ciertamente, si algo nos ha enseñado la historia, especialmente la de España —como demostró Alfonso XIII—, es que para que un rey se considere parlamentario —que no constitucional— y refuerce así la democracia, debe necesariamente abstenerse de cualquier intervención política, por mínima que sea esta. De lo contrario, se pondrá en contra a una parte de la población que no piensa como él. El discurso de Felipe VI de octubre de 2017, como respuesta al independentismo, así lo demostró, al perder la Corona popularidad en Cataluña y el País Vasco. La importancia de la monarquía parlamentaria en su relación con la democracia no reside en la palabra “monarquía”, sino en el adjetivo “parlamentaria”.

Además, la historiografía contradice este mito político que equipara monarquía y democracia, pues el pasado demuestra que la Corona puede tanto reforzar una democracia como socavarla. Depende, en gran medida, de su titular, el rey, de sus inclinaciones y tendencias políticas, pues la monarquía es una institución jerarquizada que, en muchas ocasiones, obedece a los mandatos del soberano. Fernando Savater, en un artículo de opinión de 1987 en relación con esto, sostuvo que el régimen monárquico era, en realidad, una “lotería primitiva”, puesto que todo dependía del carácter del monarca.

No es necesario irse a otros continentes. Al contemplar la misma historia de España y la europea, se puede apreciar como no es cierta dicha correlación entre el régimen monárquico y el democrático. El periodo de la Europa de entreguerras mostró cómo las monarquías supieron amoldarse a los

vientos autoritarios que soplaban, constituyéndose en parte fundamental de no pocas dictaduras. Los estudios que defienden el mito democrático de la Corona tienden a obviar y olvidar —no sabemos si deliberadamente— que desde 1923 hasta 1930 en España existió la primera dictadura moderna, la de Miguel Primo de Rivera, que convivió perfectamente bajo la monarquía de Alfonso XIII, quien la apoyó sin fisuras. De hecho, el monarca español fue uno de los principales artífices del debilitamiento del sistema de la Restauración y de su parlamentarismo en los años previos a 1923, favoreciendo constantemente, por ejemplo, a los militares en sus luchas contra el poder político. La irrupción de la Revolución rusa hizo que Alfonso XIII gravitase hacia posturas autoritarias y dictatoriales, como gran parte de los militares y las derechas conservadoras de su tiempo. El desastre de Annual y las acusaciones lanzadas contra el trono no hicieron sino reforzar esta tendencia, asumiendo el monarca unos parámetros claramente nacionalcatólicos. El engrandecimiento de la patria, siempre vinculada a la religión católica, se convirtió en su auténtica obsesión. España debía lograr la recuperación de su antiguo esplendor imperial para colocarse al nivel del resto de potencias europeas. Tras la crisis de las democracias en la primera posguerra mundial, el liberalismo y el parlamentarismo comenzaron a dejar de verse como un sistema factible. Más bien al contrario, su existencia solo conllevaba la irrupción del socialismo —un cajón de sastre donde cabían todos los movimientos izquierdistas—. Las dictaduras, o “gobiernos fuertes”, comenzaron a estilarse y a concebirse como una posible solución a los nuevos problemas de posguerra.

De esta manera, Alfonso XIII contribuyó, y no poco, a dividir a los partidos políticos y menoscabar su poder. Es más, su apoyo al golpe de Estado que perpetró Primo de Rivera en 1923 fue más que fundamental para su triunfo. Desde estos momentos, el trono se convirtió en un aliado vital para la dictadura, siendo su principal fuente de legitimidad y uno de los primordiales apoyos del marqués de Estella. Siempre amparándose en su nacionalismo como justificación de su apoyo al dictador. Alfonso XIII pensó que el régimen dictatorial era una buena forma de conseguir el tan anhelado resurgir de España. Por su parte, Primo de Rivera fomentó, como nunca antes, el

monarquismo en el discurso oficial del Estado, de tal manera que las apariciones públicas del rey, con auténticos baños de masas, se multiplicaron durante los años veinte. Primo de Rivera, incluso, intentó convertir la monarquía en una de las esencias nacionales, al igual que la religión lo era para el nacionalcatolicismo. Una tarea en la cual el soberano colaboró estrechamente. Así las cosas, el trono fue un verdadero puntal de la dictadura primorriverista. De hecho, la caída de este vino dada por su distanciamiento con el soberano, a raíz de una oposición militar cada vez mayor hacia el régimen, que se iba tornando en abierto republicanismo. Sin ninguna duda, Alfonso XIII es una buena muestra de hasta qué punto monarquía y democracia no son las dos caras de una misma moneda. El soberano ayudó a socavar el debilitado liberalismo de la Restauración, apoyó un golpe de Estado contra un Gobierno constitucional, además de convertirse en una pieza fundamental del régimen dictatorial. Es incuestionable que Alfonso XIII fue un rey con tendencias dictatoriales, que abrazó el nacionalcatolicismo y que hizo todo lo posible por evitar la democratización de España.

Las diferencias con la actuación de Juan Carlos I durante el 23-F no pueden ser mayores. Más allá de su connivencia, implícita o no, con maniobras previas sospechosas, la actuación del rey fue muy diferente de la de su abuelo. Además, al ostentar la jefatura de las fuerzas armadas y al tratarse de un golpe de Estado militar, sí cabía la intervención del rey en favor de la Constitución y del Gobierno legítimo. Lo que no hizo Alfonso XIII, que decidió plegar, definitivamente, la política a los deseos castrenses en 1923. Esto, sin duda, demuestra que la monarquía puede tanto contribuir a la democracia como minarla y reforzar un régimen dictatorial. Es decir, la relación de la monarquía con la democracia es accidental, dependiendo de su titular, y no causal, ni mucho menos. Esto vendría confirmado por la postura posibilista que, a largo plazo, asumieron gran parte de los intelectuales españoles con respecto a la forma monárquica del Estado. Dependiendo del grado de apoyo del rey al sistema democrático, normalmente los intelectuales fluctuaron entre el republicanismo y el monarquismo. En el caso de Alfonso XIII y su autoritarismo, se pusieron mayoritariamente en su contra. Lo que no

ocurrió con Juan Carlos I dado su apoyo a Gobiernos democráticamente elegidos. Una parte importante de los intelectuales españoles a lo largo del siglo XX lo vieron claramente: su monarquismo o republicanismo debía ser circunstancial, en función del carácter democrático que asumiera el trono, el cual no se suponía de forma natural. En otras palabras, eran posibilistas, lo importante radicaba en la democracia y no en la forma de Estado.

Este mito tampoco se sostiene bajo el prisma de la historia comparada, ni siquiera dentro del marco europeo, el predilecto para los mitómanos monárquicos. Como sucede con tantas otras cuestiones historiográficas, España no fue excepcional en cuanto a la intersección de una dictadura y una monarquía al mismo tiempo. Aunque sí fue pionera y referente en este sentido. Durante la Europa de entreguerras se normalizó este fenómeno, inexistente hasta esos momentos, comenzando así a convivir una serie de monarquías dictatoriales o dictaduras monárquicas, donde incluso algunos reyes se erigieron en autócratas. Un buen número de reinos pasaron a asumir formas de gobierno autoritarias, cuando no fascistas o altamente totalitarias. España, en este sentido, no hizo sino seguir la senda marcada por Mussolini. Un año antes que la dictadura de Primo de Rivera, en 1922, Italia asumió una dictadura fascista que mantuvo el régimen monárquico como forma de Estado. Al igual que en el caso de Alfonso XIII, en esta ocasión el rey también fue clave para el triunfo de la marcha sobre Roma. Sin embargo, con el paso de los años, a medida que se fue desarrollando el carácter totalitario del régimen, la Corona se fue vaciando de contenido y acabó fagocitada por el fascismo —algo que no sucedió en otros países—, lo que no impidió a Víctor Manuel III seguir apoyando públicamente el régimen. Sin duda, los casos italiano y español marcaron la pauta y el modelo a seguir por otros países durante el periodo interbélico, demostrando que viejas formas de Estado —como la monarquía— eran perfectamente compatibles con maneras de gobierno nuevas y modernas —como lo eran las dictaduras autoritarias o totalitarias—. Por ejemplo, en Yugoslavia y Rumanía se prestó especial atención a lo que sucedía en la España primorriverista, contemplada como una dictadura estable y modernizadora que evidenciaba el carácter autoritario de la monarquía y su compatibilidad con formas de gobierno arbitrarias.

Es más, un examen somero del panorama europeo de entreguerras pone en cuestión el mito de la equiparación entre monarquía y democracia y su idea de que la dictadura sea esencialmente republicana, como se ha sostenido a veces. Durante este tiempo existieron más dictaduras bajo monarquías que con sistemas republicanos. En total, fueron siete las dictaduras monárquicas de la Europa de entreguerras: Italia en 1922, España en 1923, Bulgaria en dos ocasiones (en 1923, con la dictadura de Tsankov, y en 1935, con una dictadura regia, ambas bajo el reinado de Boris III), Yugoslavia en 1929, Grecia en 1936 y Rumania en 1938. En algunos casos, como el de Alejandro I de Yugoslavia, Boris III de Bulgaria en 1935 o Carol II de Rumanía, los soberanos se autoproclamaron como dictadores personales. Tras socavar el poder de los partidos y Parlamentos, asumieron ellos mismos las riendas del Gobierno y de la toma de decisiones. En Hungría el dictador Miklós Horthy asumió oficialmente el puesto de “regente”, por lo que nunca dejó de considerarse un reino —aunque sin rey, al estilo de la España franquista—. Mientras que en Albania, en 1928, el militar Ahmet Zogu decidió autoproclamarse rey —bajo el nombre de Zog I— a fin de consolidar su poder dictatorial. Por el contrario, dictaduras eminentemente republicanas fueron las menos: el Portugal de Salazar, la Alemania nazi, la URSS, Lituania en 1926 o la Polonia de Pilsudski.

Todas estas dictaduras monárquicas fueron gobiernos claramente autoritarios, o altamente fascistizados, como en Grecia o Rumanía. Además, compartieron una serie de rasgos en común, más allá de la centralidad de las coronas en la llegada, triunfo y sostén de estos regímenes. En todos los casos se trataron de “reyes-soldados”, en atención a su control nominal y efectivo de las fuerzas armadas, una herramienta que los soberanos emplearon para mantener o reforzar su poder político. La religión fue otro ingrediente fundamental de estas monarquías dictatoriales, siempre vinculada con la noción de patria, algo necesario para mantener la idiosincrasia nacional, supuestamente inmutable. En Italia, en 1929, el fascismo firmó los Pactos de Letrán con el Vaticano, que ponían fin a décadas de conflicto de la Santa Sede con el Estado italiano en la llamada cuestión romana. Boris III de Bulgaria supeditó el derecho al voto —que era más bien una entelequia— femenino a

la maternidad. El *The New York Times* de entonces (17 de enero de 1937) definió esta política como “No Babies, No Ballots”. En Rumanía, Carol II puso al frente de su Gobierno personal al patriarca ortodoxo Miron Cristea, claro símbolo del apoyo de la iglesia a la dictadura regia. Por su parte, en la España de Primo de Rivera y Alfonso XIII, el catolicismo adquirió una relevancia de primer orden, siendo el primer régimen en asumir el nacionalcatolicismo como ideología oficial del Estado. Un clarísimo precedente de la dictadura franquista.

Fueron todas ellas, también, dictaduras notoriamente antiliberales, reaccionarias y contrarrevolucionarias. Se suspendieron las constituciones —o se crearon unas nuevas que reforzaban el poder regio— y los derechos más fundamentales, se clausuraron los Parlamentos o se sustituyeron por Cortes de tipo corporativista y se prohibieron los grupos políticos. En muchos casos se impulsaron una serie de partidos oficiales o únicos: en Italia, el Partido Nacional Fascista; en Yugoslavia, Alejandro I creó el Partido Nacional Yugoslavo; en Grecia, se fundó la Organización Nacional de la Juventud (EON) y en Rumanía, Carol II organizó el Frente del Renacimiento Nacional, que contó con su propia organización juvenil, los Centinelas de la Patria, que realizaban el saludo romano con su propio uniforme e impulsaban un verdadero culto al soberano. Por su parte, Primo de Rivera, aunque no prohibió los partidos políticos, promovió su propio movimiento: la Unión Patriótica, cuyo lema era “Religión, patria y monarquía”, y extendió la milicia del somatén —hasta esos momentos, circunscrita a Cataluña— a todo el territorio nacional, con el fin de mantener el orden público. La obsesión por los movimientos obreros fue otro de los rasgos comunes de estas dictaduras monárquicas. En las “elecciones” celebradas en Bulgaria en 1937, Boris III impuso el requisito previo de firmar una declaración anticomunista para poder ejercer el sufragio. Jorge II de Grecia dio el poder al general Ioannis Metaxas en 1936 como respuesta a las negociaciones que los partidos tradicionales entablaron con los comunistas, que con un escaso número de diputados se habían convertido en la llave de acceso al poder. Durante el resto de la dictadura helénica, la persecución a los movimientos obreros fue violenta y persistente. En España, Primo de Rivera, con la aquiescencia

regia, también hostigó a comunistas y anarquistas, convertidos en enemigos internos de la patria, aunque buscó la colaboración de los socialistas en un intento, fracasado, por domesticarlos y atraerlos al régimen.

No obstante, quizás, la cualidad más característica de todos estos regímenes dictatoriales y monárquicos de la Europa de entreguerras sea la asunción de un nacionalismo exacerbado, esencialista, radical y fuertemente centralista. Alejandro I de Yugoslavia decidió fundar su dictadura personal en 1929 con el fin de fortalecer la precaria identidad yugoslava. Cambió el nombre oficial del país —hasta esos momentos denominado Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos— por el de Yugoslavia y persiguió duramente el fomento de otras identidades nacionales, especialmente la croata. Boris III continuó, durante su dictadura, con el proceso de “vulgarización” que habían emprendido Gobiernos previos, pasando a eliminar toda nomenclatura turca de la toponimia del país. En Grecia, Jorge II y Metaxas también castigaron los nacionalismos periféricos, sobre todo el albanés y macedonio. Este último también resultó represaliado por Boris III en Bulgaria. En Rumanía se acentuaron las políticas antimoldava y antihúngara, que reclamaban una serie de territorios incorporados al país tras la Primera Guerra Mundial. En la España de Primo de Rivera, la persecución al nacionalismo vasco, pero sobre todo al catalanismo —ya fuera autonomista o independentista—, fue uno de los rasgos más distintivos del régimen y uno de los motivos por los que el dictador asumió el poder. Para ello, contó con la entusiasta colaboración de Alfonso XIII, quien comenzó a realizar largas estancias anuales en Barcelona desde 1924, en su nuevo palacio de Pedralbes, con el fin de españolizar la región.

No son casos excepcionales o aislados ni mucho menos. Más bien, se estaría ante un fenómeno poco conocido, pero habitual, en la Europa de entreguerras. Un fenómeno que demostró no solo la compatibilidad de monarquías con dictaduras modernas, sino que incluso estas venían auspiciadas por los propios soberanos. En los discursos del mito del carácter democrático de la monarquía siempre se omite la existencia de estas dictaduras regias del periodo de entreguerras, también la España de Primo de Rivera y Alfonso XIII. Algo harto sorprendente. Incluso, a pesar de que

algunos autores realicen un análisis histórico y comparado del binomio monarquía-democracia, no aparecen los fenómenos monárquicos dictatoriales, ni pasados ni presentes. Se comete la falacia de comparar las monarquías parlamentarias europeas con las repúblicas “populares democráticas”, lo que supone un falso cotejo por varios motivos. En primer lugar, porque no se tiene en cuenta la presencia actual de monarquías claramente dictatoriales, más allá de la saudí, como la de Marruecos o Tailandia. Después, se excluye la existencia de las dictaduras monárquicas de entreguerras que se han visto en las páginas precedentes, ignorando también, desde luego, la importancia que tuvieron los tronos en la llegada, instauración y sostenimiento de las susodichas tiranías.

En definitiva, no se puede aducir que la monarquía viene a ser la misma cara de la moneda que la democracia, que aquella, por su propia naturaleza, tiende a reforzar el carácter democrático de las naciones. Establecer una relación causal y directa es, simplemente, una falacia a medias, un mito. Si bien, es verdad que la Corona puede llegar a robustecer una democracia, también es totalmente posible todo lo contrario, que ayude a socavarla y minarla hasta el punto de favorecer la instauración de una dictadura, tal y como ocurrió en la Europa de entreguerras. La monarquía nunca debe ser un fin en sí mismo que haya que preservar bajo cualquier coste, mucho menos, incitar a un soberano a intervenir en política por muy en peligro que esté —supuestamente— la democracia y por muy estabilizadora que sea su pretensión, a no ser que su actuación este contemplada por, y sea a favor de, la Constitución, como ocurrió el 23-F. La monarquía debe ser algo posibilista, accidental, que solo interese por su carácter “parlamentario”, es decir, democrático, el cual se sustenta, necesariamente, en la pasividad del rey, en la asunción de su función estrictamente simbólica, políticamente inactiva. Y, para eso, hay que mantener ajeno al soberano de tomar partido, aunque esta sea por el supuesto engrandecimiento de la nación o de la democracia. El caso de Alfonso XIII es paradigmático y debería ser una lección histórica aprendida. Si algo demostró la experiencia dictatorial de las monarquías europeas de entreguerras fue que su coqueteo autoritario conllevó, a corto o medio plazo, la desaparición de aquellas dinastías y la llegada de repúblicas.

Una monarquía nunca debería dar por supuesto que su mera existencia es beneficiosa, porque sí, para la democracia.

BIBLIOGRAFÍA

- COLOMBO, Paolo (2010): *La monarchia fascista. 1922-1940*, Bolonia, Il Mulino.
- CRAMPTON, Richard J. (2007): *Historia de Bulgaria*, Madrid, Akal.
- JIMÉNEZ, David (2024): “Los intelectuales y la monarquía (1902-2022)”, *Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas (REMCO)*, documento de trabajo 05/2024, octubre.
- MORENO LUZÓN, Javier (2023): *El rey patriota. Alfonso XIII y la nación*, Barcelona, Galaxia Gutenberg.
- MUÑOZ, Guillermo María (2020): “Entre coronas, cruces y banderas. Monarquía, religión y nacionalismo español en la dictadura de Primo de Rivera”, *Hispania Sacra*, nº 72, pp. 579-591.
- RIVERO, Ángel (2024): “¿Por qué las monarquías producen mejores democracias?”, *Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas (REMCO)*, documento de trabajo 02/2024, abril.
- ROTHSCHILD, Joseph (1979): *East Central Europe between the Two World Wars*, Washington, University Washington Press.
- VEIGA, Francisco (1989): *La mística del ultranacionalismo. Historia de la Guardia de Hierro, Rumania, 1919-1941*, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona.

CAPÍTULO 11

BULOS, ERRORES Y EQUÍVOCOS EN TORNO A LAS ELECCIONES Y LA POLÍTICA DE LA SEGUNDA REPUBLICA

JULIÁN SANZ HOYA

Las elecciones desarrolladas durante el periodo entre 1931 y 1936 han recibido una especial atención en los estudios sobre la primera democracia española. Asimismo, se han convertido en una referencia para marcar la periodización en libros de texto, manuales y monografías, con su habitual insistencia en el primer bienio, el segundo bienio y el Frente Popular, a veces con denominaciones que son, o pueden ser, objeto de debate. Además, las elecciones, sus resultados y sus consecuencias, como más ampliamente el panorama político en el que se desarrollaron, han dado lugar a frecuentes errores explicativos, inexactitudes, medias verdades y, en ocasiones, falsificaciones y bulos de neta intención propagandística. Todo ello ha venido deformando las visiones y alimentando los estereotipos más repetidos en relación con el régimen republicano, velando así la compleja realidad de la política española de aquellos años.

¿A qué tipo de errores, equívocos o manipulaciones me refiero? En primer lugar, están los que atañen a la limpieza y los resultados de las elecciones, en especial las que dieron lugar a la proclamación del régimen (las municipales de abril de 1931) y las de febrero de 1936. En ambos casos, se ha tratado de una manipulación interesada destinada a cuestionar la legitimidad

democrática de la Segunda República, que cargaría así con el supuesto pecado original, agravado por una pretendida quiebra democrática. Son argumentos que resultan muy funcionales sea a la legitimación o la relativización del intento golpista de julio de 1936, sea a la descalificación o la desvalorización de la democracia republicana. En segundo término, están los que se refieren a la lectura de los resultados y del panorama de partidos, que con frecuencia ha ahondado en una acusada polarización izquierda-derecha y una caracterización incorrecta, sesgada o mal entendida de los Gobiernos a los que dieron lugar. Se trata de cuestiones que han venido a abonar las visiones que tienden a contemplar el primer quinquenio republicano como antesala de la guerra, atravesado por un radical enfrentamiento entre derechas e izquierdas, con una fuerte inestabilidad y supuestos bandazos del electorado.

Como decía, los errores ya comienzan con las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. En los últimos tiempos ha recobrado vida la insistencia en que las fuerzas monárquicas habrían ganado las mismas, toda vez que en el conjunto de España resultaron electos más concejales monárquicos que republicanos. Con frecuencia, este argumento se basa en una nota del último gobierno de Alfonso XIII, muy incompleta y sesgada, que cita 22.150 concejales monárquicos y 5.875 republicanos. Se añade a ello el énfasis en que se trataba solo de elecciones municipales, inadecuadas para decidir un cambio de régimen, así como la acusación a los sectores izquierdistas de promover una movilización popular que forzó la situación, una suerte de golpe blando allanado por la escasa resistencia conservadora.

Esta visión, que busca cuestionar la legitimidad de la primavera democrática que trajo pacíficamente la República, se basa en ignorar por completo los hechos, los números y el contexto. Así, contamos desde hace décadas con un cálculo aproximado de la adscripción de los concejales electos, que apunta a números similares para ambos bloques: 40.234 monárquicos, 36.282 de la conjunción republicano-socialista y 3.219 de Esquerra Republicana, un millar de la Lliga, 267 nacionalistas vascos y 67 comunistas. Con todo, la cuestión fundamental es la imposible equiparación entre los resultados de municipios urbanos y rurales, ni por la diferencia de

votos que implica una concejalía en un pueblo o en una ciudad (50 concejales de Barcelona equivalían en voto a los 18.000 concejales de los ayuntamientos menores) ni en su representatividad como reflejo de un voto libre. Los estudios sobre la Restauración son unánimes en el peso del clientelismo, la manipulación y el control caciquil en las elecciones de las zonas rurales, con un electorado en general menos politizado, mientras que en las ciudades se abrían paso una lucha política más dinámica, un voto más sincero y unos resultados mucho menos manipulables. En muchos municipios medianos y pequeños ni siquiera se llegó a votar en abril de 1931, pues el sistema electoral aseguraba la proclamación automática cuando había tantos candidatos como concejalías, lo que solía ser reflejo del sólido dominio de los aparatos caciquiles y originó que 29.804 concejales fueran proclamados sin elección (37% del total), beneficiando masivamente a candidaturas monárquicas (casi el 90%).

Allí donde se votó, en municipios que sumaban el 80% del censo, resultaron por tanto elegidos más de 36.000 concejales republicanos por apenas 14.000 monárquicos (con la Lliga). No contamos con un cálculo global de votos por candidaturas, pero resulta claro que la ventaja del voto republicano fue muy notable, pues ganó con amplitud en los ayuntamientos más populosos, además de muchos medianos y pequeños. En las 50 capitales de provincia los republicanos ganaron en apoyo en 44, sumando 440.945 votos por 195.147 los monárquicos, como vencieron, por lo general, en las ciudades restantes. Este hecho fue leído inequívocamente por todos los protagonistas, incluida la prensa conservadora, que subrayó la neta derrota monárquica, como también hizo Alfonso XIII: “Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo”. Pues todos eran conscientes, como había quedado claro en los mítines de campaña, que los comicios habían adquirido un carácter plebiscitario, con lo que el corolario era claro: el país había votado por la República, expresando su rechazo al rey y su esperanza en una república democrática. Eso mismo expresaban las masas que llenaron las plazas de muchas localidades expresando su alegría ante la victoria republicana y su deseo de un cambio de régimen.

En suma: las elecciones de abril otorgaron una clara mayoría de apoyos a las candidaturas de la conjunción republicano-socialista, tanto en el conjunto de España como especialmente en las ciudades, consideradas como portadoras de un voto más auténtico. La interpretación del resultado como un referéndum en favor de la República originó la caída de la monarquía borbónica, que había sido restaurada con el golpe de Martínez Campos en 1874 y había acabado muy desprestigiada por su complicidad con el golpe y la dictadura de Primo de Rivera. Frente a la monarquía sustentada por las armas o el fraude masivo, se abrió paso así con el voto de una mayoría de los ciudadanos varones la Segunda República, concebida como sinónimo de democracia, un Gobierno del pueblo que atendiera a las demandas populares.

Uno de los primeros pasos del Gobierno provisional de la República fue anunciar la convocatoria a elecciones generales para elegir unas Cortes, con carácter constituyente, en junio de 1931. Con ello se evidenció la voluntad del Gobierno por construir sin tardanza un sistema democrático y dotar de la mayor legitimidad en las urnas al naciente régimen. La votación se llevó a cabo conforme a la ley electoral de 1907, modificada en sentido democratizador, sobre todo al sustituir los distritos uninominales (más manipulables) por las provincias y las mayores ciudades, además de reducir la edad del voto a los 23 años y permitir presentarse a las mujeres (su derecho al voto quedó para las constituyentes) y a los sacerdotes. Durante los años siguientes, se mantuvo sin apenas cambios este sistema electoral “de representatividad mayoritaria corregida”: un método de listas abiertas que favorecía claramente a los partidos o coaliciones que resultaran más votados, lo que pretendía dar mayor estabilidad a los Gobiernos. Con ello, estimulaba la formación de coaliciones, obligando a consensuar y llegar a acuerdos a fuerzas diversas, al tiempo que penalizaba acudir en solitario o en coaliciones con poco respaldo.

Existe un amplio consenso en que estas elecciones fueron las más limpias celebradas hasta entonces, en fuerte contraste con el periodo restauracionista. En este último, las claves decisivas habían sido la sistemática intervención gubernamental en favor de los candidatos oficiales, la coacción y el fraude, así como el enorme influjo del clientelismo y la desmovilización política de

buena parte de la población. Ahora, por el contrario, nos encontramos con Gobiernos más garantistas y una población crecientemente politizada y movilizada, dando así lugar a una competición electoral más auténtica. Ello explica que se produjera una fuerte reducción del fraude y del peso de la coacción, si bien la influencia del poder (político, económico o social), los hábitos clientelares o la comisión de irregularidades no desaparecieron de un plumazo, sobre todo en las zonas rurales.

Otro aspecto que es importante atender y matizar atañe a la caracterización de las fuerzas políticas de la época. Ha sido muy frecuente en libros y manuales incidir casi exclusivamente en la presencia de “derechas” e “izquierdas”, con una visión dualista que en ocasiones parece conducir, de manera inevitable, por el sendero de la polarización y la radicalización, hacia el enfrentamiento bélico. Una visión que se sazona además con la gran atención dada a fuerzas que más adelante tendrían un peso importante, pero que fueron muy minoritarias hasta 1936, caso del PCE o de la FE de las JONS. Comunistas contra fascistas, violencias y tensiones de todo tipo, guerra civil. Sin embargo, el rico arco político del momento estaba dominado por fuerzas intermedias entre las citadas y se estructuraba en torno a tres grandes ejes o bloques, en términos de culturas políticas: la derecha autoritaria (las “derechas puras”), la izquierda obrera y, desde luego, los sectores situados en torno al centro político: los republicanos.

Aquí se inserta otra confusión frecuente, al confundir el republicanismo como identidad y cultura de largo arraigo con el bando republicano durante la guerra, asociado a su vez con las imágenes de milicianos obreros. Con ello, se ha tendido a identificar sin más a los partidos republicanos con la izquierda, algo favorecido por la herencia del periodo restauracionista, cuando aquellos quedaban a la izquierda de un sistema elitista muy conservador. De esta tendencia solo se han librado las formaciones que venían desarrollando un giro conservador más acusado (Partido Republicano Radical, PRR) o autodenominadas de derecha republicana, un conjunto de partidos que injustificadamente son considerados a veces los representantes exclusivos del “centro”. En realidad, los partidos republicanos, exceptuando núcleos minoritarios situados francamente a la izquierda o algunos recién llegados

muy conservadores, ocupaban un continuo de posiciones entre el centroderecha y el centroizquierda, sin que faltaran algunos que podrían situarse a secas en el centro. Todos ellos compartían unos planteamientos comunes liberal-democráticos, de Gobierno parlamentario, derechos civiles, orden y seguridad pública, secularización, promoción de la educación y defensa de la propiedad privada, compatible con ciertos elementos de reforma social. Estos sectores liberales constituyeron de hecho el pivote parlamentario más importante: fueron numéricamente el sector decisivo en todas las Cortes y los Gobiernos (globalmente, entre el 85 y 90% de los puestos en los Gobiernos de abril de 1931 a julio de 1936), como fueron republicanos los dos presidentes (Niceto Alcalá-Zamora y Manuel Azaña) y los nueve jefes de Gobierno. Sin duda, las discrepancias en la política de alianzas y la falta de capacidad y tiempo para construir partidos sólidos dificultaron el asentamiento de una gran fuerza republicana e hicieron que tendieran a buscar acuerdos a su derecha o a su izquierda. Pero resulta absurdo pretender que se trató de una república sin republicanos o minimizar el protagonismo de estos extensos sectores moderados y liberales.

Volviendo a la cuestión electoral, los resultados expresarían en adelante la voluntad libremente expresada por los votantes. En junio de 1931 estos fueron rotundos, dando una amplísima mayoría al conjunto de fuerzas que sostenían al Gobierno provisional: en torno al 90% de los votos, con una alta participación superior al 70%. Al analizar esta extraordinaria mayoría, debe recordarse que el Gobierno integraba a las principales fuerzas políticas, desde la derecha liberal del presidente Alcalá-Zamora a la izquierda obrera del PSOE (una pluralidad tal que en muchas provincias no fue posible mantenerlas coaligadas y compitieron entre sí), a lo que se sumó que la caída de la monarquía y la fulminante desaparición de los partidos dinásticos dejó a la derecha no republicana mal organizada. En todo caso, el resultado ratificaba la apuesta de la ciudadanía por la República y por el cambio. Las Cortes experimentaron una profunda renovación, quedando los 470 diputados políticamente muy repartidos, con un predominio de posiciones centristas e izquierdistas, por lo que conviene no exagerar el carácter izquierdista de las Cortes y los Gobiernos del primer bienio. Los grupos más nutridos eran el

socialista (PSOE, 115 diputados), el PRR (94), el centroizquierdista PRRS (59) y una miríada de fuerzas republicanas que se extendían en torno al centro, o, si se prefiere, desde la derecha moderada a la izquierda templada; quedaba como principal fuerza extra o antisistema la derecha no republicana (“agrarios”, monárquicos, carlistas, PNV y Lliga), que sumaba poco más de 40 escaños.

Estas Cortes aprobaron la nueva Constitución democrática, con 368 votos a favor (además, 17 ausentes explicitaron su apoyo) y ninguno en contra, si bien sin la presencia de las derechas no republicanas, que decidieron ausentarse. Conviene recordar que estas sumaban 40 escaños, por lo que es un error atribuirles todas las ausencias, muchas debidas al frecuente absentismo y las malas comunicaciones. Por tanto, la Constitución tuvo el respaldo del 82% de los diputados y la oposición de menos del 10%.

Habitualmente, el periodo reformista que transcurre desde abril o junio de 1931 a noviembre de 1933 ha sido denominado bienio reformista o social-azañista, denominación que alude a la jefatura de Gobierno de Azaña (octubre de 1931-septiembre de 1933) y a que integraba tres ministros socialistas. Con ello, se subraya la presencia de actores denostados por las derechas, velando la significación esencialmente republicana, esto es, liberal y moderada, de la mayoría de ministros; algo que resulta también ocultado por el carácter “izquierdista”, sin matices, que casi siempre se atribuye al Gobierno. Convendría afinar más tales caracterizaciones para ajustarse mejor a la realidad. El Gobierno estuvo inicialmente presidido por el conservador Alcalá-Zamora, hasta octubre de 1931 incluyó representación de la derecha liberal y durante el resto del bienio fue netamente mayoritaria la presencia del republicanismo de centro y de centroizquierda. En suma, parece más razonable hablar de Gobiernos “republicano-socialistas” y de “centroizquierda”, al ser este último el espacio central de los gabinetes.

Las elecciones de noviembre de 1933 presenciaron como principal novedad el sufragio femenino (del que se ha ocupado Sofía Rodríguez Serrador). El voto de las mujeres, al que se unió el carácter muy competido de esta cita con las urnas, dio forma a las primeras elecciones propiamente democráticas de la historia española, con una amplia participación (67%).

Las listas electorales denotaron el carácter inclusivo y plural del sistema, al presentarse —y resultar elegidos— candidatos desde la extrema derecha (incluido José Antonio Primo de Rivera) al PCE (Cayetano Bolívar). Como los demás comicios de la República, fueron esencialmente limpios, aunque existió una cierta intervención gubernamental (socialistas y derechistas denunciaron numerosas maniobras en favor de los radicales), hubo muchos episodios violentos y en amplias zonas rurales se activaron las tradicionales redes clientelares, a lo que no fue ajeno el desembarco de antiguos notables dinásticos en el centroderecha y la CEDA. Pero el peso del clientelismo, el fraude o la coacción ya no resultaban decisivos y los resultados expresaron la decisión libre de la ciudadanía, pasada por el tamiz de un sistema electoral favorable a las fuerzas mayoritarias. Esto lo entendieron bien las derechas no republicanas, que se presentaron coaligadas como “unión de derechas”, pero no las fuerzas republicanas, a veces unidas y otras separadas, ni el PSOE, que acudió en solitario en el 60% de las circunscripciones.

Como es conocido, la derecha autoritaria obtuvo un éxito notable al saltar de unas decenas a más de un centenar de escaños, lo que ha llevado a que de forma poco matizada se enfatice que la CEDA o “las derechas” ganaron las elecciones. El sistema electoral con listas abiertas, las amplias coaliciones y la variabilidad de estas dificultan calcular los votos obtenidos por diferentes tendencias o partidos, pero la derecha no republicana fue el bloque más votado, tal vez con más de un 40% de respaldos, los partidos republicanos sumaron en torno a un 35% y menos de un 25% fue para la izquierda obrera (básicamente, el PSOE). La traducción en escaños (sobre un total de 473) fue: CEDA (109), PRR (100) y PSOE (59), con una presencia señalada de la extrema derecha y, paralelamente, un hundimiento del centroizquierda republicano. Si agrupamos por bloques, la “unión de derechas” sumó 195 (contando una treintena que formó el republicano Partido Agrario), el republicanismo 173 y la izquierda obrera 64. Por tanto, la CEDA apenas tenía el 23% de los escaños y la suma de las derechas coaligadas en torno a ella quedaba lejos de alcanzar la mayoría absoluta: difícilmente puede considerarse sin más que había vencido los comicios. Viendo los partidos y bloques cabría decir más bien que se había producido una victoria de la

derecha y del republicanismo moderado, en especial de la CEDA y del Partido Radical, pero que ambas fuerzas, por separado, no sumaban para gobernar.

Esto permite explicar mejor la lógica de los Gobiernos del segundo bienio, basados en el entendimiento parlamentario entre los dos partidos más votados. Que la formación del Gobierno se encargara al líder radical, Alejandro Lerroux, se explica sobre todo por la enorme desconfianza que generaba la CEDA a las fuerzas republicanas, en razón de su falta de fidelidad al régimen y su ideología antiliberal, antidemocrática y autoritaria, por lo que el presidente Alcalá-Zamora percibía al partido de Gil-Robles como una amenaza para la democracia, en un contexto en el que los cedistas proclamaban su admiración por las dictaduras europeas. Además, el PRR, en una posición central en las Cortes, aparentaba mayor capacidad de llegar a pactos y representar al electorado intermedio, al sector social moderado que algunos consideraban la base del sistema. Gil-Robles era consciente de ello y carecía inicialmente de cualquier posible mayoría parlamentaria, de ahí que no pretendiera entonces encabezar el Gobierno, pero sí conquistarlo a medio plazo para revisar la Constitución y girar hacia un “Estado nuevo” declaradamente influido por las dictaduras portuguesa y austríaca.

Para caracterizar aquel inestable periodo se ha hablado de bienio radical-cedista, rectificador o negro. Esta última denominación, acuñada por la oposición de la época, posee una evidente carga condenatoria y remite a una imagen construida que responde mejor al periodo posterior a octubre de 1934 que al anterior. Hablar de “rectificador” supone, por el contrario, asumir el discurso de aquellos gobernantes y omite que, si bien hubo algunas “rectificaciones” en sentido conservador, es innegable que la contrarreforma agraria de 1935 fue una simple y llana destrucción. Por su parte, el sintagma “bienio radical-cedista” recoge las dos grandes fuerzas que determinaron la política gubernamental, pero a veces genera el equívoco de pensar que la CEDA estuvo en el gabinete todo el periodo, pese a que entró en octubre de 1934 y solo permaneció en él 13 de aquellos 27 meses, y vela el carácter efímero y cambiante de los pactos PRR-CEDA, constantemente interrumpidos por desacuerdos y crisis.

Las elecciones de febrero de 1936 son con frecuencia objeto de errores y mitos, en buena medida como resultado de la larga persistencia de la propaganda franquista, que buscó desacreditar la victoria del Frente Popular (FP) dentro de su estrategia para legitimar la sublevación golpista. Esta propaganda ha resultado revitalizada tanto por escritores neofranquistas como por la prensa conservadora, sin olvidar algún producto académico que ha alimentado la confusión al poner su énfasis en los elementos de fraude y violencia. En todo caso, los estudios existentes muestran que las irregularidades y el fraude no alteraron significativamente la legítima victoria del FP y que las cifras de violencia resultaron similares a las elecciones de 1933, valoradas como limpias y libres. Desde luego, produjeron algunos fraudes, en especial en Galicia, Canarias, Granada, Cuenca y Cáceres, favoreciendo a veces al FP y otras al centroderecha o la derecha. Esto es importante: aunque el final del recuento lo supervisaron autoridades afines al FP —y en La Coruña o Cáceres se aprovecharon de ello—, no debe olvidarse que las elecciones las había convocado un Gobierno de centroderecha que usó sin recato su posición para favorecer sus candidaturas, y que los poderes provinciales y locales estuvieron bajo control de la derecha y el centroderecha hasta pasadas las elecciones. En ese sentido, el resultado, con la derrota del Gobierno y de los partidos que controlaban los resortes del poder, mostró precisamente el avance de la democracia y la imposibilidad de “fabricar” Parlamentos como se hacía con la monarquía.

Con una elevada participación (al menos un 71%), el Frente Popular obtuvo el 47% de los votos (49% según Martín Ramos), ganando en 34 circunscripciones, a las que se sumaron dos más tras la repetición electoral de mayo en Cuenca y Granada. Resulta más complejo determinar el voto de las coaliciones de derechas, menos homogéneas: se ha calculado un 45-46% para las listas nucleadas por la CEDA (18% para candidaturas estrictamente de derechas y 28% para aquellas con republicanos de centroderecha), que vencieron en 20 provincias. Por su parte, las candidaturas de centroderecha en solitario sumaron otro 5%, aunque su apoyo sería algo mayor, pues en muchas provincias queda subsumido en coaliciones de derecha (y en Lugo en el FP). Por último, es importante tener en cuenta que el FP ganó en las

grandes ciudades y en muchas provincias populosas (en total, venció en distritos que representaban más del 70% del censo y de los escaños), mientras las derechas lo hicieron con mayor frecuencia en las menos pobladas. Este hecho, reforzado por el sistema electoral, aseguró al FP 267 diputados, que subieron a 286 tras las impugnaciones y repeticiones, lo que suponía una firme mayoría absoluta (60%), con especial peso para los republicanos de centro o centroizquierda (162; 86 de Izquierda Republicana, 37 de Unión Republicana, etc.) y los socialistas (102; 98 del PSOE). Por su parte, las derechas alcanzaron 129 diputados (88 la CEDA) y el centroderecha, 36. Es decir, incluso aunque se considere que unos pocos escaños más debieran haber correspondido a las derechas, el panorama apenas se habría visto alterado. Una victoria clara para la amplia coalición del Frente Popular, que se benefició de una masiva movilización obrera, pero también de un claro apoyo de los sectores republicanos moderados, que en 1931 habían votado a la conjunción, en 1933 al PRR y ahora optaron mayoritariamente por el FP.

Esto nos lleva al estereotipo dominante sobre el Frente Popular, que tiende —más allá de la valoración que se le otorgue— a identificarlo sobre todo con la izquierda obrera, cuando no a confundirlo con posiciones revolucionarias. Como si se tratara del resultado de una consigna de la Komintern, cuando fue más bien una reedición de la coalición gobernante del primer bienio. Es decir, se olvida que nació de un acuerdo entre los republicanos de centro y centroizquierda, de un lado, y el PSOE, del otro, con un programa electoral muy mesurado (redactado en su mayor parte por el republicano moderado Felipe Sánchez Román) y que sostuvo un Gobierno formado en exclusiva por republicanos “burgueses” y “de orden”, como entonces se decía. Una asociación de las fuerzas republicanas y obreristas, unida por el deseo de retomar las políticas reformistas del primer bienio y evitar la subida al poder de la derecha autoritaria, en un contexto europeo marcado por el auge de dictaduras reaccionarias o fascistas.

Concluyendo, los procesos políticos y electorales de la Segunda República española se enmarcaron plenamente en el marco de aprendizaje de la democracia en que se desarrolló el nacimiento de los sistemas

democráticos. Una realidad marcada por fuertes desigualdades sociales, conflictos culturales y tensiones políticas, como en toda la Europa de la época. Ninguna democracia nace —ni vive— siendo modélica, como tampoco lo hizo la de 1978, del mismo modo que los sistemas políticos nuevos y las sociedades en proceso de cambio no se desprenden súbitamente de los hábitos del pasado. En todo caso, los derechos establecidos en la Constitución de 1931, la movilización social y el carácter plenamente representativo de los resultados electorales de 1931, 1933 y 1936 permiten hablar de la Segunda República como primera democracia en la historia española, en un marco europeo donde avanzaban las dictaduras y muchas “democracias” excluían del voto a las mujeres. Por ello, es fundamental rechazar una visión descontextualizada o manipulada de la Segunda República, que denigre o idealice aquella naciente democracia, truncada por el intento golpista de julio de 1936, sea por ignorancia o en función de los intereses partidistas del presente.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y VILLA GARCÍA, Roberto (2017): *1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular*, Barcelona, Espasa.
- GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo *et al.* (2015): *La Segunda República española*, Barcelona, Pasado y Presente.
- LÓPEZ VILLAYERDE, Ángel Luis (2017): *La Segunda República (1931-1936). Las claves para la primera democracia española del siglo XX*, Madrid, Sílex.
- (2017): “Lo que la ‘verdad’ esconde. A propósito de fraudes y violencias en 1936”, *Ctxt. Contexto y Acción*, https://lc.cx/ufDs_2.
- MARTÍN RAMOS, José Luis (2017): “Mucho ruido y pocas nueces. La falsedad del fraude del Frente Popular”, *Nuestra Historia*, nº 3, pp. 142-162, <https://lc.cx/yBmkC7>.
- ROMERO SALVADOR, Carmelo (2023): *Las elecciones que acabaron con la monarquía. El 12 de abril de 1931*, Madrid, Los Libros de la Catarata.
- VILLA GARCÍA, Roberto (2011): *La República en las urnas. El despertar de la democracia en España*, Madrid, Marcial Pons.

CAPÍTULO 12

VIOLENCIA Y TÓPICOS DE LA PRIMAVERA DE 1936

EDUARDO GONZÁLEZ CALLEJA

Ninguna etapa de la República se ha visto más afectada por la proyección retrospectiva de la sombra de la guerra que el primer semestre de 1936, al que durante décadas la historiografía oficial franquista despojó de autonomía como objeto de análisis histórico y que aún hoy se sigue manipulando como encarnación de todos los males acarreados por la democracia republicana. Las violencias de la primavera de 1936 fueron presentadas por la historiografía franquista como el factor determinante, precipitante o justificativo de la guerra civil. Pero la violencia no nació en la etapa del Frente Popular (FP), ni este fue el responsable único o último de los graves conflictos sociopolíticos que trataron de resolverse mediante un golpe de Estado y tras el fracaso parcial de este, por medio de una contienda bélica de gran intensidad. La violencia se manifestó desde muy diversas líneas de fractura y actuó como un enérgico corrosivo de todo tipo de consensos entre grupos sociales, comunidades, formaciones políticas y sindicales, corporaciones o instituciones estatales y paraestatales.

Este texto repasará los principales tópicos referidos a la conflictividad violenta durante el FP, que constituyeron y siguen constituyendo el grueso de la argumentación legitimadora del alzamiento armado de julio de 1936: que

las elecciones de febrero transcurrieron bajo un clima de coacción que alteró sustancialmente los resultados, que durante esa primavera se puso en marcha una revolución social en amplias zonas del país, que los Gobiernos fueron responsables e incluso cómplices del deterioro del orden público sufrido en esos meses, que la izquierda estaba acelerando sus propios preparativos insurreccionales y que el Ejército y sus aliados civiles se decidieron a última hora por el golpe de Estado como recurso de necesidad ante la insostenible situación que habían generado los factores antes enumerados.

LA DESLEGITIMACIÓN TEMPRANA: LA VIOLENCIA EN LAS URNAS

Las elecciones del FP sirvieron de piedra de toque para que la Comisión sobre Ilegitimidad de Poderes Actuales el 18 de julio de 1936 tratara de demostrar en 1939 la ilegitimidad de origen de esta última etapa de la República en paz aduciendo el empleo de la “acción directa” como instrumento intimidatorio para forzar el retraimiento electoral de las derechas, la falsificación de actas, el asalto a los “órganos públicos” antes del escrutinio general y la renuncia del presidente del Gobierno Manuel Portela Valladares antes de la segunda vuelta electoral. Son los mismos argumentos que se esgrimen en un estudio reciente de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García sobre los comicios del 16 de febrero de 1936. No importa que el mayor número de víctimas mortales procedentes de la izquierda (que fueron causadas en gran medida por las fuerzas de orden público) cuestione el supuesto ambiente de coacción sobre las derechas reinante en la campaña y el proceso electoral (la “presión de las masas” de la que habló cierta prensa), que no se aporten datos que corroboren el supuesto fraude en las actas, que diarios como *ABC* ya presentaran en la tarde del 19 de febrero datos que otorgaban la mayoría absoluta al FP o que se demuestre que la renuncia del presidente del Consejo vino dictada por la amenaza de una sublevación militar. Lo que se perseguía era arrojar la sombra de la duda con mentiras o falsas verdades que justificaran adherir a los comicios de 1936 los términos infamantes de “fraude” y “violencia”. La extrema derecha mediática se

encargó muy pronto de jalearse ese “hito” historiográfico que venía a confirmar y alimentar sus propios prejuicios en la guerra cultural que declaró a la memoria de la República como ejemplo de democracia participativa.

EL MITO DE LA REVOLUCIÓN INMINENTE

El nuevo Gobierno presidido por Manuel Azaña hubo de soportar de nuevo las tensiones entre el reformismo planteado en el programa electoral del FP y la impaciencia de sus bases. La cuestión más urgente fue restañar las heridas causadas por la represión de los sucesos de 1934, acordando la amnistía por decreto ley de 21 de febrero, el restablecimiento de la Generalitat el 26 de febrero, la reposición de los ayuntamientos destituidos durante el “bienio negro” y la readmisión por decreto de 29 de febrero de los represaliados por las huelgas políticas planteadas desde el 1 de enero de 1934, lo que produjo una airada reacción de la patronal. Si bien es cierto que en algunos sectores proletarios se manifestaron claras actitudes de superación de la legalidad que el Gobierno hubo de tolerar y caucionar (la liberación espontánea de los presos, la ocupación masiva de tierras en Extremadura, la ejecución de obras impuestas a los patronos, la fijación desde las casas del pueblo de la duración de la jornada laboral, la imposición del número de jornaleros que debía acudir a cada explotación independientemente de las necesidades expresadas por el propietario o arrendatario, la readmisión forzosa de los despedidos en octubre, la relegación de los trabajadores no sindicados, el impago de alquileres, etc.), el conjunto de las organizaciones obreras decidió otorgar un crédito de confianza al Ejecutivo mientras que este pudiese encarar con energía la “amenaza fascista” y transigiese con un mínimo de reformas.

En la primavera de 1936 hubo una amplia oleada conflictiva en el sector industrial y de servicios, pero los paros afectaron a las ciudades de manera desigual. El número de huelgas incontroladas disminuyó drásticamente y la actuación mediadora de los jurados mixtos permitió la desconvocatoria de paros; en todo caso, coadyuvó a una disminución de la violencia en las luchas sociales. Con todo, se produjo una acusada politización de la oleada de huelgas, convocadas unas en solidaridad con otros oficios y otras en protesta

por las violencias perpetradas por la extrema derecha, que no perdió la ocasión de denunciar en el Parlamento y en la prensa la incapacidad o la presunta complicidad del Gobierno ante este frenesí reivindicativo.

La Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT) convocó movilizaciones para el 15 de marzo con el objeto de urgir al Gobierno el cumplimiento de la reforma agraria. Aunque las gestiones realizadas desde el Comité Nacional de la UGT facilitaron la desconvocatoria de esta movilización, la FETT aprovechó la promesa gubernamental realizada el 12 de marzo de patrocinar miles de asentamientos rápidos para impulsar un movimiento generalizado de ocupación de tierras. El incremento de la conflictividad campesina, sobre todo en el sur peninsular, resulta un hecho incontrovertible: entre el 1 de mayo y el 18 de julio de 1936 se produjeron 192 huelgas agrarias, tantas como durante 1932 y casi la mitad de las ocurridas en todo el agitado año 1933.

Además de este fuerte incremento de las expectativas de los sectores populares, otra de las causas esenciales del deterioro del orden público durante la primavera de 1936 fue la incapacidad del Estado para imponerse o al menos coordinar a los poderes locales que resurgían de forma espontánea al ritmo del avance obrero. Tras la victoria electoral, se disolvieron las comisiones gestoras establecidas en ayuntamientos y diputaciones en 1933-1934, y se repusieron a los alcaldes y concejales de elección popular depuestos en el bienio anterior. Los nuevos consistorios, formados por representantes de las formaciones del FP, hubieron de soportar la presión de las muchedumbres que exigieron medidas de castigo contra las redes de coacción impuesta por los propietarios en los años anteriores. Se respiró una intensa atmósfera de revancha y de “justicia popular”, sobre todo en los pueblos del sur de España, donde los ayuntamientos intervinieron en los asuntos gubernativos, judiciales y laborales, controlando el orden público a través de patrullas armadas, efectuando detenciones espontáneas, imponiendo multas y penas de encarcelamiento a los patronos que no aceptaban los repartos y los salarios impuestos por las casas del pueblo, intimidando a los trabajadores que no pertenecían a la FETT, estableciendo controles en las carreteras, cobrando peajes a los automóviles, destituyendo a

jueces de paz hostiles o conformando jurados mixtos de circunstancias, que se vieron frecuentemente desbordados por las reclamaciones salariales de los jornaleros.

¿Fue un simple problema de orden público o una auténtica situación revolucionaria? José Manuel Macarro asegura que la situación del campo andaluz era claramente revolucionaria, por cuanto las relaciones entre clases se estaban invirtiendo y el poder del Estado se desmoronaba en beneficio de los nuevos poderes locales de tipo popular. Sin embargo, la sociología de las revoluciones diferencia claramente la “situación revolucionaria”, que implica la aparición de una situación de soberanía múltiple cuando dos o más bloques sostienen pretensiones efectivas e incompatibles sobre el control del Estado, y la “salida revolucionaria”, que conlleva una transferencia duradera del poder del Estado. En ese sentido, se puede afirmar que la situación política en el ámbito agrario en la primavera de 1936 no era ni siquiera revolucionaria, ya que estos poderes emergentes de carácter local no elaboraron un proyecto político ni una estructura de poder capaz de tomar decisiones y asumir el control a escala nacional, o ni siquiera provincial o regional. Como advertía Indalecio Prieto en sus discursos en Cuenca y Ejea de los Caballeros los días 1 y 19 de mayo, existía más anarquía que un acercamiento real a la toma del poder por las diversas facciones del movimiento obrero. Las huelgas, los paros y la negociación colectiva acabaron por contemplarse por unos como intolerables y por otros como el adelanto de una revolución de mayor calado. Pero el temor de los propietarios ante estas medidas jugó un papel nada desdeñable en la deslegitimación del régimen y en la creación del ambiente de rebeldía previo al golpe militar de julio.

EL DETERIORO DEL ORDEN PÚBLICO Y LOS ERRORES DE LA GESTIÓN GUBERNATIVA

Las memorias de dirigentes republicanos coinciden en achacar buena parte de la responsabilidad en el hundimiento del régimen a su incapacidad para preservar el orden público. Sin embargo, los sucesivos Gobiernos tuvieron en

su mano importantes herramientas restrictivas de los derechos ciudadanos, como la prórroga del estado de alarma proclamado por Portela el 17 de febrero, hasta el punto de que la totalidad de los 151 días que mediaron entre la toma del poder por Azaña el 19 de febrero y la dimisión de Casares Quiroga el 18 de julio transcurrieron con los principales derechos cívicos y políticos en suspenso en la totalidad del territorio nacional. Los portavoces de las derechas aprovecharon precisamente los debates sobre prórroga de los estados de alarma para denunciar el 16 de abril, el 16 de junio y el 15 de julio el deterioro de la autoridad gubernativa, aireando una serie de estadísticas violentas de dudoso rigor y veracidad que se han seguido repitiendo casi como dogma de fe hasta la actualidad. Mis estadísticas desmienten el mito de la persecución derechista: de las 384 víctimas mortales, la violencia letal fue practicada de forma equiparable por las derechas (que causaron 125 muertes) y las izquierdas, a las que he achacado la autoría de 120 víctimas. Los sucesos luctuosos con implicación de agentes del orden produjeron 106 muertos (27,6% del total), lo que resulta congruente con el predominio de estos como principales ejecutores de la violencia coactiva a lo largo del periodo republicano.

En un trabajo reciente, Fernando del Rey Reguillo y Manuel Álvarez Tardío pretenden explicar la violencia por la combinación de una elevada conflictividad político-laboral y una ineficaz gestión del orden público, donde los Gobiernos del FP no impusieron un discurso oficial que desautorizara todo tipo de violencia, sino un discurso de beligerancia antifascista. En su prolijo relato acumulativo de incidentes violentos, con más pretensión incriminatoria que explicativa, la violencia procedente de los grupos de derecha es matizada o disculpada sistemáticamente por una previa actitud provocativa o una ulterior conducta vindicativa de la izquierda. Constreñidos involuntariamente en su análisis por un marco interpretativo de cuño funcionalista, los autores ensalzan el principio de “seguridad jurídica” (naturalización normativa del *statu quo*), demonizan cualquier movilización de la protesta como desafío violento a la autoridad y disculpan la represión protagonizada por las fuerzas del orden, cuya voluntad y capacidad para imponer la legalidad se habrían visto comprometidas por las órdenes erráticas emanadas de las autoridades

gubernativas. Este análisis sesgado se reproduce en el estudio cuantitativo de víctimas (487 episodios violentos, con 406 muertos y 1.081 heridos) sobre el que reposa buena parte de la argumentación del libro. Si se pretende ofrecer un estudio exhaustivo de la violencia del FP, se echa de menos la exposición pública de la cronología en la que se ha fundamentado la base de datos, como hizo Gerhard Botz para la violencia en la Primera República austríaca, Chris Millington para la Francia de entreguerras, Dirk Schumann para la República de Weimar, Fabio Fabbri para la Italia anterior a la conquista del poder por los fascistas o yo mismo para el conjunto de la Segunda República española. Desde un punto de vista técnico, la incorporación de una variable tan fluctuante como los heridos puede distorsionar el análisis estadístico y lo mismo sucede con la determinación del grado de responsabilidad en los enfrentamientos que tuvieron lugar entre la población y la policía. Al igual que no todos los agentes actuaron al margen de las normas y las órdenes dictadas por sus mandos, tampoco todos los manifestantes eran radicales siempre dispuestos a tomar la iniciativa en un choque contra fuerzas muy superiores en capacidad coactiva. Un ejemplo de esta visión selectiva sobre la violencia que se considera más o menos digna de ser estudiada lo aporta el hecho de que solo 13 de las 593 páginas del texto están dedicadas a la conspiración que culminó en el golpe de julio, mientras que al asesinato de José Calvo Sotelo se le dedican 22.

Vistas las circunstancias, el Gobierno no quiso o no pudo aplicar una política represiva que hubiese incrementado el malestar de las masas obreras y justificado una involución en sentido conservador. Pensó que una gestión del orden público basada en una coacción moderada y selectiva de los grupos extremistas y en la concesión rápida de reivindicaciones sociales a las organizaciones obreras podía estabilizar la República con apoyo del ala moderada del PSOE. La retórica derechista sobre la anarquía, incapacidad, cautividad o complicidad gubernamentales, aireada desde la prensa y la tribuna parlamentaria, activó el proceso de deslegitimación de la autoridad estatal. A través de la difusión del miedo sobre los diversos colectivos afectados por la crisis política, los grupos de derecha situaron el tema de la violencia en el primer plano del debate público, dificultaron las iniciativas de

conciliación y estimularon la búsqueda de soluciones de fuerza que pudiesen eliminar el presunto peligro revolucionario.

En definitiva, durante la primavera de 1936 los Gobiernos patrocinaron un despliegue desproporcionado de fuerza, antes que de autoridad. Su deterioro no solo tuvo que ver con los errores de apreciación y de gestión de las autoridades gubernativas, sino también con la escasa fiabilidad de la organización policial, como se puso de manifiesto en su sospechosa incompetencia a la hora de desarticular las diversas tramas conspirativas o, al menos, para prevenir disturbios y mantener el orden público.

EL PRESUNTO REARME PARAMILITAR DE LA IZQUIERDA

Uno de los argumentos justificativos del golpe de Estado de julio fue la recuperación del activismo de la izquierda obrera, que habría reanudado el despliegue de sus milicias, como parecía deducirse del hecho de que sus juventudes hubieran desfilado con aire marcial por las calles de Madrid en la jornada del Primero de Mayo. En realidad, la estructura y la preparación de este presunto resorte paramilitar eran muy deficientes entonces y lo continuaría siendo dos meses y medio más tarde.

La actitud política de las diversas formaciones de izquierda en ese momento podía calificarse de todo menos de subversiva. En el IV Congreso de la CNT celebrado en Zaragoza del 1 al 15 de mayo se hizo una severa autocrítica de los anteriores intentos insurreccionales y se decidió afrontar la amenaza golpista intensificando la propaganda antipolítica y antifascista, creando comités antimilitaristas y amenazando con una huelga general revolucionaria si el Gobierno declaraba alguna movilización bélica. En cuanto al PCE, el triunfo del FP lo alejó aún más de sus anteriores planteamientos insurreccionales y lo indujo a apoyar un programa de reivindicaciones parciales sobre la base de las alianzas obreras. La nueva coyuntura política no hizo cambiar el carácter defensivo y multipartidario de las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC), que presentaron a las autoridades unos estatutos marcadamente defensivos. En el seno del

socialismo, la pérdida de protagonismo del sector caballerista en favor de la colaboración propugnada por Prieto y el estado embrionario de unas milicias destinadas a la defensa contra el fascismo son hechos constatables que desmienten la imagen propiciada por la historiografía franquista —y por algunos autores revisionistas mal informados— de un movimiento obrero dispuesto a emprender inmediatamente una “segunda revolución” con fecha fija para ser ejecutada.

A pesar de las llamadas a la movilización defensiva de las masas trabajadoras y la presunta beligerancia antifascista del Gobierno Casares, durante la primavera de 1936 no se desarrollaron fuertes milicias de izquierda, ni mucho menos un embrión de Ejército Popular auspiciado por el Estado. Prueba de ello fue la caótica movilización armada de las formaciones frentepopulistas a partir del 19 de julio, su deficiente actuación en los primeros meses del conflicto y la tardía conformación del Ejército Popular de la República a mediados de octubre de 1936.

Como contraste a la decreciente voluntad subversiva de las organizaciones de izquierda, las formaciones de derecha alcanzaron durante estos meses su punto culminante de radicalización y optaron por impulsar acciones violentas de carácter provocativo que tuvieron como respuesta acciones similares de carácter antifascista protagonizadas las formaciones integradas en el FP. Mientras que Falange Española y la Comunión Tradicionalista reforzaron desde 1934 sus respectivas estructuras paramilitares (Primera Línea y Requeté) y su predisposición insurreccional (el falangismo en la reunión de su junta política celebrada en Gredos en junio de 1935 y el carlismo con sus primeros contactos con Sanjurjo y la junta de generales en marzo de 1936), la Juventud de Acción Popular afín a la CEDA se diluyó entre la extrema derecha monárquica y el fascismo al constatar a fines de 1935 cómo fracasaba la táctica legalista de toma del poder impulsada por José María Gil-Robles.

EL MITO DEL GOLPE DE ESTADO COMUNISTA Y EL TÓPICO DEL GOLPE DE ESTADO PREVENTIVO

El último de los grandes tópicos sobre la violencia política del Frente Popular es el del golpe de Estado preventivo ante una situación de necesidad justificada *in extremis* por la existencia de un presunto plan golpista de carácter comunista o como respuesta a la oleada de indignación despertada por el asesinato de José Calvo Sotelo. En realidad, como demostró hace décadas Herbert R. Southworth, el tan cacareado “golpe comunista para el 1 de agosto”, presuntamente orquestado por un sóviet nacional presidido por Largo Caballero que habría hecho irremediable la intervención “salvadora” de una parte del ejército, fue un epígono tardío de la amplia maniobra intoxicadora de la extrema derecha, enfrascada en la fabricación de una fantasmagórica amenaza revolucionaria que propiciara el clima moral para el levantamiento armado y, una vez desencadenado este, actuara como baza justificadora de la insurrección preventiva.

Esta argumentación queda seriamente en entredicho ante la evidencia de que un sector del Ejército barajaba la posibilidad de subvertir el régimen democrático desde mucho antes de la llegada al poder del FP. Las sucesivas crisis políticas que precipitaron el final del segundo bienio tuvieron un significativo sesgo golpista: el 18 de octubre de 1934, coincidiendo con la polémica del indulto presidencial al comandante Enrique Pérez Farrás, el vicepresidente de Acción Popular Cándido Casanueva sondeó a los generales Manuel Goded y Joaquín Fanjul sobre la posibilidad de un golpe a iniciar por las fuerzas acantonadas en Asturias, pero estos generales no lograron el apoyo de sus compañeros para la empresa y, tras hablar con Gil-Robles, este les convenció de que el movimiento resultaba innecesario por la política contrarreformista que se iba a impulsar en el Ejército. El 11 de diciembre de 1935, en plena tormenta suscitada por el inminente relevo de Gil-Robles, el presidente Alcalá-Zamora y el ministro de Gobernación Joaquín de Pablo Blanco decidieron movilizar fuerzas de policía para prevenir una reacción golpista del entorno del ministro de la Guerra. Una tercera intentona trató de impedir la transmisión del poder al FP el 16 y 17 de febrero de 1936. El 9 de marzo (coincidiendo con el desencadenamiento de la oleada de violencia del 9 al 15 de marzo y antes de la aparición en la prensa del bulo del golpe de Estado comunista a inicios de abril), una junta de generales constituida desde

fines de 1935 se reunió para discutir un plan golpista que comenzaría en Madrid el 19 y 20 de abril. El fracaso de la conjura por la estrecha vigilancia policial sobre los conspiradores, las medidas punitivas tomadas por el Gobierno tras los tumultos callejeros del 16 de abril y la puesta en guardia de las organizaciones del Frente Popular condujeron a la designación, el 29 de mayo, del general Emilio Mola como “director” del movimiento sedicioso definitivo.

CONCLUSIÓN

La presunta vinculación de causa-efecto entre las violencias de la Segunda República y el estallido de la Guerra Civil es un tópico historiográfico difícil de combatir, que se escuda en una falacia lógica según la cual la relación de proximidad entre dos eventos sucesivos hace que indefectiblemente uno sea la causa del otro.

Un error de apreciación muy común entre los sectores sociales más reaccionarios es confundir la movilización reivindicativa con movilización revolucionaria. El Gobierno del FP no impulsó ni toleró ninguna alternativa revolucionaria al régimen democrático, posibilidad que tampoco estaba en el ánimo de las organizaciones proletarias. Lo que dio dramatismo a la primavera de 1936 no fue la inminencia de una revolución inexistente, sino la creciente visibilidad de la violencia política en las grandes ciudades y su preocupante evolución en espiral desde marzo-abril de 1936. El Gobierno, situado entre sus compromisos electorales y su obligación de garantizar la tranquilidad ciudadana, afrontó el deterioro del orden público con unos recursos gubernativos poco fiables y con un apoyo sociopolítico insuficiente. El impacto psicológico acumulativo de los desórdenes, la proclamada beligerancia del Gobierno Casares contra el fascismo y las manifestaciones de unos líderes políticos que no diferenciaban formas legítimas e ilegítimas de expresión de reivindicaciones contribuyeron a despertar el miedo en las clases poseedoras y la prevención de una izquierda que ya veía en la CEDA, la Falange, la Comunión Tradicionalista y Renovación Española las unidades especializadas de un mismo ejército contrarrevolucionario.

Cabe afirmar que la violencia por sí sola no destruyó la República, ya que otros regímenes y Gobiernos soportaron niveles similares o incluso mayores de agresividad política sin colapsarse. Fue necesaria una redefinición de la naturaleza de la violencia como miedo a la revolución basado en una amenaza inminente a la integridad personal, social y política de determinados grupos de derecha para que estos optaran por una respuesta armada expeditiva y sin cuartel.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y VILLA GARCÍA, Roberto (2017): *1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular*, Barcelona, Espasa.
- GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (2008): “Violencia y tópicos de la primavera de 1936”, en Marie-Claude Chaput (coord.), *Fronts populaires: Espagne, France, Chili*, Nanterre, Université de Paris Ouest Nanterre-La Défense, pp. 115-154.
- (2015): *Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936)*, Granada, Comares.
- (2016): “Los discursos catastrofistas de los líderes de la derecha y la difusión del mito del ‘golpe de Estado comunista’”, *El Argonauta Español*, n° 13, <https://goo.su/Fv1XQ0>.
- GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo y SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco (2018): “Revisando el revisionismo. A propósito de 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular”, *Historia Contemporánea*, n° 58, pp. 851-881.
- MACARRO VERA, José Manuel (2000): *Socialismo, república y revolución en Andalucía (1931-1936)*, Sevilla, Universidad.
- REY REGUILLO, Fernando del y ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel (2024): *Fuego cruzado. La primavera de 1936*, Madrid, Galaxia Gutenberg.
- SOUTHWORTH, Herbert R. (1978): “Conspiración contra la República. Los ‘documentos secretos comunistas’ de 1936 fueron elaborados por Tomás Borrás”, *Historia 16*, n° 26, pp. 41-57.

CAPÍTULO 13

EL ANTIFASCISMO ES UN DISFRAZ DEL COMUNISMO

SERGIO VALERO GÓMEZ

El auge en los últimos años de diferentes concreciones de la derecha populista ha provocado el retorno del vocablo “fascismo” para referirse a toda una amalgama de movimientos sociales y políticos que cuestionan, desde postulados ultraconservadores y reaccionarios, algunos de los principios que han conformado el consenso liberal y democrático posterior a la Segunda Guerra Mundial en Occidente. Más allá de que estos grupos se ajusten o no *sensu stricto* a la definición académica y científica de aquel movimiento político de la Europa de entreguerras, desde diferentes ámbitos de la izquierda se utiliza el concepto, tal y como sucedió también en aquel momento, para llamar la atención sobre la presencia de una amenaza que empuja al continente, como entonces, no solo a la quiebra de la democracia —que ya venía sucediendo desde principios de los veinte—, sino también de la paz y de la convivencia.

Ahora bien, si la “alerta antifascista” —como la denominó Pablo Iglesias Turrión tras los resultados positivos de Vox en las elecciones autonómicas andaluzas de 2018— ha insistido en este peligro, la respuesta ha sido débil y dispersa. Quizás el caso más reciente y llamativo sea el de Francia, donde, de cara a las elecciones legislativas del verano de 2024, socialistas, comunistas,

ecologistas y La France Insoumise dieron lugar a una coalición electoral denominada, no por casualidad, Nouveau Front Populaire (NFP). Su victoria parcial, al colocarse como la principal minoría parlamentaria de la Asamblea Nacional, ha servido para frenar, al menos de momento, las aspiraciones del Rassemblement National de Marine Le Pen.

Aun con todo, el temor a la izquierda radical entre amplios sectores sociales y buena parte de las élites es tan elevado que dicha victoria no ha sido reconocida con la confianza presidencial. Emmanuel Macron ha preferido elegir —con la anuencia de la extrema derecha— a varios primeros ministros ajenos al NFP antes que confiar en dicho grupo la gobernabilidad del país. Y una actitud similar se puede comprobar en Estados Unidos respecto a las propuestas más audaces de los grupos más progresistas, aquellos identificados con el apelativo de *woke*. La ofensiva política y cultural de los defensores de mayores avances en la igualdad social, racial y de género y de más contundentes respuestas al cambio climático, que también incluyan transformaciones en la gobernanza del capitalismo, ha movilizado y desmovilizado a numerosos electores hasta llevar de nuevo a Donald Trump a la Casa Blanca.

En ambos casos, la clave es el comportamiento de los grupos políticos moderados (denominados comúnmente de centro), más imbuidos de un vulgarizado anticomunismo que de un genérico antifascismo, como también sucedió en muchos momentos y lugares de la Europa de entreguerras. Esta resistencia al antifascismo como eje prioritario de acción política solo se puede comprender acudiendo a cómo lo percibe este sector.

Tras la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de las potencias del Eje, el antifascismo se convirtió en un elemento legitimador de las democracias occidentales y de las populares de la Europa del Este. En el primer caso, los regímenes vencedores se construyeron bajo un “paradigma antifascista”, que ponía énfasis principalmente en la liberación nacional, en la resistencia y en la lucha partisana, soslayando los enfrentamientos civiles internos que se produjeron por debajo de la Segunda Guerra Mundial. El relato construía a estos países como víctimas en su conjunto del nazismo y, al mismo tiempo, difuminaba la complejidad de la confrontación fascismo-antifascismo desde

los años veinte, pues se omitía la diversidad de planteamientos anteriores que había llevado a una dificultosa y conflictiva confluencia de las fuerzas contrarias al fascismo. Además, con la ruptura del bloque que ganó la contienda y el comienzo de la Guerra Fría, este antifascismo fue tomando un cariz anticomunista y socialmente más conservador.

Mientras, los regímenes de la Europa del Este, con la URSS a la cabeza, se dibujaron como los principales artífices de la derrota del nazi-fascismo al hacer énfasis en la reconquista de sus territorios sin ayuda foránea. Acabaron, de hecho, monopolizando la idea antifascista a medida que en Occidente se renunciaba a ella en favor de un discurso que aglutinaba fascismo y comunismo bajo el paraguas del totalitarismo. El antifascismo — en su sentido clásico— era insuficiente e incómodo en el escenario de enfrentamiento con la Unión Soviética y se asentó este concepto que identificaba a las democracias occidentales como enemigas de cualquier tiranía y, por tanto, tan antifascistas como anticomunistas.

Esta idea se vio reforzada a partir de los años noventa del siglo XX. Coincidiendo con un nuevo auge del anticomunismo mientras se producía la desintegración del socialismo real y de la URSS, el antifascismo fue quedando unido, por un lado, a los grupos políticos y sociales más a la izquierda —en muchas ocasiones con objetivos antisistema— y, por otro, a la interpretación que encabezó François Furet —aunque no solo— en su obra *El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX*. En ella, el historiador francés lo entendía como un caballo de Troya —vacío de contenido— que el comunismo estalinista había puesto en marcha para lograr una mayor penetración en las democracias occidentales de los años treinta. De este modo, antifascismo y democracia no iban unidos, sino que devenían antitéticos, pues el fin último de ese antifascismo instrumentalizado por el estalinismo no era la consolidación y el desarrollo de la democracia —principalmente en su vertiente social—, sino su socavamiento y sustitución por regímenes situados bajo la égida de Moscú. Se asentaba, con ello, la equidistancia de las democracias occidentales entre el fascismo y el comunismo a través de una lectura inexacta de las coaliciones antifascistas de su periodo clásico, entre las dos guerras mundiales.

En aquel momento, el antifascismo surgió como un movimiento que aglutinaba a todos aquellos contrarios al auge y éxito del fascismo. Aunque las primeras reacciones se pueden retrotraer a los años veinte, cuando Benito Mussolini llegó al Gobierno en Italia, estas fueron minoritarias y dispersas. Las relaciones entre los diferentes sectores de las izquierdas obreras eran turbulentas, con duros enfrentamientos entre socialistas y comunistas —a los que se añadían los anarquistas, en aquellos lugares donde eran relevantes, como España—, y solo los comunistas —minoritarios en prácticamente toda Europa— percibían el peligro fascista de una forma más exacta. La mayoría de los socialistas se situaba por entonces tan contraria a los fascistas como a los comunistas, como se puso de manifiesto en el congreso de Bruselas (1928) de la Internacional Obrera y Socialista (IOS).

Hubo que esperar a la llegada de Hitler a la Cancillería alemana, en enero de 1933, para que la reacción fuera más amplia. Comenzaron en ese momento las iniciativas de coordinación y pacto —en la Europa en la que aún sobrevivían regímenes democráticos y parlamentarios— entre las izquierdas plurales, fuertemente acosadas por los cada vez más numerosos regímenes autoritarios del continente.

Será a partir de ese momento cuando podamos reconocer el antifascismo como un movimiento sociopolítico plural, un espacio dinámico de convivencia y convergencia entre culturas políticas diferentes, unidas alrededor de su oposición al fascismo y la reivindicación de los principios y los valores universalistas de origen ilustrado de igualdad, ciudadanía, libertad y democracia. La defensa de estos valores formaría el núcleo de un mínimo antifascista y se activaría en diferentes contextos cuando se percibió su amenaza. Dentro de él tendrían cabida católicos y conservadores liberales —como el italiano Luigi Sturzo en el primer caso y el británico Winston Churchill en el segundo—, comunistas y, por supuesto, reformistas más radicales —ya fuera de corte norteamericano, con Franklin D. Roosevelt a la cabeza, o de tipo europeo, como todos aquellos englobados en la española Izquierda Republicana—, así como también socialistas herederos de la ya fenecida Segunda Internacional y anarquistas.

Esta pluralidad no debe ocultar, en todo caso, que fueron las izquierdas

obreras e intelectuales —con una importancia relevante de jóvenes y mujeres— las responsables principales de poner en marcha este movimiento de masas, que apostaba por la transformación paulatina, pero indefectible, de la realidad social y, por tanto, de un reformismo de profundo calado. De este modo, la identificación reduccionista entre comunismo estalinista y antifascismo, desechando la importancia y el protagonismo de elementos no comunistas en el antifascismo histórico de entreguerras, no se sostiene. Sin menospreciar la importancia comunista en muchos casos y momentos, el antifascismo fue plural desde sus inicios, dinámico y en él convergieron movimientos políticos diferentes, presentes en su principal concreción política y gubernamental: los frentes populares. El antifascismo, en todo caso, fue un espacio de encuentro mucho más amplio —política, geográfica y cronológicamente hablando— que el Frente Popular, circunscrito a los casos de Francia, España y Chile. El primero se situaría en un marco que va de 1933 a 1945, mientras que los frentes populares se desarrollaron más tardíamente —desde 1935 en el caso de Francia y 1936 en el de España— y desaparecieron, en los casos europeos, antes del final de la guerra civil española —el gran momento de movilización antifascista internacional antes de la conflagración mundial—. Ahora bien, el papel que jugó el comunismo en ellos también ha marcado en buena medida su interpretación.

El punto de arranque de estas coaliciones se debe situar, en Europa, en un momento coincidente: 1934, tras los hechos de febrero en Francia y la revolución de octubre en España. Estos dos hitos cambiaron, a ambos lados de los Pirineos, el ritmo político de forma progresiva y provocaron el acercamiento obrerista y republicano.

En el primer caso, todo se desencadenó en la tarde-noche del 6 de febrero, mientras el Parlamento francés votaba la presentación ministerial de Édouard Daladier. En ese momento, las ligas, asociaciones y formaciones derechistas promovieron manifestaciones —que acabaron en disturbios— por las calles de París, casi hasta las puertas de la Asamblea Nacional. La respuesta de las formaciones obreras, tras un primer momento de desconcierto, fue de acción conjunta y colaboración, dado que entendían que aquello había sido una intentona golpista fascista y una verdadera toma del poder por parte de la

derecha, concretada en la caída de Daladier y la formación de un Gobierno denominado de Unión Nacional.

A partir de aquí, se intensificaron los contactos entre SFIO y PCF para lograr acuerdos e incluso la fusión de ambas organizaciones a pesar de las diferencias. El impulso unitario era notable entre las bases socialistas y comunistas, la izquierda de la SFIO y la dirección del PCF. Desde estos núcleos, la dinámica de concertación se fue extendiendo hasta que, finalmente, en el verano de 1934 la dirección nacional socialista se mostró favorable a la unidad de acción con los comunistas, quienes, también partidarios de la concertación con los republicanos radicales, comenzaron a trabajar en una doble dirección: intentar convencer a aquellos —desde octubre de 1934— para que aceptaran la inclusión en los acuerdos de los radicales y hacer lo propio con la Internacional Comunista (IC), donde las resistencias a los pactos con los socialistas eran notables.

El acercamiento al radicalismo era sumamente complicado debido a las controversias entre socialistas y republicanos, agrandadas durante los años treinta por las diferentes soluciones que planteaban ante la crisis económica. Mientras el Parti Républicain, Radical et Radical-Socialiste (PRRS) se adhería a una política deflacionaria y de equilibrio presupuestario, el socialismo insistía en que tanto la salida de la crisis como la respuesta antifascista pasaban por un mayor intervencionismo económico —que incluía nacionalizaciones y controles sobre el sistema financiero— y la mejora de las protecciones sociales. El empeño del PCF fue el elemento esencial para la inclusión final de los republicanos progresistas. Gracias a ello, en julio de 1935, el Frente Popular francés era un hecho.

Igualmente complicado fue el cambio en la IC. Ahora bien, la evolución de la política francesa acabó por empujarla a cambiar su tradicional postura de choque contra los socialistas. Los pactos franceses —en algunos momentos más rápidos y en contra de las directrices informales de la IC— fueron la antesala del cambio oficial que se produjo en el VII Congreso de la Internacional Comunista de agosto de 1935, cuando se bendijo la conformación de pactos interclasistas con socialistas y reformistas radicales. Para ello, en todo caso, fue imprescindible que los líderes franceses —con

Maurice Thorez a la cabeza— contaran con un estrecho aliado en la dirección de la Internacional: Gueorgui Dimitrov, secretario general del Comité Ejecutivo de la IC y defensor, frente a muchos de los dirigentes del comunismo internacional, del giro realizado.

De este modo, la consumación del pacto en Francia fue anterior al congreso de la IC, pero, además, la iniciativa de concertación no surgió únicamente del comunismo, sino que provenía de diferentes ámbitos del obrerismo que fueron confluyendo desde mediados de 1934. Dentro del propio socialismo, la inclinación al pacto también fue remarcable. Aunque la cuestión generó una marcada división en la IOS —visualizada en su reunión de noviembre de 1934— entre los que defendían la confluencia (sobre todo, franceses, españoles, italianos y austríacos) y los que seguían siendo reticentes al acercamiento a los comunistas (británicos, alemanes, escandinavos, checoslovacos, polacos y holandeses), finalmente se abrió la posibilidad, a diferencia de lo ocurrido en marzo de 1933, de que cada sección nacional pudiera llegar a acuerdos concretos si así lo consideraba.

En el caso español, las consecuencias de la revolución de octubre provocaron tanto la difusión del antifascismo como el comienzo de las negociaciones que condujeron a un reencuentro de republicanos y socialistas. Sin un acuerdo obrero previo —más allá de la existencia de unas alianzas obreras antifascistas que no habían sido ni lo sólidas ni lo eficaces que habían esperado sus miembros—, como sí había sucedido en Francia, las negociaciones, iniciadas desde mediados de 1935 por Indalecio Prieto y Manuel Azaña, solo se desbloquearon tras la caída del Gobierno a finales de ese año y la constatación de la capacidad movilizadora del azañismo. El peso recayó en un plural republicanismo progresista —aunque nunca receptivo a la inclusión de los comunistas— y en un dividido socialismo, y se tradujo en un acuerdo electoral y un programa de Gobierno, del que la oposición republicana obligó a excluir las propuestas socialistas más ambiciosas, que se desarrollaría tras las elecciones del 16 de febrero de 1936.

En todo el proceso, el PSOE actuó de representante del resto de grupos obreristas, a los que los partidos republicanos no permitieron actuar de forma directa. Aun con todo, su presencia fue la condición que la izquierda

socialista había puesto para aceptar el pacto. Los republicanos, además, forzaron que la representación de las organizaciones obreras saliera de la parte correspondiente originalmente al PSOE. Por tanto, el papel del comunismo español fue siempre muy secundario, solo utilizado por otros actores implicados en las negociaciones para presionar en favor de sus intereses: desde aquellos socialistas (con Indalecio Prieto a la cabeza) que apostaron por primar la colaboración con los republicanos, incluso aceptando una posible participación gubernamental, sin que ello excluyera necesariamente la incorporación comunista, a aquellos otros (que tenían a Francisco Largo Caballero como líder) que no solo primaban la concertación obrera, con ellos a la cabeza, sino que obsesivamente trataban de evitar que se consumara una reedición de la experiencia del primer bienio republicano, cuando su presencia en el Gobierno entendían que había recortado su capacidad de acción. Y, del mismo modo, aunque en sentido contrario, ocurrió entre los republicanos tendentes al pacto: mientras algunos lo rechazaron por la presencia de los comunistas, como hizo Felipe Sánchez Román, otros, como Diego Martínez Barrio o Manuel Azaña, aceptaron su presencia con resignación y no sin recelos, tal y como muestran las palabras del segundo a Prieto: “¿Adónde podemos ir nosotros, ni ustedes, con los comunistas?”.

En ambos casos, los acuerdos respondían a una doble voluntad antifascista. Por un lado, defensiva frente al avance de las fuerzas contrarias a la democracia y, por otro, ofensiva, propositiva y, por tanto, con objetivos claros, plasmados no solo en una coalición electoral instrumental, sino también en un programa de acción política dirigido a la transformación social. Porque el énfasis siempre se ponía en el programa que se debía aplicar una vez se alcanzara el Gobierno.

Tanto en España como en Francia, el Frente Popular tenía como medio el reformismo, pero el fin era más ambicioso, al menos para sus integrantes obreristas, como era el caso de los socialistas. Tal y como señaló Léon Blum, la tarea era “extraer del régimen cuanto pueda ser aprovechado en bien de la justicia y el bienestar sociales para quienes trabajan”. Así se llegaría a “constituir la sociedad como la interpretamos nosotros”. De hecho, en

diciembre de 1935, Indalecio Prieto señaló que el objetivo era llegar a “un buen programa previamente convenido, que obligue a los republicanos a realizarlo desde el banco azul y a nosotros a apoyarlo desde los escaños”. Aunque no creyó oportunas las propuestas socioeconómicas más audaces y prefirió contemporizar con la moderación del republicanismo, el reformismo —también social, como había sucedido durante el primer bienio republicano— era irrenunciable. Por su parte, la izquierda socialista española insistía en mirar al Frente Popular poniendo el acento en la perspectiva transformadora. Desde mayo de 1936, el Gobierno del Frente Popular comandado por la SFIO y dirigido por Blum se convirtió en un modelo para el caballerismo. Las medidas relativas a la disolución de las ligas ultraderechistas, la intervención en el Banco de Francia y la nacionalización de las industrias de armamento, así como los acuerdos para la resolución del movimiento huelguístico de mayo y junio (Acuerdos de Matignon) empujaron al caballerismo no solo a ver de forma diferente la acción gubernamental en el marco del frentepopulismo, sino también a exigir una acción estrechamente vinculada entre el Gobierno republicano y las fuerzas frentepopulistas en contacto con el movimiento obrero.

El antifascismo y los frentes populares fueron, así, elementos activados desde diferentes sectores sociales y políticos como fórmula de contraposición al fascismo. Conservaron, por eso, la pluralidad —tanto de propuestas como de miembros— y todas sus consecuencias derivadas: un equilibrio inestable entre los diferentes integrantes del pacto (incluso dentro de las propias formaciones políticas), una combinación de elementos identificadores provenientes de dichos componentes y una amalgama de propuestas dirigidas fundamentalmente a la construcción de un programa político de transformación social. Una transformación que podía no contentar del todo ni a los más templados por lo que podía suponer de intervención estatal, pero que, a la vez, no acababa de cumplir los deseos de cambio sistémico de los más radicales.

Suponía, al fin y al cabo, una solución perspicaz desde las izquierdas ante el principal reto al que se enfrentaban. Una forma de plantear una alternativa no solo defensiva y conservadora de lo existente —de lo que hoy se acusa a

las izquierdas—, sino, sobre todo, constructiva. Estimulante de un proyecto de futuro que, a partir de los valores universalistas que tradicionalmente venían defendiendo, pudiera convencer a diferentes grupos sociales (más radicales o más moderados) para que no se plegaran ni a una movilización favorable a las nuevas utopías fascistas ni a una desmovilización contemporizadora. Para ello, como señalábamos al principio, fue fundamental no solo la confluencia obrera, sino también la opción que tomaron los sectores “centristas” (reformistas de corte liberal-progresista): primaron el antifascismo sobre el anticomunismo, lo que colaboró a conformar un conjunto de propuestas atractivas que atendían a los principales retos de la sociedad. Se iba, por tanto, más allá de un simple antifascismo retórico y banal y se traspasaban lo que hasta ese momento habían sido límites impenetrables a través de un reformismo más ambicioso y la incorporación del comunismo.

BIBLIOGRAFÍA

- FURET, François (1995): *El pasado de una ilusión: ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX*, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.
- GARCÍA, Hugo (2015): “Presente y futuro de una ilusión: la historiografía sobre el antifascismo desde Furet, 1996-2015”, *Ayer*, nº 100, pp. 233-247.
- JULIÁ, Santos (1977): *Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936)*, Madrid, Siglo XXI.
- MARTÍN RAMOS, José Luis (2015): *El Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España*, Barcelona, Pasado y Presente.
- TRAVERSO, Enzo (2009): *A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945)*, Valencia, PUV.
- VINYES, Ricard (1983): *La Catalunya internacional. El frontpopulisme en l'exemple català*, Barcelona, Curial.

CUARTA PARTE
LOS MITOS DEL FRANQUISMO
Y SU HERENCIA.
DERECHA Y EXTREMA DERECHA

CAPÍTULO 14

PERO FRANCO CREÓ LA SEGURIDAD SOCIAL...

DAMIÁN A. GONZÁLEZ MADRID Y MANUEL ORTIZ HERAS

Muchas discusiones cotidianas sobre la dictadura franquista suelen desembocar en un juego tramposo, por simple y maniqueo, de luces y de sombras. Sin duda, y entre las contribuciones que suelen atribuirse al dictador para destacar su clarividencia y buen gobierno, destaca la creación y puesta en marcha de la Seguridad Social. ¿Quién no se ha visto involucrado en una de estas emboscadas dialécticas y le ha sido complicado rebatir un hecho tan contundente como que Franco creó la Seguridad Social? Una afirmación de este calibre convierte *de facto* a la dictadura en pionera en la protección de los trabajadores contra el infortunio, la enfermedad, la vejez y el desempleo. De ahí a situar al régimen como punta de lanza del reconocimiento de los derechos sociales que hoy disfrutamos o como antecedente directo de nuestro (precario) Estado del bienestar actual hay una delgada frontera fácil de atravesar. El mito se cimenta sobre un hito legal incontrovertible (en 1963 la dictadura aprobó una ley de bases para la Seguridad Social, si bien tardó cuatro años en comenzar a desarrollarla) que ha dejado como legado un concepto usado y reconocible por todos y una influyente memoria colectiva levantada sobre una narrativa nostálgica sobre el médico del seguro, las cotizaciones o las pensiones de aquellos años.

Podemos convenir, además, que aún hoy son muchos a los que incomoda esta realidad histórica y también que no faltan quienes la utilizan para redimir a la dictadura de su ignominiosa condición, como si de la auscultación de según qué decisiones pudieran derivarse consecuencias capaces de disculpar o agravar su ilegitimidad o su condición criminal y liberticida. Nada de esto puede sorprender al historiador, acostumbrado a lidiar con los usos y los abusos del pasado desde el presente y consciente de que los “Estados del bienestar” europeos son el resultado de complejos procesos de acumulación histórica que no resisten una vinculación exclusiva con el desarrollo democrático de los países. Pero de ahí a considerar a Franco como nuestro Beveridge particular hay un trecho.

La dictadura franquista, a diferencia de lo que hizo con el régimen político o con la economía, dio continuidad a las políticas reformistas de carácter social que venía desarrollando el Instituto Nacional de Previsión desde su creación en 1908. En materia de previsión social, la dictadura no supuso una ruptura ni con la Restauración ni con la II República, de la misma forma que no la habrá en la transición respecto a la dictadura, limitándose la democracia a la racionalización y perfeccionamiento del modelo heredado en medio de un debate más amplio propiciado por la ciudadanía y los movimientos sociales. La democratización del sistema de protección social desde 1977 significó la consolidación (y la continuidad, en cierta forma) de una estructura protectora compleja, de intensidad baja y en busca de la universalización de coberturas básicas. Pero también, y a partir de entonces, en permanente ajuste como resultado de su supeditación a la modernización y al crecimiento económico.

EL PRIMER FRANQUISMO Y LA CONTINUIDAD DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Como se acaba de señalar, la dictadura franquista dio continuidad al modelo de previsión social anterior a la Guerra Civil. Hasta 1939, el Estado español a través del Instituto Nacional de Previsión, había consolidado una base de seguros obligatorios de vejez (1919-1921), maternidad (1923-1929) y

accidentes laborales (1932) para cubrir a trabajadores con escasos recursos, es decir, pobres. El resto de la población, para estas u otras contingencias, debía recurrir al sistema de aseguramiento libre, al pago por servicio, o bien a los sistemas de caridad y beneficencia tradicionales sostenidos por la Iglesia, los municipios, las diputaciones u otro tipo de entidades privadas. La mayor aportación de la dictadura fue la creación del seguro obligatorio de enfermedad (SOE), cuyo texto legal se promulgó en 1942 y echaría a andar algo después. La iniciativa original, sin embargo, se había desarrollado con la Segunda República. Aquel seguro de enfermedad constituyó la piedra angular de la protección social franquista hasta la ley de Seguridad Social.

El SOE partía de una concepción restrictiva del derecho a la sanidad nacional y protegía, esencialmente, a los trabajadores fijos por cuenta ajena y sus familias siempre por debajo de un umbral considerado de debilidad o vulnerabilidad económica periódicamente actualizado. ¿Cómo lo hacía? A través de las cotizaciones de los propios trabajadores y sus empleadores, y un apoyo exiguu del presupuesto del Estado. De esta forma, eran los trabajadores, y especialmente los más pobres, quienes financiaban su propia protección. Naturalmente, la protección sanitaria dispensada tenía restricciones temporales y la prestación económica no sobrepasaba la mitad del escueto salario base de cotización. El SOE ofrecía así una protección limitada a grupos de trabajadores determinados. Por ejemplo, los trabajadores agrarios fijos fueron excluidos del SOE hasta 1948. Y los eventuales agrarios, mucho más numerosos, no comenzaron a ser incorporados (y con limitaciones adicionales respecto a los fijos) hasta 1958. Los mayores beneficiados del sistema fueron los menos numerosos obreros industriales, quizá como resultado de una política de captación hacia un sector crucial para los planes de la dictadura. En 1953, apenas el 18% de los trabajadores agrarios estaba asegurado. En 1957, la media nacional total de beneficiarios del SOE alcanzó el 35%, apenas un tercio de toda la población, y llevaría hasta 1963 llegar a la mitad.

Otro aspecto interesante de aquel seguro fue que funcionó siempre en íntima colaboración con entidades privadas o semipúblicas. En 1957, el 67% de los beneficiarios del SOE era atendido por servicios no públicos, como las

mutuas, y apenas el 10% de las escasas camas hospitalarias existentes en 1963 eran del INP-SOE frente al 33,2% del sector privado. A la muerte de Franco, el sector público alcanzó el 70% de las camas del país sumadas las de la Seguridad Social, la Administración central (19,9%) y las de los ayuntamientos y diputaciones (27,6%).

Muy deficiente fue también la protección dispensada a parados o jubilados. Durante su primera etapa, la dictadura se negó a reconocer en la práctica la existencia de un problema de desempleo, al menos hasta la promulgación de la ley 62/61 que puso en marcha el seguro nacional de desempleo. Fue el primero de estas características durante el franquismo, pero tenía un antecedente claro con Largo Caballero en 1931. La demora tenía que ver con que para el franquismo las prestaciones directas a los desempleados no eran sino una fórmula que estimulaba la vagancia. El nuevo seguro tuvo por ello un carácter netamente contributivo y discriminatorio para muchos trabajadores. Por ejemplo, había que estar incorporado a los seguros obligatorios unificados entre los que estaban la enfermedad y la vejez, lo que ya excluía a los asalariados que sobrepasasen los niveles mínimos, y también a los trabajadores eventuales en actividades agropecuarias, del mar, temporeros y trabajadores a domicilio. El seguro daba derecho a seis meses de prestaciones por el 75% del salario base cotizado y un periodo de carencia de 12 para poder volver a disfrutarlo. El modelo franquista, al que la transición daría continuidad, se caracterizaba por una baja tasa de cobertura lograda a partir de requisitos de acceso altos, que resultó soportable debido a las relativamente moderadas tasas de desempleo. El gasto en desempleo en 1972 apenas llegaba al 2,3% de todo el gasto social, pero se disparó después con la crisis. La tasa de cobertura calculada sobre la población activa en paro fue del 30% entre 1970 y 1976, coincidiendo con un periodo de conflictividad laboral creciente.

En cuanto a las pensiones por abandono de la vida laboral por edad o invalidez, la dictadura remozó en 1939 el retiro obrero creado en 1919 y lo convirtió en subsidio de vejez. En 1947 volvió a reformarlo y se renombró como seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI), exigiendo para disfrutarlo un tiempo mínimo de cotización y declarando su incompatibilidad

con prestaciones similares. Continuó siendo un seguro obligatorio para trabajadores asalariados con ingresos por debajo de un determinado umbral que se situó en 9.000 pesetas anuales. Inicialmente se financió con cuotas empresariales (3% del salario), incorporándose los trabajadores al sostenimiento del seguro en 1955. La aportación del trabajador se fijó en el 1% de su salario, mientras que los empleadores colaboraban con otro 5% adicional. El seguro funcionaba bajo sistema de reparto y el INP actuaba como gestor. Las prestaciones fueron precarias, por debajo de cualquier límite de subsistencia y conservó importantes rasgos benéficos. Hasta 1948 la prestación más habitual fueron las famosas tres pesetas fijas diarias que en modo alguno aseguraban la supervivencia de los asegurados. En 1962 las pensiones más corrientes eran de unas 400 pesetas, muy lejos por tanto de las 1.800 que se fijaron como primer salario mínimo interprofesional en España en 1963. Y en 1971 la pensión media se situó en 2.350 pesetas mensuales (aunque unos 300.000 cobraban menos de 1.000 pesetas y solo 80.000 más de 4.000) habiéndose fijado el salario mínimo para ese año en 4.080 pesetas. Una protección muy insuficiente que no revertía la tradicional relación entre ancianidad y pobreza. Las viudas de los asegurados fueron incorporadas al sistema a partir de 1955. Para ello, tendrían que demostrar impedimento para el trabajo o tener más de 65 años, no tener derecho a pensión y haber contraído matrimonio con el asegurado al menos diez años antes de la fecha de su fallecimiento. Si acabamos de referirnos a la cuantía miserable de las prestaciones por jubilación o invalidez, las que se reconocieron por viudedad se fijaron en la mitad, lo que situaba a esas mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad.

Más allá de la propaganda resiliente, e incluso de las imprecisiones de la memoria individual y colectiva, el franquismo apenas siguió desarrollando un sistema de seguros sociales obligatorio soportado sobre el ahorro individual de los trabajadores más débiles y unas aportaciones testimoniales por parte del Estado. Si lo comparamos con la tendencia internacional, el sistema español dio continuidad a modelos de protección superados por su insuficiente financiación, y por restrictivos, al estar diseñados para la protección de una parte de los trabajadores pobres. El trabajo, considerado

como una obligación con la nación y un deber impuesto por Dios, y no la necesidad, fue siempre la condición para poder recibir la protección de un seguro.

LA CREACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A partir de 1963, y sobre todo desde 1967, la dictadura modificó su modelo de seguros sociales individuales y obligatorios para trabajadores vulnerables, y planteó su evolución hacia la universalidad, la unificación de la gestión, de las prestaciones y de las contingencias, con la implicación financiera del Estado y un sistema de reparto y no de capitalización. Aquella norma marcó el inicio de otra forma de concebir la protección social y su financiación en España. Pero lo cierto fue que, en la práctica, tanto la ley de bases de 1963 como su desarrollo en la general de 1966 no pasaron de una mera aspiración. El sistema continuó fragmentado en regímenes especiales, no existió la unidad de contingencias en materia sanitaria (el sistema continuó centrado en la enfermedad y el accidente profesional para devolver al trabajador al espacio laboral) y no hubo gestión pública unificada, sino compartida y descoordinada con las mutuas y entidades colaboradoras. El trabajador cotizante permaneció en el centro de la protección, no la necesidad, por lo que nunca hubo prestaciones universales, excluyéndose o marginándose ciertos colectivos; tampoco hubo equidad en las prestaciones, que quedaron marcadas por la procedencia profesional y social de los beneficiarios, y, por supuesto, la implicación financiera del Estado no alcanzó nivel alguno de suficiencia (los trabajadores continuaron financiando su propia protección), renunciándose a cualquier gesto redistributivo. Si la buena noticia era que en 1970 España ya consumía más de la mitad de su presupuesto nacional en gasto social, la mala era que lo hacía invirtiendo apenas el 9,5% de su PIB, frente a la media europea del 17,2%. De aquel gasto social la contribución del Estado a través de impuestos continuó siendo muy baja: en 1977, la financiación en España procedente de los presupuestos generales era del 4%, cuando la media en Europa apuntaba al 30%. Muchos de los rasgos del modelo franquista de Seguridad Social sobrevivieron a la propia dictadura

incrustados durante años en el democrático.

Tras la Segunda Guerra Mundial el concepto de “seguridad social” se popularizó en todo el mundo. Su gran novedad residió en que la protección social se extendía más allá del espacio laboral para alcanzar a todos los sectores sociales. Un régimen de seguridad social implicaba que cada individuo, por el hecho de serlo, quedaba integrado en el cuerpo social a través de la acción protectora de los poderes públicos que debían mejorar sus niveles de vida materiales y culturales. Era una suma cabal de aseguramiento social y asistencia social, no para apoyar a los más débiles, sino para proveer de bienestar al conjunto de la población. Por tanto, puede concluirse que la creación legal de la seguridad social solo fue la primera de muchas transformaciones que llegarían después y gradualmente. La ausencia de una política fiscal progresiva, de compromiso presupuestario del Estado con el sistema y de prestaciones no vinculadas a la condición de cotizante, logros todos ellos de la democracia, convierten en inadecuada la utilización incluso del propio concepto de “seguridad social” para referirse a aquella reforma del aseguramiento social de 1963-1967. Y, por supuesto, huelga decir que sin redistribución y universalidad tiene difícil encaje cualquier definición que pretenda vincular la protección social de la dictadura con un Estado del bienestar. Tanto la una como la otra eran imposibles, sencillamente porque habrían debido surgir de un gran pacto social y fiscal, inviable desde cualquier punto de vista en aquella España por su incompatibilidad con la naturaleza del régimen político. Los matices no son baladíes. Como tampoco lo es que aquel sistema llamado de seguridad social, con sus graves carencias, imposturas e imperfecciones, fue la pasarela utilizada por la democracia para superar, reformándolo, un modelo de protección anticuado y de baja calidad, del que sobre todo se beneficiaban entidades privadas con ánimo de lucro, algunos sectores médicos amparados por sus colegios y las empresas farmacéuticas. La historia de la protección social es la de un lento y progresivo tránsito hacia la universalización, la gestión pública y la no contributividad por la vía de una evidente continuidad, incluso en los conceptos. Resulta así del todo lógico que muchos ciudadanos, con independencia de sus intenciones, atribuyan a la dictadura logros a todas

luces exagerados sobre esa cuestión.

BIBLIOGRAFÍA

- COMÍN COMÍN, Francisco (2010): “Las fases históricas de la Seguridad Social en España, (1900-2000)”, *Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa*, nº 4, pp. 65-89.
- GONZÁLEZ MADRID, Damián A. y ORTIZ HERAS, Manuel (2018): “El franquismo y la construcción del Estado del bienestar en España: la protección social del Estado, 1939-1986”, *Pasado y Memoria*, nº 17, pp. 361-388.
- (2020): *El Estado del bienestar entre el franquismo y la transición*, Madrid, Sílex.
- (2024): “Del seguro a la Seguridad Social: la modernización del concepto y sus límites durante el primer franquismo”, *Historia Social*, nº 108, pp. 151-170.
- GUILLÉN RODRÍGUEZ, Ana (2000): *La construcción política del sistema sanitario español: de la posguerra a la democracia*, Madrid, Exlibris.
- PONS PONS, Jerònia y VILAR RODRÍGUEZ, Margarita (2014): *El seguro de salud privado y público en España: su análisis en perspectiva histórica*, Zaragoza, PUZ.

CAPÍTULO 15

¿UNA DICTADURA SIN APOYOS O UN PAÍS LLENO DE FRANQUISTAS?

CARLOS FUERTES MUÑOZ

Dos son los lugares comunes más arraigados en el imaginario sobre las actitudes de la sociedad española ante la dictadura de Franco. El primero, señala que aquella fue una dictadura sin apoyos, presentándola como artificio o mera imposición desde arriba y por la fuerza, que apenas contó con apoyos sociales más allá de las élites. Un reduccionismo particularmente fuerte entre ciertas izquierdas actuales y sectores del movimiento memorialista, que lo contraponen a la visión —no poco idealizada— de una Segunda República que habría contado con un apoyo masivo. Pero también difundido entre ciertos sectores de los nacionalismos catalán y vasco, que aluden a la falta de arraigo al territorio de un franquismo representado como ajeno, como mero régimen de ocupación impuesto desde Madrid/España. Frente a este mito, a menudo se contrapone otro, también enormemente simplificador: España fue un país lleno de franquistas. Este se utiliza más o menos sutilmente en clave de legitimación pseudodemocrática de la dictadura por parte de una derecha españolista escasamente comprometida con la condena del franquismo y la construcción de una memoria democrática. Pero también es evocado desde sectores de la izquierda, con una lectura pesimista o de denuncia de las complicidades sociales con el franquismo.

Lugares comunes contradictorios entre sí pero que, entremezclándose, siguen nutriendo el debate público sobre el franquismo, con repercusiones en las representaciones sobre la transición a la democracia y sobre la propia democracia. Frente a estas medias verdades, numerosas tesis doctorales se han aproximado “desde abajo” a las actitudes sociales hacia el franquismo mediante fuentes orales e informes internos policiales, de Falange, del PCE o de los cuerpos diplomáticos. Así, el enorme conocimiento histórico generado nos permite cuestionar con contundencia estos lugares comunes, mostrando la enorme complejidad y pluralidad de las actitudes ante el franquismo, así como su dinamismo y evolución a lo largo de los 40 años de dictadura.

¿UNA DICTADURA SIN APOYOS?

El tópico que presenta al franquismo como una dictadura carente de apoyos sociales tiene escaso recorrido historiográfico, dado que es evidente que las dictaduras requieren tanto de la coerción como de un consentimiento considerable para su establecimiento y perdurabilidad, tal y como han demostrado las investigaciones sobre las actitudes sociales ante regímenes tan diversos como el nazismo, el fascismo italiano, la última dictadura militar argentina o la URSS. Así, conviene subrayar con claridad que la dictadura franquista tuvo unos “innegables apoyos sociales” que fueron mucho más allá de una reducida élite perteneciente a las más altas jerarquías del ejército, la Iglesia, el empresariado y los partidos de derechas. El franquismo nació durante la Guerra Civil y en esta se forjaron sus más sólidos apoyos sociales, a quiénes podríamos definir como “vencedores comunes”, aquellos que se identificaron con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 o con la posterior victoria de los sublevados. Personas muy diversas localizadas en todos los rincones del país, predominantes entre las clases altas, pero también presentes entre las clases medias, el campesinado familiar y sectores menos favorecidos identificados con el catolicismo y el ultranacionalismo español. Ciudadanos con culturas políticas conservadoras que, antes de la guerra, percibieron las reformas republicanas dirigidas a la redistribución de la riqueza y la tierra y la construcción de un Estado laico y descentralizado

como una amenaza a su estatus, valores, identidades y estilo de vida, tendiendo a apoyar electoralmente a las derechas. Actuando sobre esta base, la experiencia —amplificada por la propaganda— de la guerra y de la violencia política contribuyó a reforzar este tipo de actitudes de rechazo de las izquierdas e identificación con la derecha antidemocrática y golpista.

En primer lugar, la experiencia de los combatientes “nacionales” contribuyó a forjar las lealtades hacia la dictadura, tanto entre una parte de estos como entre sus familiares y entorno, teniendo en cuenta, entre otras dimensiones, las recompensas —materiales y simbólicas— que dicha participación —a menudo traducida en la muerte de los “caídos”— tuvo tras la victoria, con la proliferación de las agrupaciones de “excombatientes”. Un fenómeno que pudo darse con mayor extensión en las regiones en las que, como Galicia, Navarra o Castilla la Vieja, triunfó inicialmente el golpe de Estado o fueron conquistadas tempranamente y que por ello contribuyeron más al ejército sublevado, en algunos casos —y junto al masivo reclutamiento forzoso—, a través de un alistamiento voluntario por parte de hombres fuertemente ideologizados.

En segundo lugar, el sufrimiento personal o familiar de la “violencia revolucionaria” y el anticlericalismo practicados durante la guerra por parte de partidarios de la República reforzó el apoyo a los vencedores, algo que fue especialmente importante en aquellas regiones que, como el País Valenciano, Madrid o Cataluña, permanecieron en zona republicana durante más tiempo, y particularmente durante el verano de 1936. En estas, la vivencia cotidiana de un ambiente de persecución político-religiosa favoreció la radicalización y el reforzamiento del apoyo a los sublevados entre muchas familias (no solo de “cautivos” y “mártires”) que tuvieron que esconderse y sufrieron fusilamientos, detenciones, registros, requisamientos, impedimentos para la práctica religiosa o meras formas de hostilidad cotidiana debido a su conocimiento público como personas católicas y de derechas.

En tercer lugar, la colaboración “desde abajo” en la gran represión inicial desatada en los distintos pueblos y ciudades que iban conquistando los golpistas expresó y a la vez reforzó la lealtad hacia la dictadura. No pocos partidarios del bando sublevado y vencedor asumieron un papel protagonista

y voluntario en la identificación y persecución de los enemigos políticos, delatando o denunciando a sus vecinos y solicitando a las autoridades un severo castigo para los vencidos. Fue fraguándose así una especie de “pacto de sangre” implícito entre delatores —y ejecutores—, de una parte, y las élites políticas, de otra. Pacto que, sobre la base del miedo a una eventual venganza “roja”, favoreció un férreo apoyo a la dictadura entre derechistas corrientes.

Así, en los años cuarenta, años de efervescencia de la “cultura de la victoria” en los que la memoria de la “cruzada” estaba a flor de piel, la dictadura contó con el sólido apoyo de la “sociedad de los vencedores”. Un conglomerado heterogéneo que se cohesionó precisamente a través de la constante identificación y rememoración pública del “enemigo” común y de la experiencia bélica compartida, nutriendo el personal político de ayuntamientos u organizaciones como la Sección Femenina. Pero ¿se mantuvo este apoyo entusiasta hasta el final de la dictadura? Ciertamente, numerosos “vencedores comunes” mantuvieron en muchos casos intacta su inicial fidelidad hacia un “régimen” que les había devuelto la tranquilidad y la seguridad, además de proporcionales diversos privilegios. Al tiempo, el crecimiento económico durante el “desarrollismo” reforzó la satisfacción de los sectores de las clases medias y altas identificados previamente con la dictadura, quienes más disfrutaron del “progreso” y menos sufrieron sus efectos adversos, atribuyéndolo y agradeciéndolo —de acuerdo con la propaganda oficial— a las decisiones y políticas de los tecnócratas, idealizando los planes de desarrollo o los pantanos como grandes aportaciones de Franco.

Sin embargo, el primigenio consentimiento activo o positivo con la dictadura se vio erosionado progresivamente con la aparición de síntomas de “agotamiento” en la “adhesión inquebrantable” del entorno de los vencedores. Ello se plasmó en elementos como la decadencia de las conmemoraciones de la guerra, ritos políticos de gran relevancia para la cohesión interna de los apoyos del franquismo en sus primeros años que, desde los cincuenta y de forma creciente, se enfrentaron a la pérdida de entusiasmo entre sectores de los vencedores, incluida una falta de

colaboración entre los sacerdotes. Precisamente, otro ejemplo del agotamiento del consentimiento activo es, a partir de los sesenta, el alejamiento de la dictadura entre sectores de las nuevas generaciones de católicos, pero también de universitarios, militares o policías, que evidencian las fisuras en la transmisión familiar/intergeneracional del apoyo al franquismo. Así, se ha constatado un cambio actitudinal entre los descendientes de los vencedores, muchos de los cuales, en relación con los cambios en el ámbito del catolicismo posconciliar, la conversión de numerosos centros educativos en espacios de socialización alternativa y, en general, el avance de los movimientos sociales de protesta y el malestar con la represión frente a ellos, se ubicaron en una zona “intermedia”, evolucionando a menudo no tanto hacia el “antifranquismo” como hacia una especie de “afranquismo”. Cambios que, con el alejamiento de la contienda y los años cuarenta, favorecieron una atenuación en el apoyo entusiasta a la dictadura también entre los más mayores, lo que ayuda a entender las escasas resistencias activas hacia un cambio democrático vivido con una extendida normalización y aceptación, bien que mayoritariamente pasiva, entre amplios sectores de los “vencedores comunes”.

¿UN PAÍS LLENO DE FRANQUISTAS?

La negación del primer lugar común, que el franquismo fue una dictadura sin apoyos, a menudo lleva a concluir lo contrario: que España fue un país lleno de franquistas, contando la dictadura con un “consenso” generalizado que explicaría su pervivencia tras la caída de los fascismos y en conjunto durante 40 años. Como hemos señalado, este segundo lugar común tiene igualmente un notable arraigo en los usos públicos del pasado franquista en la España actual. Tanto a nivel político como a nivel social, pues, por ejemplo, de alguna manera es reproducido en los libros de texto de secundaria de los últimos años, en los que la cuestión de las actitudes sociales ante la dictadura suele reducirse a un epígrafe: “Los apoyos sociales del franquismo”. Y, nuevamente, se trata de un tópico enormemente simplificador, pues supone la sobrevaloración de los apoyos de la dictadura, que, como han mostrado las

investigaciones, tuvieron unos límites nada desdeñables, yendo las actitudes de la sociedad española mucho más allá del “consenso” activo y profundo con el franquismo, predominando en cambio una aparente pasividad, una “mayoría silenciosa” que, lejos de ilustrar “un país lleno de franquistas”, escondía múltiples posicionamientos. Desde el rechazo sin fisuras hasta el conformismo acrítico, pasando por un consentimiento parcial y ambivalente asociado a la existencia de unas no marginales “zonas intermedias” o “grises” en la sociedad española, entre las que, al tiempo, también se daban formas de resistencia cotidiana detectables entre el conjunto de la ciudadanía. Posicionamientos que, además, fueron dinámicos y variables, evolucionando a lo largo de las cuatro décadas de dictadura.

Durante la guerra y los cuarenta, marcados por la “cultura de la victoria”, la fascistización más evidente, un nacionalcatolicismo omnipresente, la “gran represión”, la lucha por la supervivencia y la lenta reconstrucción de una cierta normalidad, las investigaciones muestran que, en contraste con el sólido apoyo de la “sociedad de los vencedores”, la dictadura se enfrentó a una “amplia hostilidad pasiva” entre las clases populares que más sufrieron la represión, el control social-moral y la miseria, sintiéndose mayoritariamente identificadas con los vencidos. Igualmente, sufrió la indiferencia y el distanciamiento de numerosos ciudadanos ubicados en posiciones políticas más ambiguas pero que, en sus relatos autobiográficos, centran sus críticas a la dictadura en estos años de intenso control ideológico-moral y extrema miseria. En los cincuenta, con una atenuación de la represión, la sustitución de la miseria por la pobreza y una oposición en plena crisis, la dictadura dilató el consentimiento pasivo, si bien las actitudes sociales más allá del núcleo de los vencedores continuaron marcadas por una destacada ambigüedad y más próximas a la hostilidad pasiva o, en todo caso, a una “aceptación resignada” que a un apoyo activo a la dictadura.

En los sesenta, la dictadura, consciente del malestar de gran parte de la población con la autarquía y la intensa presión ideológica, impulsó un cambio en sus estrategias legitimadoras, atenuando los discursos de la victoria, la “revolución falangista” y la “recristianización” de España, con un nuevo modelo de dominación menos exigente, más “aperturista” e incluso, más

centrado en el refugio apolítico en la esfera privada, en la exaltación de la “paz” y en las perspectivas de mejora individual asociadas al “progreso”. Un modelo centrado en explotar propagandísticamente el bienestar material del “desarrollismo”, idealizado como generalizado y como consecuencia exclusiva de las decisiones liberalizadoras de los “tecnócratas” y de las políticas públicas de la dictadura. Sobre esto último, se aprecia particularmente el potencial de las políticas públicas, con una mayor inversión y desarrollo en los últimos 20 años, para generar espacios de consentimiento en forma de reconocimientos puntuales —de la seguridad social o las viviendas públicas— entre individuos alejados de los “vencedores comunes”, críticos con otras dimensiones como la represión o la miseria de posguerra. En conjunto, ciertamente detectamos para el “desarrollismo” (c. 1959-c. 1969) una reducción de la hostilidad y la resignación, apreciándose al tiempo un aumento del conformismo y la “normalización” acrítica de la dictadura entre sectores ubicados en las “zonas intermedias” e incluso entre los descendientes de los vencidos, muchos de ellos educados en el conformismo, desconocedores de sus “antecedentes” y referentes ideológicos familiares.

En cualquier caso, por paradójico o contradictorio que pueda parecer, las investigaciones evidencian los notables límites, la fragilidad y el agotamiento del nuevo tipo de consentimiento que consiguió articular en sus últimos 15 años la dictadura, que estuvo lejos de impulsar un amplio y coherente “franquismo sociológico”, como a menudo se sugiere. Para empezar, la reducción de la hostilidad, el aumento del conformismo y el reconocimiento de ciertas políticas públicas no se tradujo en un agradecimiento profundo a la dictadura por el progreso, pues este a menudo fue percibido como precario —con enormes déficits y desequilibrios entre regiones y clases sociales— y como fruto del turismo extranjero y del sacrificio popular a través de la emigración masiva —interior y exterior— y la (auto)explotación laboral. Igualmente, el arraigo de las memorias negativas de la larga (pos)guerra (asociada a la gran represión, el control moral y la miseria) favoreció, por comparación, dicha reducción de la hostilidad en un nuevo contexto económico y con un modelo de dominación menos asfixiante. Pero al tiempo

explica también que muchos no fuesen más allá del conformismo y la adaptación pasiva, mostrándose muy alejados de una identificación entusiasta con la dictadura y, manteniendo en no pocos casos bien vivos —aunque con discreción— el recuerdo crítico de la gran represión, la memoria republicana y la identificación con los vencidos y las izquierdas.

Paralelamente, como ya hemos señalado, el primigenio consentimiento activo o positivo con la dictadura se vio erosionado progresivamente entre los descendientes de los “vencedores”, en un contexto en el que se agudizó el temprano “fracaso del proyecto oficial de socialización y participación política” para generar un apoyo activo y una interiorización de las culturas políticas del franquismo entre las nuevas generaciones y el conjunto de la sociedad. Algo claramente apreciable en un sindicalismo laboral y universitario de impronta falangista que iría debilitándose desde mediados de los sesenta mediante la infiltración (“entrismo”) y el avance de las Comisiones Obreras y el movimiento estudiantil antifranquista. Ciertamente, otro elemento clave para entender las actitudes sociales en los últimos años es la paralela “expansión de la socialización alternativa y la cultura de la protesta”, agudizada enormemente desde finales de los sesenta favoreciendo especialmente el cambio actitudinal entre una juventud del tardofranquismo que se situó entre la normalización, la insatisfacción y el creciente distanciamiento de la dictadura. Ciertamente, estos grupos de edad estaban especialmente expuestos a los nuevos discursos difundidos informalmente por la “inmensa minoría” de activistas antifranquistas, en buena medida miembros de su propia generación, en lugares como institutos, facultades, clubs juveniles, centros excursionistas, parroquias, centros de trabajo y otros espacios de sociabilidad cotidiana en ámbitos tanto urbanos como rurales.

Bajo la iniciativa del PCE y frente a la resistencia clandestina y defensiva propia de la posguerra, se produjo una progresiva ocupación de “zonas de libertad” mediante la conversión de antiguos espacios utilizados para el adoctrinamiento o el control social de la población en focos de socialización alternativa, proceso favorecido también por la emergencia del catolicismo progresista y de los nacionalismos alternativos. En conjunto, se amplificó la difusión de referentes culturales críticos y aprendizajes políticos

democráticos en un contexto de expansión de las protestas estudiantiles, obreras y vecinales, que se hicieron masivas tras la muerte de Franco acelerando en 1976 el fracaso de los proyectos continuistas que pretendían extender el franquismo más allá de Franco. Así, finalizaremos desmintiendo un ulterior y transversal lugar común que, como correlato del que presenta a España como “un país de franquistas”, dibuja una sociedad profundamente desmovilizada en el tardofranquismo, con un antifranquismo enormemente débil y carente de influencia frente a una “transición” dirigida desde arriba por las élites (pos)franquistas. Y es que las investigaciones históricas dejan claro el papel absolutamente fundamental de la sociedad civil y los movimientos sociales antifranquistas en lo que debemos entender mejor como una auténtica “conquista de la democracia”, pues, no lo olvidemos, las actitudes sociales no solo no fueron un mero “resultado” o un “reflejo” de las políticas y discursos del franquismo, sino que, además, condicionaron tanto el origen y la consolidación de la dictadura como su propia evolución y desaparición.

BIBLIOGRAFÍA

- ARCO, Miguel Ángel del *et al.* (eds.) (2013): *No solo miedo. Actitudes políticas y opinión popular bajo la dictadura franquista (1936-1977)*, Granada, Comares.
- CABANA, Ana (2009): *Xente de orde. O consentimento cara ao franquismo en Galicia*, Santiago de Compostela, TresCtres.
- FONT, Jordi (2001): *¡Arriba el campo! Primer franquisme i actituds polítiques en l'àmbit rural nord-català*, Girona, Diputació de Girona.
- FUERTES, Carlos (2017): *Viviendo en dictadura. La evolución de las actitudes sociales hacia el franquismo*, Granada, Comares.
- HERNÁNDEZ, Claudio (2013): *Franquismo a ras de suelo. Zonas grises, apoyos sociales y actitudes durante la dictadura (1936-1976)*, Granada, EUG.
- MARTÍN, Óscar (2008): *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio político en la provincia de Albacete, 1966-1977*, Madrid, Los Libros de la Catarata.
- ROMÁN, Gloria (2020): *Franquismo de carne y hueso. Entre el consentimiento y las resistencias cotidianas (1939-1975)*, Valencia, PUV.
- SAZ, Ismael y GÓMEZ, J. Alberto (eds.) (2025 [1999]): *El franquismo en Valencia. Formas de vida y actitudes sociales en la posguerra*, Valencia, PUV.

CAPÍTULO 16

LA DERECHA ESPAÑOLA HA ROTO CON EL FRANQUISMO

JACOBO LÓPEZ FELIPE

Tras 40 años de ejercicio de poder despótico, la legitimidad de la derecha española se había pulverizado y cargaba con la pesada losa de los legados del franquismo, de difícil negociación. En este contexto, se le abrieron múltiples sendas, que oscilaron entre la fidelidad al régimen y el inicio de una larga y sinuosa marcha de alejamiento del franquismo. Hoy, con la distancia de cinco décadas, ¿se puede afirmar que esta marcha se haya consumado? ¿Qué le queda de Franco a la derecha española?

Como decíamos, durante la transición, la derecha española no actuó en conjunto, sino que tomó sendas distintas. De acuerdo con los estudios al respecto, fue principalmente en la extrema derecha donde anidó el inmovilismo y se mantuvo la lealtad a los valores del régimen. En estas coordenadas, se desarrolló una actitud de oposición furibunda a la democracia que se estaba fraguando, tratando el debate de las nacionalidades en términos apocalípticos y achacando al régimen naciente los males producidos por la crisis económica internacional y la agitación político-laboral de entonces, obviando, no obstante, que ya estaban presentes a finales del franquismo. A pesar de su escaso rédito electoral, la extrema derecha demostró en ocasiones una notable capacidad de movilización durante la

transición, especialmente en las convocatorias del 20-N. En general, los autores explican esta distancia entre el relativo éxito de sus actos de reafirmación y su traducción en las urnas en que, a la hora del voto, muchos de sus asistentes acababan decidiéndose por UCD y AP, lo que redujo su presencia parlamentaria al único escaño que obtuvo Blas Piñar durante una única legislatura (1979-1982), de la mano de una coalición de partidos liderada por su Fuerza Nueva. No cabe olvidar tampoco que el fin de la dictadura, entre otras cosas, supuso el inicio de una nostalgia que fluctuó desde entonces y que, hoy en día, parece estar viviendo cierto resurgimiento.

Es por ello por lo que quizá habría que prestar más atención al enorme éxito editorial de algunos autores de la época, como, por ejemplo, Fernando Vizcaíno Casas. El alcance de sus obras, con títulos como *De camisa vieja a chaqueta nueva* (1976), *...Y al tercer año, resucitó* (1978) —de éxito internacional y con una adaptación portuguesa— o *Las autonomías* (1981), se cifra en casi cuatro millones y medio de ejemplares vendidos. Sin olvidar que las tres fueron llevadas a la gran pantalla por Rafael Gil: la película homónima basada en *...Y al tercer año, resucitó* (1980) fue la más taquillera del año, con más de 1,2 millones de espectadores. Definido por la prensa como un auténtico “fenómeno sociológico”, su éxito ha de ser reseñado especialmente por sus tramas irónicas, la caricatura de los principales personajes políticos de entonces y los clichés que repite constantemente. Novelista por antonomasia de la nostalgia, en sus obras se puede palpar una auténtica añoranza por el franquismo como una especie de arcadia perdida, cifrada en los términos más amables del relato del desarrollismo: paz, orden y progreso.

Esta visión idílica y edulcorante del tardofranquismo contrasta con la descripción que hace de la democracia en desarrollo, que caricaturiza y ridiculiza hasta llevarla al absurdo. Por otro lado, cabe señalar igualmente a Ricardo de la Cierva, historiador orgánico del régimen que, desde 1965, lideró la Sección de Estudios sobre la Guerra de España adscrita al Ministerio de Información y Turismo, y se encargó de reelaborar las interpretaciones franquistas del pasado reciente. Es reseñable la influencia que dispuso en los sucesivos gobiernos de la UCD —como asesor y luego

como ministro de Cultura, durante unos meses, en 1980—, como también su cierta relevancia editorial, siendo uno de los grandes nombres de Planeta en estos años. En la transición y en los primeros años de la democracia hubo, por tanto, una circulación de relatos nostálgicos y legitimistas del franquismo de gran acogida social que podrían haber estado (re)transmitiéndose desde entonces a través de nuevas generaciones de apologetas, como Pío Moa o César Vidal ya en la década de los noventa.

En convivencia con esta tendencia de fidelidad, y en línea con el estado de los estudios actual, hubo en la derecha otra senda larga y no exenta de contradicciones de alejamiento del franquismo, a fin de reconstruir las legitimidades de la derecha española. Durante la transición, una parte de las élites reformistas del franquismo convinieron decirse de centro y, con el apoyo de la Corona y el mando del Estado, navegaron las circunstancias enarbolando la bandera del consenso. En paralelo, los llamados siete magníficos se coaligaban como Alianza Popular. Estas fuerzas fueron las que pugnaron con la oposición franquista durante los debates constitucionales en los que se estaba definiendo la futura democracia. La ruptura jurídica con el franquismo se estaba realizando “de la ley a la ley” a pesar de la oposición del búnker y, tras un largo tira y afloja entre unos y otros, el proceso constituyente dio lugar al Estado de las autonomías: café para todos, nacionalidades e indisoluble unidad de España. Pero la renuncia a los legados de la dictadura iba a revestir una mayor dificultad.

Esa larga transformación de la derecha posfranquista se fue fraguando a la sombra de los sucesivos Gobiernos del PSOE (1982-1996). Su producto, una AP refundada como PP que fue capaz de lograr el apoyo de esa “mayoría natural” sobre la que Manuel Fraga había disertado tanto. La paulatina renuncia al franquismo conllevaba buscar nuevas legitimidades históricas, que la derecha española encontró exhumando el legado del liberalismo conservador de finales del siglo XIX y principios del XX. Antonio Cánovas y la Restauración entraban en escena mientras el dictador era sacado por la puerta de atrás. Hubo incluso una fugaz y muy descontextualizada reconciliación con Manuel Azaña, en unos años donde todo fue posible, hasta “hablar catalán en la intimidad”. Y es que precisamente en los años noventa

encontramos la etapa de mayor distanciamiento entre la derecha española y el legado del franquismo.

El nuevo PP supuso también el —esta vez sí— paso al costado de Fraga en su liderazgo, legando a José María Aznar y su clan de Valladolid una formación unida que ya contaba con estructura y posiciones de poder territorial. De este modo, el exministro, en cuya figura el legado franquista era insoslayable, aunque se mantuvo 15 años presidiendo la Xunta de Galicia, daba paso a una nueva generación de políticos, con un discurso político marcado por un renovado nacionalismo español y por la asunción de los fundamentos del neoliberalismo. La transición se sacralizó y el legado gaditano del doce tuvo cada vez una mayor importancia. Ya en los 2000, la intelectualidad conservadora hizo suyo el concepto de “patriotismo constitucional” y modificó su contenido: su patriotismo, decían, se fundamentaba en los valores, entendidos como cívicos, de la Constitución del 78. El problema de España se había exorcizado, ahora era una nación moderna, democrática y europeizada, auténtica realización del proyecto orteguiano. Era un patriotismo, en fin, racional, frente a los malévolos etnonacionalismos excluyentes: lo que entendían por nacionalismo español, es decir, el franquismo, y los nacionalismos alternativos al español, acusados de perseguir el castellano “igual que Franco, pero al revés” e identificados con el terrorismo.

Había, por tanto, muestras, al menos discursivas, de distanciamiento respecto del franquismo, en una derecha española que, por entonces, se pretendía en el centro político. La dictadura se convirtió en ocasiones en un tropo de lo indeseado, que se hizo servir en la batalla cultural y política contra el adversario. Una pugna, además, muy dura no solo contra los nacionalismos alternativos, sino también contra un PSOE al que se le acumulaban los casos de corrupción y que ya mostraba signos manifiestos de agotamiento tras más de una década de gobiernos. En este sentido, la investigación de los periodistas Jauregui y Menéndez publicada como *Lo que nos queda de Franco* (1995), puede ser muy ilustrativa. Intelectuales de la órbita conservadora, en su libro llaman la atención sobre todos esos aspectos que la España de entonces aún conservaba del franquismo y que, señalan, el

paso del PSOE no había borrado. Estructuras, prácticas o personalidades heredadas de la dictadura que habrían explicado que fuera posible, desde su punto de vista, tramas como la huida de Luis Roldán. También achacaban a los socialistas una detención del poder escasamente democrática, entretejida mediante alianzas con empresas de diversa índole y un control férreo de los medios de comunicación. Tampoco parecía, según los autores, que hubiera una intención de gestionar la memoria del franquismo, sino más bien de obviarlo, señalando el entonces parco interés del PSOE por abordar el *franquismo di pietra*: esa enorme cantidad de monumentos, tanto grandes (como el Valle de Cuelgamuros o el arco de la Victoria en Moncloa) como pequeños (placas, estatuas, cruces...), pero también la persistencia en el nomenclátor de las poblaciones de todo el territorio de personalidades del franquismo y referencias a él.

Cabe aquí hacer una reflexión que es central: había algunos indicios de que la ruptura con los legados del franquismo era posible, aunque no fuera sencilla. La derecha había renovado su discurso político, su relato nacionalista; había desarrollado nuevas legitimidades, se decía democrática, se decía de centro, se decía liberal. Y, aparentemente, se estaba produciendo una vuelta al revés de Franco: en ocasiones era un contrarreferente. Por supuesto, no podemos obviar que la realidad es mucho más compleja y que, en esta, como en tantas otras cuestiones, no existe una linealidad clara y coherente. Por ejemplo, en estos mismos años también se estaba produciendo un rearme del revisionismo histórico del pasado reciente. Hemos hecho alusión a los Pío Moa y los César Vidal que surgen entonces, relevos declarados de la labor de Ricardo de la Cierva. Y su éxito editorial parece encontrarse en la recepción que tuvieron en algunos sectores conservadores de la población, abiertos a esta clase de mensajes. Tampoco la recuperación del liberalismo conservador fue total en la derecha, habiendo, por ejemplo, grupúsculos pequeños en los que persistía el integrismo, que rechazaba de pleno una ideología considerada extranjerizante. Contaban —cuentan— con algunos altavoces nada desdeñables, como Juan Manuel de Prada, quien no es reacio a algunas de las tesis de la historiografía franquista.

En fin, no se trata de una cuestión exenta de contradicciones, pero en estos

años parecían estar gestándose las condiciones que podrían permitir esa ruptura. Llegó 1996 y la derecha recuperó el poder central. El PP, aunque mediatizado por el necesario apoyo de *Convergència i Unió* (CiU), desplegó un programa españolista y neoliberal. La cesión de las competencias en materia de educación y la inmersión lingüística conllevaron la aparición de nuevos mitos de largo recorrido: la supuesta desaparición de la historia de España en las escuelas y el peligro que corría el castellano en las comunidades con lengua propia. En estas circunstancias se puede comprender el empeño en la reforma de las humanidades que encabezó Esperanza Aguirre. Pero mientras los populares marchaban hacia su particular cruzada por la historia, el pasado franquista volvió a rebrotar. En el año 2000, se produjo el *boom* de la llamada memoria histórica, un movimiento surgido en la sociedad civil que exigía la investigación de los crímenes perpetrados por la dictadura y medidas de justicia reparadora. Es entonces cuando se produce un punto de inflexión. Mientras que la izquierda hizo suyas estas reivindicaciones, la derecha cerró filas y atajó su renovación. La cuestión adoptó una dimensión internacional: el dilema estaba servido.

¿Podía realmente el PP acabar de romper con el franquismo? ¿Qué impacto político podría haber tenido una renuncia definitiva? No hay que olvidar que, mientras una parte de la sociedad civil exigía estas medidas de justicia reparadora, había otra parte cuyas simpatías podrían ser otras. Desde entonces hasta hoy, se han negado sistemáticamente a condenar la dictadura enarbolando la bandera del respeto a la transición y a la pluralidad de opiniones sobre el franquismo en la sociedad. Son ampliamente conocidos los argumentos: reducirlo a una mera cuestión de rencores cuyo objetivo sería el de reabrir heridas, tacharlo como un atentado contra la transición, la monarquía y la unidad de España, afirmar que ningún Parlamento tiene derecho a definir lo que piensa el individuo... La cuestión es que las luchas por la memoria histórica cambiaron la dirección de la derecha española. Ciertamente es que, tras negarse sistemáticamente a condenar el franquismo y atender las demandas de justicia, finalmente, presionado, el segundo gabinete de Aznar accedió a pactar una declaración institucional de condena del franquismo. Si bien este fue el episodio de muestra de mayor alejamiento del

conservadurismo español respecto del franquismo, excepcional hasta ahora en su trayectoria, quizá podría reducirse tan solo a un golpe de efecto para tratar de aplacar una cuestión que podría escapársele de las manos.

En cualquier caso, la realidad es que los populares, junto con la totalidad de grupos parlamentarios, un 20 de noviembre de 2002, aprobaron la condena de la dictadura y del golpe de Estado, así como el compromiso del Gobierno —no cumplido— de honrar y promover medidas de justicia reparadora. No obstante, cabe prestar atención al tono, al sentido de los discursos de los parlamentarios del PP que participaron en la jornada. Condena, sí, pero para cerrar definitivamente, para evitar los rencores, desde la teórica concordia que la amnistía de 1977 habría promovido, desde los valores de la Constitución y del espíritu de la transición. Una condena que, a su modo de ver, buscaba cerrar un capítulo y poner fin a la cascada de propuestas en ese sentido que se venían sucediendo.

La condena explícita del franquismo se había producido de forma excepcional en unas circunstancias y bajo unas condiciones que no se pueden perder de vista. De hecho, esta declaración ha servido a los populares como comodín, en futuras ocasiones, cuando la cuestión volvía sobre la mesa. Ya habían condenado la dictadura, no hay motivo alguno para volverlo a hacer. En este sentido, podría hablarse de una oportunidad perdida de ruptura con el franquismo, una ruptura que, habiendo sido posible, no se produjo. En general, la derecha española no ha tenido ánimo alguno por revisar de forma crítica el pasado reciente, negándose reiteradamente a cualquier actuación que siguiera esa línea. Y el carpetazo que pretendieron dar a la cuestión quedó en agua de borrajas, pues la victoria del PSOE en marzo de 2004 desalojó del poder al PP. El nuevo gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero atendió las demandas de justicia reparadora existentes y, tras un largo debate, en 2007 vio la luz la ley de memoria histórica. Enfrente se encontró con una oposición feroz del conservadurismo español encabezada por el PP. Y, en 2008, estalló la crisis. La presión sobre el PSOE no paraba de crecer, por lo que Zapatero decidió adelantar las elecciones al 20 de noviembre de 2011. Su desenlace dio la mayoría absoluta al PP, que recuperó el poder el aniversario de la muerte del dictador. Pero la dureza del discurso

de oposición del PP no correspondió a su labor de gobierno. En materia de memoria, el Gobierno de Rajoy se contentó con ahogar presupuestariamente la ley, en un contexto de grave crisis económica. La falta de dureza del PP no fue bien recibida por los sectores más conservadores de la población y produjo su desafección. La formación conservadora renunciaba, pues, a unos caballos de batalla sobre los que escasos años más tarde Vox cabalgará.

Será precisamente la influencia de la formación de extrema derecha la que haría volver a mover ficha al PP en materia de memoria, pero en ningún caso como vía para romper con el franquismo. Bien al contrario, desde el fulgurante éxito en 2018 de los de Abascal, jalonado por la reacción al clímax de la crisis territorial catalana, Vox ha mediatizado la política española con un discurso cada vez más abiertamente filofranquista —entre otras cosas—. En este sentido, es fácilmente reseñable la postura hostil que el partido tiene hacia la memoria republicana. La visión del pasado republicano que han mostrado desde la formación se sustenta sobre las tesis revisionistas reelaboradas por autores como los ya citados Moa o Vidal, cuyas obras han referenciado y recomendado. Hay pocas dudas de que para Vox habría que buscar el origen de la Guerra Civil en octubre de 1934. Consideran a Calvo Sotelo un mártir y señalan al Estado republicano y al PSOE como los principales responsables de la contienda. Desde estas coordenadas, el golpe de Estado del 18-J es exculpado, al entenderse como un acto de defensa propia. Con este discurso político revisionista, el partido dibuja una suerte de anti-España en la que mezclan pasado y presente para localizar a los enemigos internos esenciales de España: la izquierda y el separatismo.

Esta condena sin paliativos de la Segunda República contrasta con la postura manifiestamente amable respecto del pasado franquista, que ha evolucionado desde la cautela y las reservas a opinar sobre la dictadura a su reivindicación en sede parlamentaria como una “época de progreso y unidad nacional”. Los legados del franquismo parecen estar, por tanto, lejos de haberse extinguido. En cuanto a la legislación en materia de memoria, y especialmente durante los debates respecto de la exhumación del dictador del Valle de Cuelgamuros, el partido extremista ha llevado una política de agitación y contestación que ha impactado en el PP. Retiradas de placas

conmemorativas, restitución de cruces, de nombres de calles y hasta sustitución o derogación de leyes de memoria: donde ha podido, Vox ha arrastrado a un PP muy ambiguo a llevar una política de memoria contrarreformista. Y es que los populares siguen en tierra de nadie, manteniendo su “patriotismo constitucional” sin ser capaces de condenar tajantemente el franquismo. Sus propuestas se quedan a medio camino, absteniéndose frente a la exhumación del dictador o proponiendo “concordia” en lugar de memoria. En paralelo, se multiplican las loas al franquismo y el uso del mito del desarrollismo ya no solo por parte de Vox, también figuras históricas de importancia capital del PP como Esperanza Aguirre se han significado en este sentido, por no hablar de la aparentemente cada vez mayor cantidad de publicística revisionista en libros, en determinados medios de comunicación y en las redes sociales.

En conclusión, 50 años después de la muerte del dictador, en pleno contexto de aparente resurgimiento de la nostalgia por el franquismo y con una tercera fuerza política abiertamente amable con su legado, no parece ser posible afirmar que la derecha haya roto con el franquismo. Es cierto que, desde la transición, una parte de la derecha posfranquista ensayó una larga y sinuosa marcha de alejamiento del franquismo, que la llevó a buscar nuevas legitimidades y rescatar la historia del liberalismo español. Sin embargo, cuando esta ruptura podría haber sido posible, una vez iniciadas las guerras de memoria a principios de siglo, la derecha española cerró filas y zanjó su renovación. Desde entonces, se han negado sistemáticamente a revisar el pasado reciente, tildando cualquier medida en materia de memoria como un atentado contra el espíritu de la transición. Pese a ello, cuando tuvieron la oportunidad de derogar la ley de memoria histórica, el PP solo la ahogó presupuestariamente. Finalmente, el ascenso de Vox ha marcado en no pocas ocasiones el paso de la formación conservadora en materia de memoria, llevándola a aplicar una política contrarreformista.

BIBLIOGRAFÍA

ARCHILÉS, Ferran (2023): “¿La extraña muerte del nacionalismo banal en España (2017-2023)?”, en

- Jorge Cagiao y Gennaro Ferraiuolo (coords.), *Donde menos te lo esperas. El nacionalismo banal español*, Granada, Comares, pp. 43-68.
- BALFOUR, Sebastián y QUIROGA, Alejandro (2007): *España reinventada. Nación e identidad desde la transición*, Barcelona, Península.
- LÓPEZ FELIPE, Jacobo (2022): “El peor Gobierno en 80 años. Vox, franquismo y memoria histórica”, *Saitabi: Revista de la Facultad de Geografía i Història*, nº 72, pp. 111-123.
- NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M. (2018): *Suspiros de España. El nacionalismo español (1808-2018)*, Barcelona, Crítica.
- SAZ, Ismael y ARCHILÉS, Ferran (2011): *Estudios sobre nacionalismo y nación en la España contemporánea*, Valencia, PUV.

CAPÍTULO 17
LA EXTREMA DERECHA ACTUAL.
O EL NACIONALISMO NEGADO

ISMAEL SAZ CAMPOS

Una de las grandes paradojas de las interpretaciones de todo tipo sobre la extrema derecha actual es que parece haber un amplio consenso a la hora de apuntar al nacionalismo como su elemento fundamental, pero, por otra parte, parece haber un “consenso” mayor si cabe en ignorar ese concepto, el de “nacionalismo”, a la hora de titular, de etiquetar, a ese amplio mundo de la propia extrema derecha.

Esta tendencia, común en muchos medios, opera también en el mundo académico. En este último en particular, son muchos los autores que reconocen el carácter central del nacionalismo reaccionario en la extrema derecha, sea esta transnacional o la más doméstica de Vox. Por ejemplo, en el plano más general, Cas Mudde o Enzo Traverso, y en el español, Xavier Casals, Steven Forti o Joan Antón, entre muchos otros. Pero, como decimos, a la hora de referirse al fenómeno, se recurre prácticamente siempre a cualquier otro referente: fascismo, neofascismo, posfascismo, populismo, neopopulismo, derecha radical, derecha radical populista, ultraderecha, etc. A lo sumo, el término “nacional” se introduce en el más amplio concepto de “nacionalpopulismo”. Ejemplar en este sentido es el caso del reconocido gran especialista en la ultraderecha Cas Mudde, el cual tras considerar que el

“populismo” es una ideología tenue, delgada y siempre subordinada a otra — al nacionalismo xenófobo (nativismo) en el caso de la ultraderecha—, no duda en referirse a esta última como “derecha radical populista”.

Antes de profundizar más en estas cuestiones, nos podríamos preguntar acerca del, o de los, por qué, de tan abrumadora paradoja. Desde luego, son varias las posibles respuestas al respecto. Y una de ellas, aunque no siempre suceda así, es la existencia de una compartimentación de las ciencias sociales, lo que en algunos casos da pie a un cierto adanismo conceptual. De este modo, es más frecuente la ignorancia de la centralidad de lo nacionalista entre politólogos y sociólogos que entre historiadores, lo que facilita, en el primer caso, la ignorancia o desdén sobre el lugar de la extrema derecha en el largo periodo. A partir de aquí, se puede tratar a la extrema derecha actual ignorando sus precedentes históricos, sea en “negativo” en la vertiente de la larga historia del nacionalismo reaccionario, sea en “positivo” en las apelaciones a un populismo que, carente también de historia, parecería haberse alumbrado en el presente para, eso sí, dominar el mundo de las interpretaciones.

Alternativamente, suelen ser los historiadores los que tienden a llamar la atención sobre las continuidades nacionalistas entre las viejas y las nuevas extremas derechas. Así, Enzo Traverso se referirá a los fascismos históricos, pero también al nacionalismo de finales del siglo XX; el politólogo e historiador Pierre-André Taguieff recordará que el inefable referente “populista” podría no ser en lo fundamental otra cosa que un sustituto nominativo del viejo y nuevo nacionalismo, y, en fin, Gérard Noiriel llamará a prestar más atención a las décadas finales del siglo XIX, alejándose de las obsesiones y fijaciones en los años treinta del siglo XX. En lo que se refiere al caso español, son pocos los historiadores que ignoran los precedentes “nacionalcatólicos” de la extrema derecha actual.

Desde luego, no es posible ni deseable establecer correlaciones unidireccionales entre los planos de las ciencias sociales y el de los medios de comunicación, creadores de opinión, corrientes políticas, etc. Pero lo cierto es que en este segundo plano las dicotomías que apuntamos son abrumadoras. De este modo, en estos terrenos resulta más fácil y socorrido

recurrir al más que trillado término de “populismo” que a lo que en última instancia constituye el núcleo de la extrema derecha.

Moviéndonos ya en este último plano, se puede considerar la existencia de varias razones, además de la arriba señalada, que contribuirían a explicar esta ignorancia o relegación del nacionalismo. Una de ellas es, desde luego, que existen varios nacionalismos. Entre ellos, por ejemplo, los que se dan en los Estados nación constituidos y los que se configuran en las “naciones sin Estado”. Y no hay que olvidar que son frecuentes los conflictos en torno a las reivindicaciones de las naciones sin Estado. Esta conflictividad explica que en algunas ocasiones se reserva el término “nacionalista” para “el otro” nacionalismo y que en otras se prefiere olvidar la noción misma, precisamente por su carácter conflictivo.

En segundo lugar, y como plasmación en parte de lo anterior, resulta que nadie querría ser identificado como nacionalista, básicamente por las connotaciones negativas que el término ha venido adquiriendo de forma progresiva y al parecer imparable. Tal es así que “lo nacionalista” tiende a equipararse con “lo excluyente”, o lo poco o nada democrático, lo que se contrapone a un “patriotismo” casi siempre connotado positivamente como incluyente, respetuoso con los derechos de todos y, por supuesto, democrático. No vamos a entrar aquí en lo que de impostado tienen estas percepciones, pero si debemos subrayar lo que las diferenciaciones ocultan en términos de legitimación o deslegitimación, de modo que el patriotismo, que sería siempre el propio, sería lo contrario del nacionalismo, que sería siempre el del “otro”. El hecho de que todo esto tenga una base histórica sumamente débil no le resta importancia o incluso eficiencia. Véase, si no, a buena parte de la extrema derecha europea agrupada en el Parlamento Europeo con la denominación no del término de lo que algunos dicen repudiar, el nacionalismo, sino del patriotismo. Son, recordemos, los Patriotas por Europa de Santiago Abascal, Marine Le Pen, Viktor Orbán o Matteo Salvini entre otros.

Más allá de esto, no está de más señalar como una eventual razón para las posibles omisiones lo que podríamos llamar miedo al contagio. Esto es, dado que el nacionalismo de la mayoría de los grupos de extrema derecha es el

propio de los Estados nación constituidos, identificar como nacionalista a la propia extrema derecha podría llevar a “contaminar” en su transversalidad a la derecha convencional y aún más allá. De este modo, es la idea dominante de que el nacionalismo es “malo” en sí la que conduce a la negación de la existencia misma de un nacionalismo francés, español, italiano... Como si de un juego de espejos se tratase, la oclusión del término nacionalismo terminaría por blanquear, por un lado, a la extrema derecha y a hacer, por el otro, de supuesto cortafuegos a las posibles tentaciones en que pudiera caer la derecha convencional.

Esta confusión facilita, consecuentemente, la existencia de eventuales puentes entre la derecha convencional, cuyos perfiles nacionalistas básicamente niega, y la extrema derecha no menos “negacionista” al respecto. De alguna manera, resulta más fácil, y conveniente, referirse a perfiles tales como la xenofobia, el racismo y, cómo no, el populismo, antes que al de un nacionalismo, contaminado o no, pero en buena parte compartido.

Más aún. Si hay desafíos, como en España, al “Estado nación” constituido, el discurso se profundiza y amplifica hasta una banalización poco menos que absoluta: el nacionalismo es esfuma a un lado de la “línea roja”, mientras que, convertido en mal poco menos que absoluto, camparía por sus respetos al otro lado de esa línea. En última instancia, no habría en España más nacionalismos que el catalán, vasco o gallego y, desde luego, no habría jamás un nacionalismo español.

En suma, mentar el nacionalismo español, sea para la extrema derecha, la derecha o buena parte de la izquierda, porque por este lado la transversalidad es casi plena, se convierte en un tabú. Y no falta quien desde estos supuestos infiere que, puesto que el nacionalismo está al otro lado de la línea, también por ahí vendría la ausencia de credenciales democráticas. Y este es un discurso explícito en el caso de Vox, para quien sus credenciales “antinacionalistas” fundamentan tanto su esencia “democrática” como el carácter presuntamente no democrático del nacionalismo alternativo al español. Aunque de un modo a veces más implícito que explícito, esa misma propensión deslegitimadora del nacionalismo alternativo anida entre amplios

sectores, de derecha o no, del nacionalismo español.

Finalmente, hay que apuntar a otra razón a la hora de explicar la difuminación en clave conceptual del término nacionalismo. Y esta no es otra que la de la existencia, como apuntábamos, de diversos nacionalismos, ahora en el plano más historiográfico. Está por supuesto el nacionalismo liberal y democrático de la primera mitad del siglo XIX, demonizado entonces sobre todo por los enemigos del liberalismo. Y están las progresivas derivas, ya en la segunda mitad de ese siglo, hacia un nacionalismo antiliberal y antidemocrático, este sí, reivindicado, cuando no apropiado, por los viejos y nuevos reaccionarios. Pero en este sentido, no debe olvidarse que las derivas fundamentales, si bien no las únicas, de ese nuevo nacionalismo son las que se identificaban con los Estados nación constituidos. No en vano, son estos, y no los alternativos de las naciones sin Estado, los grandes protagonistas de las dos guerras mundiales que cambiaron la faz de la tierra en el siglo XX.

Esa línea divisoria, en sus múltiples derivaciones, se ha proyectado en el tiempo, de modo que podemos hablar de un nacionalismo democrático que hundiría sus raíces en el que fuera hegemónico en la primera mitad del siglo XIX, en el de sectores del republicanismo español, en los movimientos de “liberación nacional” o en el llamado patriotismo constitucional. En este último caso, más en su versión alemana que en sus instrumentalizados hasta la saciedad desarrollos “españoles”.

También con sus múltiples derivaciones se pueden apreciar elementos de continuidad entre los sucesivos nacionalismos antidemocráticos. Particularmente, en el nacionalismo reaccionario cuyos orígenes se localizan en las décadas finales del siglo XIX, que encuentra su más elaborada configuración en los nacionalismos reaccionarios de la primera mitad del siglo XX, que se configura como hegemónico en dictaduras como la franquista o que reemerge en la actualidad en las distintas permutaciones de la extrema derecha.

Hablamos de elementos de continuidad que pueden ser múltiples o haber experimentado sensibles permutaciones, pero vale la pena identificar uno que “no falla”, que se encuentra indefectiblemente en todas las manifestaciones del nacionalismo de este tipo: el odio al gran enemigo, el enemigo del exterior

devenido el gran enemigo interno, el extranjero. Judíos, masones, metecos, ayer; inmigrantes no mejor definidos, musulmanes, hispanos, hoy. Cambian los sujetos incluidos en el enemigo interno-externo, pero la gramática es la misma. Y su objeto también: el extranjero.

Habrà una extrema derecha con rasgos más o menos populistas, con más o menos acentuados perfiles neo- o ultraliberales, con mayores o menores componentes o referentes religiosos, con mayor o menor carga historicista, con discursos de género más o menos reaccionarios, con o sin herencias fascistas. Muchos de estos rasgos podrían conducirnos a la localización de una especie de mínimo común denominador de la extrema derecha, pero en ninguna de estas recomposiciones faltará nunca, como decíamos, ese elemento central: el odio al “extranjero”, del exterior y del interior.

En este último sentido, la experiencia de Vox, lejos de constituir la tan socorrida excepcionalidad española, puede considerarse como un factor que ilumina algunos de los rasgos de la actual extrema derecha transnacional. En efecto, podría decirse que en la tradición reaccionaria española pesaba mucho más el antisemitismo que el antiislamismo; como cabría recordar que el rechazo de “Europa” no congeniaba bien con unos imaginarios que en España la habían contemplado casi siempre como una promesa; sin olvidar, desde luego, que en un país de emigrantes el odio al inmigrante no ocupaba un lugar central ni siquiera en los imaginarios de la derecha. Y, sin embargo, ese camino recorrido por Vox, el que culmina en ese odio al “otro”, al “extranjero”, arroja más luces que sombras sobre lo que constituye el núcleo de la extrema derecha.

Y eso se llama nacionalismo radical y reaccionario. Lo que nos obliga a preguntarnos una vez más, ahora ya también en el plano de las ciencias sociales, acerca de las razones por las que ese reconocido y reconocible elemento central, el nacionalismo, aparece diluido ante nociones que evidentemente lo evocan, aunque sin nombrarlo directamente, como, por ejemplo, la de “nativismo”. No hay, desde luego, una respuesta definitiva a este interrogante, aunque a veces no dejemos de preguntarnos si no habrá algún tipo de reflejo “mágico”, el del miedo a nombrar al “innombrable”.

BIBLIOGRAFÍA

- ANTÓN-MELLÓN, Joan y SEIJO, Ismael (2024): *La nostalgia fascista del futuro*, Barcelona, Icaria.
- CASALS, Xavier (2020): “De Fuerza Nueva a Vox: de la vieja a la nueva ultraderecha española”, *Ayer*, n° 118, pp. 365-380.
- FORTI, Steven (2021): *Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla*, Madrid, Siglo XXI.
- MUDDE, Cas (2021): *La ultraderecha hoy*, Barcelona, Paidós.
- SAZ, Ismael y ARCHILÉS, Ferran (2011): *Estudios sobre nacionalismo y nación en la España contemporánea*, Zaragoza, PUZ.
- TAGUIEFF, Pierre-André (2015): *La revanche du nationalisme. Néopopulistes et xénophobes à l’assaut de l’Europe*, París, PUF.
- TRAVERSO, Enzo (2021): *Las nuevas caras de la derecha*, Madrid, Siglo XXI.

QUINTA PARTE

**LAS MIGRACIONES:
PASADO Y PRESENTE**

CAPÍTULO 18

CONTRA LOS MITOS SOBRE LAS MIGRACIONES INTERIORES DEL FRANQUISMO

MIGUEL DÍAZ SÁNCHEZ

Es una idea extendida, incluso entre las propias personas migrantes, excluir de esta categoría a los individuos que se instalan en un lugar distinto al que nacieron dentro del propio país, sobre todo entre aquellos que interiorizan una potente identidad nacional que, en el caso concreto de España, se asimila a la emanada por el nacionalismo español. Las acepciones de los verbos emigrar, inmigrar y migrar, presentes en el diccionario de la Real Academia Española, evidencian que esa interpretación es errónea, mostrando que no es preciso abandonar un país para que una persona pueda ser categorizada como emigrante, inmigrante o migrante.

De igual modo, los desplazamientos internos también suelen ser considerados y amparados en una libertad intrínseca a la ciudadanía otorgada por un determinado Estado. Esta creencia tiene una consistencia mayor que la señalada anteriormente, ya que, por norma general, el Estado español ha sido escasamente intervencionista en la gobernanza de su migración interior, aunque es cierto y conocido que la confrontación política no ha estado ausente a la hora de definir la concreción de esta característica, sobre todo entre la Administración central del Estado y las distintas sensibilidades y poderes periféricos que lo conforman.

Otra afirmación extendida en la sociedad es periodizar el inicio del proceso migratorio interno en los prolegómenos del denominado desarrollismo franquista, hacia el final de la década de 1950. Esta creencia desatiende los incontables trabajos que desde la demografía histórica y la historia urbana han mostrado una expresión importante de las migraciones interiores desde finales del siglo XIX. Tampoco la historiografía más reciente que ha analizado los años de la guerra y su consecuente posguerra ha logrado reconfigurar esta creencia popular que, bien es cierto, ha contado con una potente apoyatura narrativa que se remonta a los tiempos de la dictadura franquista y que aún hoy podemos ver reflejada en incontables medios de expresión cultural, tal y como hemos podido observar recientemente en la promoción desplegada para el filme *El 47*, dirigido por Marcel Barrena y galardonado como mejor película de 2024 por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Es sobradamente conocido que, dentro del gradual proceso de urbanización e industrialización español, las migraciones internas comenzaron a tener importancia a mediados del siglo XIX. Fueron emigraciones rurales que se dirigieron por norma general a las capitales provinciales más cercanas, adquiriendo en algunos casos un carácter interprovincial, sobre todo en las vinculadas a la actividad minera. A finales de la centuria y durante el primer tercio del siglo XX, comenzaron a prefigurarse los tres grandes territorios de inmigración interna del siglo XX: Madrid, Barcelona y el País Vasco. Estos tres territorios recibieron una inmigración originada en sus regiones más cercanas. En el caso barcelonés —el más importante de estos años—, la inmigración procedió mayoritariamente de la propia Cataluña, Aragón, la región valenciana y, ya en la década del veinte, se expandió a territorios más lejanos y no fronterizos con Cataluña, como Murcia y Almería, abarcando de este modo la totalidad del tercio oriental de la península, curiosamente, un ámbito territorial que años más tarde conformaría gran parte de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil.

Como señalaba anteriormente, durante aquellos años no intervino ninguna restricción por parte del Estado, salvo aquella vinculada o destinada a

reprimir la mendicidad en las grandes ciudades. Sin embargo, durante estos años comenzaron a conformarse discursos que establecieron una relación entre la pobreza y la inmigración que sazonaron la interpretación de esta última con una potente retórica aporofóbica que tendrá su máxima expresión y concreción durante el primer franquismo. Desde principios del siglo XX, podemos atender lecturas de ensayos que consideraron factible la deportación de inmigrantes en las grandes ciudades, siendo el ejemplo más llamativo el realizado por Julio Montesinos en *El problema de la mendicidad en los grandes centros de población* (1909). Sin embargo, España, por su carácter exclusivamente emigratorio, pudo escapar durante estos años de la lógica restrictiva de la migración interior aplicada en otros países, cuyo fin fue facilitar el control social absoluto de las poblaciones de origen extranjero residentes bajo sus jurisdicciones. Como es sabido, esta dinámica fue producto del sistema internacional de Estados constituidos de manera mutuamente excluyente que venía articulándose en Europa desde principios del siglo XX, teniendo su máxima expresión en los años de la Gran Guerra y su inmediata posguerra, cuando una multitud de nuevos Estados surgidos tras el conflicto debió afrontar una crisis de refugiados sin antecedentes en el continente.

Las consecuencias de la crisis económica internacional de 1929 acentuaron las dinámicas restrictivas en todo el planeta. Las limitaciones a la emigración interna y a la inmigración exterior hicieron acto de presencia en Estados regentados por regímenes políticos de diversa índole, incluidas varias democracias como la estadounidense, tal y como nos evidenció John Steinbeck en sus relatos sobre la inmigración californiana procedente del medio oeste del país, recopilados por los Libros del Asteroide en 2007 bajo el título *Los vagabundos de la cosecha*.

En España esta coyuntura de crisis configuró la primera acción legislativa que materializó postulados restrictivos a la migración interior en el ordenamiento jurídico. Atrás quedaban los años de relativa bonanza económica del periodo primorriverista, propiciados por una fuerte inversión en obra pública que posibilitó el mayor desplazamiento interno de población constatado en España hasta ese momento. Como es sabido, las consecuencias

de la crisis económica debieron ser gestionadas por los distintos Gobiernos de la Segunda República y se tradujeron en un importante incremento del paro y de la conflictividad social, entre otras cuestiones menos conocidas o consideradas como el retorno —o la repatriación forzada— de cientos de miles de españoles emigrados al exterior durante las décadas anteriores, a los que fue preciso atender socialmente debido a la vulnerabilidad que adquirieron tras el fracaso de su experiencia migratoria, especialmente en América y Francia. La respuesta gubernamental a estas problemáticas fue la promulgación de la ley de vagos y maleantes —durante el bienio republicano socialista— y su posterior reglamento —durante el bienio radical cedista—, el cual otorgó ciertos matices a la ley adecuados para su aplicación en términos de represión política. Pero al contrario que sucederá en la época franquista, el ordenamiento jurídico republicano no contempló en ninguna de sus normativas la restricción general a la emigración interior, incluido el decreto de términos municipales emitido por el Ministerio de Trabajo en abril de 1931. Por su parte, la ley de vagos y maleantes únicamente contempló la posibilidad de que la autoridad judicial pudiera ordenar la expulsión, el destierro o el confinamiento de individuos en determinados territorios, por lo que no podemos considerarla como una normativa plenamente restrictiva de la emigración en términos generales.

Por otra parte, la contienda electoral desplegada dentro del ordenamiento democrático republicano también asimiló la utilización de la inmigración interna como un elemento discursivo adecuado para aumentar las adhesiones políticas. En este aspecto, José Luis Oyón, o, más recientemente, Andreu Domingo, han mostrado como en Cataluña el sector catalanista más conservador y reaccionario, incluido el republicano, reclamó la gestión autonómica del orden público utilizando la inmigración en unos términos profusamente esencialistas que, en algunos casos, pueden ser calificados de aporofóbicos y xenófobos sin excesivas reticencias, tal y como evidenció el enfrentamiento que mantuvieron con los últimos resortes del lerrouxismo barcelonés o el propiciado por el periodista Carles Sentís con buena parte de la colonia murciana inmigrada en la capital catalana.

Por su parte, el periodo de la Guerra Civil ha sido uno de los menos

atendidos por parte de la historiografía, ya que tan solo se ha centrado en analizar los aspectos relacionados con los desplazamientos forzados de personas dentro y fuera de las fronteras españolas. José Antonio Ortega y Javier Silvestre ya advirtieron de este hecho en el único estudio específico que sobre este periodo se ha llevado a cabo hasta el momento. Además, dichos autores indicaron una serie de cuestiones que no debían demorarse más en su tratamiento analítico, especialmente la relacionada con la movilidad interior adscrita al ámbito laboral, a la que podríamos añadir también la necesidad de acometer un estudio específico sobre los refugiados acogidos en la retaguardia sublevada. En este último sentido, otro aspecto necesario de indagar en el estudio de estos años es la influencia que pudieron tener los refugiados acogidos bajo la égida republicana en el despliegue de las migraciones que desembocaron en las principales ciudades de su retaguardia durante el periodo posbélico. Esta propuesta es sostenible, porque contamos con numerosa documentación que evidencia como, a pesar de las constantes amenazas trasladadas a esta población refugiada para que volviera a sus localidades de origen una vez terminado el conflicto, buena parte de estos contingentes no retornaron a sus residencias habituales para evitar una más que probable depuración en unos contextos donde podían ser señalados con mayor facilidad y, si lo hicieron, en muchos casos retornaron a los lugares donde sobrellevaron la guerra como refugiados a los pocos meses.

Adentrándonos en la posguerra, son cuantiosas las obras editadas en los últimos años que han volcado su atención en desarticular ciertos mitos contruidos por el revisionismo histórico franquista. Sin embargo, algunos de los mitos existentes en torno a las migraciones interiores no han sido atendidos en estos trabajos, impidiendo el conocimiento social de los mecanismos orquestados por la dictadura para restringir las migraciones interiores durante nuestra posguerra. Estos ejercicios desatienden investigaciones desarrolladas en los últimos años que han podido evidenciar cómo el nuevo Estado franquista interpretó los desplazamientos internos de población como un factor de desorden social para la correcta implantación de su proyecto político (eliminación y control de la disidencia política), económico (autarquía) y social (antiliberal y antimarxista sustentado en los

valores tradicionales del agro), y cómo implantó mecanismos de control social de carácter totalitario para intentar atajarlos.

Es relativamente desconocido entre nuestra sociedad que el régimen franquista restringió, en mayor o menor grado, la libertad de movimiento de sus ciudadanos durante cerca de dos décadas (1939-1957). Esta coyuntura restrictiva ha quedado sepultada en la memoria popular como tantas otras cuestiones vinculadas al periodo autárquico —hambrunas, salarios míseros, proliferación de enfermedades condicionadas por la precariedad reinante, etc.—, conllevando la imposición de un sustento narrativo muy potente que estableció, ya en tiempos de la propia dictadura, que los ciudadanos españoles pudieran desplazarse o emigrar en libertad dentro y fuera de sus fronteras durante los casi 40 años de su existencia.

El régimen franquista aplicó durante los años de la posguerra una “inmovilidad forzada”, contraviniendo sus propias Leyes Fundamentales: artículo 14 del Fuero de los Españoles. Impuso a sus propios ciudadanos migrantes lógicas restrictivas burocrático-administrativas relacionadas con el trabajo, la vivienda y el abastecimiento alimentario, que, en muchos aspectos, mimetizan las restricciones aplicadas actualmente a la inmigración internacional. Una de ellas fue la imposición de un salvoconducto de movilidad de marcada impronta política, ya que para ser concedido era preciso contar con un informe político-social favorable de las autoridades gubernativas de la provincia de residencia y, en última instancia, de la propia Dirección General de Seguridad. Este pasaporte interno estuvo vigente hasta 1948 para poder desplazarse entre las distintas provincias españolas y hasta 1942 para poder, incluso, desplazarse entre municipios ubicados dentro de las mismas, imponiendo con ello más de 8.000 fronteras internas durante los primeros compases de la posguerra.

Durante estos años, el régimen franquista también implementó una normativa restrictiva para dificultar el asentamiento de las personas migrantes en las grandes ciudades. Impuso normativas que dificultaron conseguir un trabajo legal en un municipio ajeno al de residencia, prohibiendo a los trabajadores y trabajadoras tramitar una tarjeta profesional en los lugares donde no estaban censados; también prohibió extender las

cartillas de racionamiento alimentario a las personas desplazadas y, finalmente, decretó una política de exención de alquileres en favor de los residentes anteriores a la guerra, que impidió a los migrantes de la posguerra competir en igualdad de condiciones dentro de este mercado y empujó a cientos de miles de personas hacia el chabolismo en las principales urbes del país.

Sin embargo, esta gobernanza migratoria tan restrictiva no logró evitar que durante los años cuarenta aconteciera el proceso migratorio interno más importante constatado hasta ese momento. No obstante, ocasionó la constitución de enormes bolsas de marginalidad y vulnerabilidad entre las personas migrantes, sobre todo entre aquellas que carecían de apoyos familiares o de paisanaje en las grandes ciudades. Fue sobre estas personas hacia donde el régimen dirigió los preceptos más contundentes de su política migratoria, contabilizando miles de deportaciones en ciudades como Valencia, Sevilla, Barcelona o Madrid, donde Octaviano Alonso de Celis, máximo responsable de los servicios municipales para la represión de la mendicidad, se jactó de la “detención de 7.638 mendigos en la vía pública durante el año de 1944, siendo 2.479 reintegrados en sus localidades de origen al carecer de derechos adquiridos para residir en la ciudad” (*ABC*, 26 de enero de 1945, p. 12). En Sevilla, una comunicación de la delegación provincial de Falange emitida a finales de 1940 reconoció la “evacuación de unos 12.000 indigentes” desde la capital provincial hacia sus respectivas provincias de residencia. Por su parte, en Valencia, fueron 3.382 las “repatriaciones” ejecutadas por su Gobierno civil durante 1944, siendo 1.428 de ellas de carácter forzado.

En Barcelona fueron varias las órdenes circulares emitidas por el Gobierno civil para implementar esta política, vigente hasta el primer trimestre de 1957. En colaboración con el ayuntamiento de la capital catalana, dicha institución volcó un considerable volumen de recursos en este sentido, legándonos un importante fondo documental para poder reconstruir el proceso represivo de las migraciones durante los años cuarenta y cincuenta. Esta documentación evidencia como decenas de miles de personas transitaron por este entramado represivo durante el denominado primer franquismo: unas

70.000 personas entre 1945 y 1957. Especialmente relevante fue el bienio 1945-1946, donde el Gobierno civil comandado por Bartolomé Barba reconoció la ejecución de unas 50.000 “repatriaciones”. La propia propaganda gubernativa se jactó de esta circunstancia con un discurso fuertemente caracterizado por la aporofobia y la criminalización del hecho migratorio. Un ejemplo en este sentido nos lo proporcionó José Esteban Vilaró en un recopilatorio de artículos que previamente había escrito para el semanario *Destino*, el cual tituló *Un mundo insospechado en Barcelona* (1945). La lectura de este relato, patrocinado por el Ayuntamiento de Barcelona, constituye un valioso elemento para constatar como los discursos antinmigración imperantes en aquellos años contra los propios españoles entroncan sin demasiada dificultad con los esgrimidos en la actualidad por los grupos de carácter ultra en relación a la inmigración internacional. Mensajes incriminatorios que señalaron al “mangante de oficio” como originario de las “provincias pobres del Levante español” y constituyente del “95% del censo mendicante de Barcelona” nos permiten observar como los hilos de continuidad argumentativa no atienden a cuestiones exclusivamente etnocentristas, sino más bien a cuestiones de clase, tal y como nos advirtió Adela Cortina en su imprescindible ensayo sobre la aporofobia. Por ello es preciso prevenirnos frente a los que se erigen como guardianes de una supuesta esencialidad española a la hora de interiorizar el hecho migratorio, ya que tal y como nos muestra el pasado, estos grupos políticos no dudarán en aplicar sus discriminaciones de clase para sustentar su proyecto político si llegan a alcanzar el poder, tal y como nos evidencian los continuos ataques que realizan a la doctrina social presente en nuestra Constitución, la cual es esencial para poder desplegar un verdadero desarrollo personal y humano fundamentado en una auténtica libertad.

BIBLIOGRAFÍA

- DÍAZ SÁNCHEZ, Miguel (2024): *Fronteras de papel. Franquismo y migración interior en la posguerra española (1939-1957)*, Valencia, PUV.
- DOMINGO, Andreu (2014): *Catalunya al mirall de la immigració. Demografia i identitat nacional*, Barcelona, L'Avenç.

- MARÍN, Martí (dir.) (2009): *Memòries del viatge*, Sant Adrià de Besòs, MHIC/Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
- ORTEGA, José Antonio y SILVESTRE, Javier (2006): “Las consecuencias demográficas”, en Pablo Martín y Elena Martínez (eds.), *La economía de la Guerra Civil*, Madrid, Marcial Pons, pp. 53-105.
- OYÓN, José Luis (2008): *La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914-1936*, Barcelona, Ediciones del Serbal.
- PALLOL TRIGUEROS, Rubén y GARCÍA ABAD, Rocío (eds.) (2017): *Inmigrantes en la ciudad. Dinámicas demográficas, mercados de trabajo y desarrollo urbano en la España contemporánea*, Bilbao, Universidad del País Vasco.
- PUIG VALLS, Angelina y ORTEGA LÓPEZ, Teresa María (2020): *Andalucía y Cataluña: dictadura y emigración*, Barcelona, Bellaterra.

CAPÍTULO 19

CON LOS PAPELES EN REGLA, POCAS MUJERES Y SOLO POR MOTIVOS ECONÓMICOS

BÁRBARA ORTUÑO MARTÍNEZ

Con los papeles en regla, pocas mujeres y solo por razones económicas son tres de los tópicos más extendidos sobre la emigración española al extranjero durante el franquismo. El ascenso de la ultraderecha a lo largo y ancho del planeta ha convertido —una vez más— a las personas desplazadas en el “blanco” predilecto para canalizar, y por tanto culpabilizar de, todos los supuestos males que afectan a las sociedades. Como señalaba Zygmunt Bauman para el caso europeo, las llamadas crisis migratorias “presagian el desmoronamiento y la desaparición del modo de vida que conocemos, practicamos y apreciamos”. De ahí que en los países del norte global se estén aplicando unas leyes cada vez más restrictivas, con un claro carácter punitivo, para todas las personas desplazadas, migrantes y refugiadas. En Estados Unidos, tras el ascenso de Donald Trump, en menos de dos semanas se han puesto en marcha “redadas” —el término habla por sí solo— en importantes centros metropolitanos para detener a miles de personas, en su mayoría de origen latino, supuestamente indocumentadas, que han sido tachadas de “criminales”. Deportaciones, militarización y externalización de las fronteras en el sur..., en definitiva, cuestiones familiares —aunque no se aireen tanto— para una Europa fortaleza, con unos muros cada vez más altos,

firme en sus deseos de frenar “los flujos migratorios irregulares”.

Por el lado español, continúan en activo siete centros de internamiento de extranjeros (CIE), que han demostrado tener una escasa eficacia de acuerdo al objetivo legal para el que fueron creados: la deportación de las personas migrantes en situación irregular —de nuevo la “irregularidad”— a sus países de origen. Según el informe *CIEs: Espacios sin derechos para migrantes*, elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el 50% fue repatriado y el resto puesto en libertad. En definitiva, las organizaciones sociales han constatado que la utilización de medidas privativas de libertad en el ámbito de la gestión migratoria se ha agravado en los últimos años. Nos encontramos ante un contexto que tiende a desarrollar políticas legislativas que denominan de “crimigración”, particularmente dolorosas para los y las menores no acompañadas (niños y niñas, jóvenes, preadolescentes...), que en numerosos casos también acaban en estos centros de internamiento. Sin embargo, estas cuestiones pocas veces captan la atención de los medios de información, que cada cierto tiempo se interesan por debatir el número de menores que debe acoger cada comunidad autónoma o por la cantidad de “pateras” que llegan a Canarias, especialmente si hay una cifra resaltable de personas fallecidas: según la ONG Caminando Fronteras, España presentó un promedio de 30 muertes diarias en 2024 entre las personas migrantes que trataron de arribar a sus costas, en su mayoría, desde el continente africano.

Porque todos los días llegan personas en busca de un futuro mejor, con o sin papeles. En nuestra vida cotidiana ya están incorporadas las madres de los compañeros y compañeras del colegio de nuestras hijas e hijos, que hace años vinieron de Colombia, del Sáhara o de Senegal, pero nunca han tenido papeles, porque para eso hay que tener un trabajo, mas si no tienen trabajo no pueden tener papeles: las cocineras del bar de enfrente, segunda o tercera generación de inmigrantes marroquíes, que hacen una pastela maravillosa y un tayín delicioso, o las argentinas, mexicanas, venezolanas, bolivianas..., que están limpiando nuestras casas y cuidando a nuestros padres o abuelas. De hecho, si las mujeres que sostienen la red de cuidados en este país, en su gran mayoría migrantes, se pusieran en huelga, ahí sí que comprobaríamos cómo se desmorona y desaparece el “modo de vida que conocemos,

practicamos y apreciamos...”. Aunque esto no parece importar, la única cuestión denunciabile para la burocracia de turno es que estas personas “no tienen papeles”. Esta cuestión, desde nuestro punto de vista, lo único que hace es fomentar numerosos prejuicios, miedos y odios de fondo, que son la piedra angular de los discursos antimigratorios, xenófobos, clasistas, aporofóbicos y machistas que recorren el mundo y que han calado hondo en el Estado español.

En este país, que parece vivir una amnesia colectiva sobre su pasado emigrante —y su composición mestiza y cosmopolita—, se ignora que desde finales del siglo XIX millones de personas tuvieron que salir al exterior en busca de un futuro mejor, cuando no para salvaguardar su vida. De hecho, al periodo comprendido entre 1890 y 1930, que tuvo como principales destinos Argentina, Cuba, Brasil o Argelia, dentro de los estudios migratorios, se lo conoce como la etapa de emigración masiva. Solo tras las crisis del 29, que llevó consigo un cierre de fronteras en los países de recepción, y el periodo de la Segunda República española, durante el cual la población experimentó ciertas mejoras en términos económicos, políticos, sociales y culturales, la salida de población hacia el exterior se redujo. Pero tras el golpe de Estado fallido en julio de 1936, que tuvo como consecuencia una guerra civil y la implantación de la dictadura franquista, la población española se vio de nuevo abocada a una migración forzosa. De hecho, hasta comienzos de la década de 1970 España fue un país expulsor de población, en definitiva, un país de emigrantes.

No obstante, un tópico inserto en los discursos e imaginarios cotidianos, cuando alguien tiene a bien recordar “nuestro” pasado emigrante, es que “los españoles emigraron con papeles”, es decir, de una forma regulada, sobre todo durante los años del franquismo. En palabras de Santiago Abascal (Vox), “los españoles tuvieron que emigrar, iban legalmente, con papeles, a trabajar, respetando las leyes”. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que nada más lejos de la realidad y que, como siempre sucede, cuando la necesidad aprieta, el ingenio se agudiza. Por ejemplo, si nos fijamos en Argentina, país donde durante los años treinta del siglo pasado vivía la comunidad española más abultada fuera de España (la cual, por cierto, hizo posible que se

convirtiera en el segundo destino de recepción más importante del exilio republicano en el continente americano, después de México), comprobamos que esto de que “los españoles emigraron con papeles” (del masculino de la frase se desprende, además, su composición) y que se fueron “a trabajar, respetando las leyes”, es un lugar común. También es un lugar común que no tiene validez científica ni para la Argentina de Perón, el único mandatario que firmó convenios migratorios con Franco durante la posguerra, ni para la Europa de los años sesenta, tal y como a continuación veremos.

En la actualidad, se estima en más de 10.000 personas la cifra del exilio republicano español en Argentina, que contempla el denominado exilio tardío, es decir, el colectivo formado por quienes camuflados en “emigrantes económicos” lograron huir de Europa y de España tras el restablecimiento de los cauces migratorios oficiales con la firma de los acuerdos entre Franco y Perón a partir de 1946. Hombres, mujeres, personas mayores, niños y niñas que en su mayoría debió encarar de manera individual, al margen de las políticas estatales, por lo general desde el marco de la ilegalidad, el desplazamiento y la instalación. Las cadenas migratorias volvieron a funcionar y para ello fue determinante la antigua comunidad española asentada en el país austral. Las autoridades argentinas sancionaron los decretos más severos en materia inmigratoria en 1938; de todos ellos, tuvo una clara repercusión negativa para la entrada del exilio la imposición de poseer un permiso de libre desembarco, cuya tramitación y autorización llevaban consigo un farragoso proceso administrativo, al que se unían las dificultades para poseer un contrato de trabajo, los certificados de buena conducta, no mendicidad y buena salud, así como un visado de entrada. ¿Cómo va a poseer toda esta documentación una persona que ha tenido que salir corriendo de su casa en medio de una guerra?

Pues hubo que buscar otras estrategias. Una muy común entre quienes no tenían familiares en Argentina o carecían de la documentación necesaria, y además poseían recursos económicos para pagar un billete de barco en primera clase, fue ingresar como turistas. Así lo hicieron el filósofo José Ortega y Gasset y su familia o el penalista Luis Jiménez de Asúa junto con su esposa María Rubio y Amelia Jiménez de Asúa, la niña que figura como

“hija” de ambos, a pesar de que es sabido que el matrimonio no tuvo descendencia. Otra forma de ingreso fue presentar un visado en tránsito a otros países —algunos podían conseguirse “a buen precio” en algunos cafés parisinos y a través de los propios cónsules en Europa— y aprovechar la escala en el puerto de Buenos Aires para quedarse, tal y como hicieron la escritora María Teresa León y el poeta Rafael Alberti. Claro, para ello debían dejar su pasaporte en la aduana..., cuestión por la cual permanecieron 23 años indocumentados. Otra práctica bastante extendida fue la de embarcarse con la documentación de otra persona, como hizo Vicente Ayala, hermano del escritor Francisco Ayala, quien, por cierto, entró en Argentina en coche desde Chile por el puesto fronterizo de Mendoza. Pero la gran mayoría lo logró a través de las cartas de llamada de familiares, paisanos, paisanas y amistades, mecanismo que, por su parte, tampoco estuvo exento de irregularidades. Como indicaba en una carta, interceptada por las autoridades policiales porteñas, el cuñado de dos hermanos vascos que llegaron a Argentina a mediados de 1939 haciéndose pasar por dos agricultores portugueses: “Por la documentación os enteraréis del simulacro de contrato que he tenido que hacer para que os dejen entrar en este País [sic], así que a cualquiera que os pregunte en cualquier lugar, tenéis que decirle como consta en este documento. Ya podéis hacer todo en forma de que no se entere nadie”.

A partir de mediados de los años cuarenta, una vez firmados los acuerdos migratorios entre Franco y Perón, la situación no varió demasiado en este sentido. Si bien es cierto que se reabrieron los cauces regulares, es decir, a partir de 1946, de nuevo se podía emigrar desde España de manera legal (según la Ley de 1924), el proceso se desarrolló en gran medida al margen de las políticas gubernamentales. Una vez más, la documentación solicitada a quienes deseaban o se vieron obligados y obligadas a emigrar fue numerosa y de obtención compleja, pero como también sabemos eso no importó. Como señalaba Isabel Ríos, quien tras siete años en prisión logró “emigrar” a Argentina en 1947: “Nos fuimos obligados por la necesidad de buscar un lugar donde poder vivir, para no morir en la cárcel o de una paliza de los comisarios, para ser tratados como seres humanos; [...] para mantener un

resto de dignidad, pues hasta de eso quisieron despojarnos”.

Lola (cuyo apellido no se ha conservado) huyó de Galicia a Buenos Aires en 1946, al cumplir los 18 años, edad apalabrada por su padre para casarla con un vecino de su aldea, “para alejarme de ese destino bruto de cuidar animales o convertirme en una mujer como mi madre, siempre pariendo hijos y dando de mamar”. Por su parte, María del Carmen Somoza, que emigró siendo una niña junto a su madre, que había quedado viuda a la edad de 28 años y sin ninguna expectativa de rehacer su vida, tiene clarísimo que además de que “no teníamos para comer [...], cuando mi mamá viene a la Argentina, venimos por esa necesidad de la libertad”. Como es sabido, la dictadura franquista desmanteló los principios democráticos de la Segunda República tendentes a una mayor igualdad de género y condenó a las mujeres a una posición subordinada caracterizada por la sumisión a los padres y maridos, cuya autoridad se vio reforzada. De esta manera, con el objetivo de recluirlas en el espacio doméstico, se eliminaron los avances educativos del periodo republicano.

En líneas generales, se las obligó desde niñas a una educación precaria basada en el aprendizaje de las reglas elementales y las tareas del hogar, siempre bajo los dictámenes de la Iglesia católica. Y se tomaron una serie de medidas como la limitación de las profesiones a las que podían acceder o la prohibición del trabajo asalariado a las mujeres casadas que no fueran cabeza de familia, entre otras. Según la doctrina del régimen, el único deber de las mujeres debía ser formar familias, lo cual negaba por completo sus derechos individuales. Por supuesto, el aborto fue considerado un crimen de estado y se prohibió y penalizó la venta de anticonceptivos. Las mujeres debían convertirse en ejemplares esposas y educadoras cristianas de sus criaturas, aprehendiendo las supuestas virtudes que las caracterizaban, es decir, la abnegación, la sumisión, la carencia de aspiración al espacio público y el deseo de maternidad dentro del matrimonio. Desde luego, las condiciones sociales del franquismo condenaron a la mayoría a una existencia amarga que, aunque no derivó en un movimiento consolidado de resistencia, obtuvo como respuesta la elaboración de ciertas estrategias individuales que sirvieron para superar la situación impuesta. Y entre ellas destacó la

emigración; de hecho, durante el periodo de posguerra, la emigración de las mujeres fue mucho más elevada que en la primera mitad del siglo XX. En total, las españolas representaron el 43,5% del total de los desplazamientos a Argentina durante el periodo comprendido entre 1946 y 1956.

Por diferentes motivos, los países latinoamericanos fueron sustituidos de manera progresiva por los europeos como destino predilecto de la población española para emigrar. Y una vez más, y a pesar de que las autoridades franquistas quisieron canalizar las salidas de población a través del Instituto Español de Emigración, creado precisamente en 1956, la mitad de quienes se desplazaron hacia Suiza, Alemania, Bélgica o Francia, tal y como señalaron Ana Fernández Asperilla y José Babiano, lo hicieron sin papeles. Los y las inmigrantes españolas, que presentaron unos altos porcentajes de analfabetismo, fueron percibidas por la población autóctona con prejuicios y actitudes xenófobas idénticas a las de quienes hoy denuncian la inmigración “ilegal” en España. De hecho, en la prensa del momento era común leer que esos inmigrantes de tez oscura —que era como se divisaba a la población de países como España o Italia— eran peligrosos, sucios, gritones, malolientes... El libro de Filgueira *Los emigrantes* (1975), da buena cuenta de la xenofobia presente en la sociedad suiza de los años setenta, donde, además de ser una vergüenza para la población autóctona, como relatan numerosos testimonios, relacionarse con la población española o italiana, trataron incluso de votar referéndums para expulsar a los extranjeros y extranjeras, y se implementaron medidas para impedir y penalizar, llegado el caso, los embarazos de las españolas, a quienes les gustaba hacer saber que no habían llegado al país alpino para reproducirse.

La agricultura, la construcción o el servicio doméstico puso de manifiesto el carácter del empleo “no cualificado” que ocupó el colectivo migrante español. El trabajo “irregular”, además, fue determinante en el caso de las mujeres, quienes se desempeñaron durante años como empleadas domésticas, limpiadoras o vendimiadoras, e igual que sus congéneres que se quedaron en la península, en buena parte dedicadas a “la economía sumergida”, con especial incidencia en las áreas del Levante, donde no pudieron acceder a sus cotizaciones sociales y, por tanto, a una jubilación. Durante años las

españolas vivieron en minúsculas buhardillas de elegantes edificios en París, donde trabajaban como “chachas” o “niñeras” en las porterías de los edificios junto a su prole, así como en moteles miserables; sobre todo, en el caso de los hombres, en chabolas o *bidonvilles* de los suburbios obreros de los países europeos de destino. Estas cuestiones se abordan de manera magistral en el documental dirigido por Marta Arribas y Ana Pérez *El tren de la memoria* (2005). En esta fuente audiovisual quedan plasmadas las memorias de tantas mujeres como Josefina, Marina o Virginia que durante los años sesenta se vieron obligadas a marcharse, en palabras de Goytisolo, a la cercana pero culturalmente remota Europa. Poniendo el foco en el destino alemán, sus protagonistas rememoran las condiciones penosas de su emigración, las fábricas donde trabajaron a destajo o los gélidos barracones donde fueron alojadas, hoy abandonados o convertidos en cobertizos para animales. Sus testimonios dan voz a las luchas por los derechos de las personas migrantes, a los problemas de adaptación que experimentaron, a las nostalgias, al desarraigo, a la vergüenza, a la dignidad, a los desprecios de la población autóctona, cuestiones que, además, tuvieron que ocultar durante años y que la dictadura franquista, a través de sus aparatos de propaganda, trató de camuflar.

En definitiva, a través de estas líneas hemos querido contribuir a desmontar algunos de los mitos vigentes sobre la emigración española al exterior durante el franquismo. Mitos, lugares comunes y, a fin de cuentas, mentiras que se han perpetuado en el tiempo y continúan dando lugar a argumentaciones falaces pero muy eficaces para quienes no cesan en su empeño de cerrar fronteras a toda costa. Los exilios y las migraciones son piezas indispensables para conocer la historia de la humanidad, muy en particular la historia del siglo XX. Pero además de desmontar los mitos, consideramos necesario que los avances efectuados en la historia “académica” permeen la historia escolar contribuyendo a desarrollar una empatía histórica. Necesitamos que los niños, las niñas y la gente joven se sientan identificados e identificadas con las personas migrantes para entender la sociedad en la que viven, para dejar de mirar “al otro” desde la indiferencia, cuando no desde el odio. Si queremos un futuro diferente,

hemos de volver la vista al pasado, dialogar con las historias que nos preceden, conocerlas e incorporarlas. Porque, al fin y al cabo, como señalaba la actriz Clara Segura: “Todos fuimos extranjeros. La tierra no nos pertenece, solo nos acompaña un rato mientras vivimos”.

BIBLIOGRAFÍA

- ALBA, Susana; BABIANO, José y FERNÁNDEZ-ASPERILLA, Ana (2004): *Miradas de emigrantes. Imágenes de la vida y cultura de la emigración española en Europa en el siglo XX*, Madrid, Centro de Documentación de la Emigración Española-Fundación 1º de Mayo.
- BAUMAN, Zygmunt (2016): *Extraños llamando a la puerta*, Barcelona, Paidós.
- GARCÍA SEBASTIANI, Marcela y NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M. (eds.) (2020): *Hacer patria lejos de casa. Nacionalismo español, migración y exilio en Europa y América (1870-2010)*, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.
- MOYA, José (2004): *Primos y extranjeros. La inmigración española en Buenos Aires, 1850-1930*, Buenos Aires, Emecé.
- ORTUÑO MARTÍNEZ, Bárbara (2018): *Hacia el hondo bajo fondo... Inmigrantes y exiliados en Buenos Aires tras la guerra civil española*, Madrid, Biblioteca Nueva.
- SCHWARZSTEIN, Dora (2001): *Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina*, Barcelona, Crítica.
- STEFANONI, Andrea (2014): *La abuela civil española*, Buenos Aires, Seix Barral.

CAPÍTULO 20

LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS MIGRANTES NO LLEGA IRREGULARMENTE

BLANCA GARCÉS Y EMILIA MARTÍNEZ

Las imágenes de pateras llegando a las islas Canarias, de centros de primera recepción abarrotados o de intentos de salto en las vallas de Ceuta y Melilla aparecen constantemente en la prensa. Recientemente, la discusión entre comunidades autónomas sobre quién debería hacerse cargo de los miles de menores no acompañados hacinados en centros de emergencia también ha sido recurrente. A nivel europeo, cuando se habla sobre inmigración, se habla sobre todo de llegadas irregulares en frontera. El Pacto Europeo de Migraciones y Asilo es, ante todo, un acuerdo sobre políticas de control y expulsión en los límites geográficos. A juzgar por los debates, la inmigración parece suceder en su mayor parte de forma irregular. Sin embargo, nada está más lejos de la realidad.

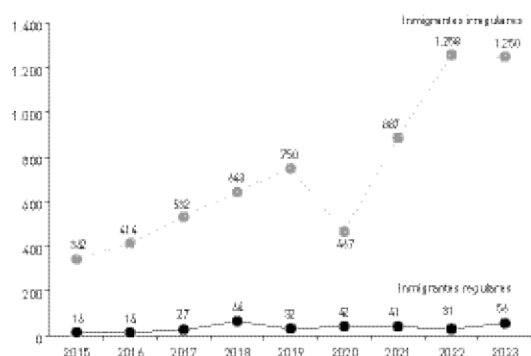
Este capítulo tiene el propósito de aportar datos que pongan en evidencia por dónde llegan las personas migrantes en España. Para ello, primero revisa los datos de llegadas irregulares año a año y de forma comparada a nivel europeo. A continuación, y en contraste con estos datos, repasa las principales vías de entrada y de acceso al permiso de residencia. Como veremos, la mayoría de las personas migrantes entran por los aeropuertos. En la última sección, se analizan los datos sobre opinión pública, para contrastar

realidad y percepciones, números y debates, flujos y políticas. A modo de conclusión, se reflexiona sobre los efectos de una constante “crisificación” de las migraciones, que va aparejada con la “irregularización” del fenómeno.

LLEGADAS IRREGULARES

En la primera década del siglo XXI, España recibió un saldo neto migratorio de más de seis millones de migrantes. La crisis económica iniciada en 2007-2008 explica el saldo negativo entre 2012 y 2016 pero, tal como señala Carmen González Enríquez, los efectos fueron limitados tanto en volumen como en duración. A partir de 2017, las llegadas se recuperaron, a remolque de la recuperación en la creación de empleo. En comparación con estos flujos, las llegadas irregulares durante esos años fueron limitadas. Las cifras lo muestran claramente: 4.700 en 2005, 3.804 en 2012 o 7.004 en 2015. Sí hubo tres picos: durante la llamada crisis de los cayucos de 2006, con un total de 39.000 para ese año, en 2017 con 23.063 y en 2018 con 64.298.

GRÁFICO 1
ENTRADAS REGULARES E IRREGULARES



Fuente: Ministerio de Interior.

En los últimos años, no hay duda de que los números de llegadas irregulares han vuelto a subir. Si bien en 2019 se redujeron de forma drástica, con un total de 23.967, las cifras crecieron paulatinamente en los años siguientes: en 2020, a pesar de la pandemia y las políticas de confinamiento, hasta 41.861, en 2023 fueron de 56.852 y en 2024 volvimos a los niveles de

2018 con 63.970 llegadas irregulares. Son cifras que suben y bajan en función del control migratorio ejercido desde los países de origen y tránsito, sobre todo Marruecos. A pesar de estos vaivenes, lo que está claro es que la tendencia es ascendente, en parte como consecuencia de la inestabilidad política y las condiciones socioeconómicas en las sociedades de origen.

Pero, como decíamos, siguen siendo números irrisorios en comparación con el saldo migratorio anual (véase gráfico 1) y también relativamente limitados si los comparamos con las llegadas irregulares en Italia y Grecia. A la hora de explicar aumentos significativos de las llegadas irregulares a la Unión Europea, las rutas que marcan la diferencia son la llamada ruta central (hacia Italia) y oriental (mayoritariamente hacia Grecia). Los años fuertes fueron 2015 y 2016 con 153.946 y 181.376 en la ruta central y 885.386 y 182.277 en la ruta oriental. Desde entonces, la ruta central ha sido protagonista en número de entradas irregulares, con 118.962 en 2017, 105.561 en 2022 y 158.020 en 2023. En 2024 las tres rutas quedaron igualadas en números: 63.970 para la occidental (hacia España), 66.766 para la central y 69.436 para la oriental. Aunque en España los medios de comunicación señalaban un nuevo récord de llegadas, las mismas cifras en Italia y Grecia, así como a nivel europeo, en tanto que representaban una disminución respecto a años anteriores, se celebraban como la mejor demostración de que la inmigración irregular estaba bajo control.

VÍAS REGULARES DE ENTRADA

Si la inmigración irregular detectada en frontera representa solo una pequeña parte, ¿por dónde o cómo entran las personas migrantes? Es bien sabido que la mayor parte son inmigrantes económicos, es decir, personas que vienen a trabajar a España con el sueño de una vida mejor. Sin embargo, el mecanismo para regular la entrada de la inmigración regular por razones laborales no funciona. Desde su creación en 2004, el Catálogo de Puestos de Difícil Cobertura, que especifica las profesiones para las que no hay trabajadores disponibles en España, ha sido incapaz de canalizar las llegadas. Primero, porque los empleadores preferían contratar a personas que ya estaban en

España en lugar de ir a buscarlos a sus países de origen. Después, porque el catálogo se convirtió en una lista de actividades extremadamente específicas y limitadas (por ejemplo, puestos en la marina, el deporte profesional o el pastoreo).

¿Cómo llegan entonces? Una parte no poco relevante entran como ciudadanos europeos y, por lo tanto, sin ninguna restricción en la entrada y residencia. En 2024, los residentes europeos en España alcanzaron los 3.723.446, cifras parecidas al número de residentes no europeos. En 2024, las principales nacionalidades europeas en España eran la italiana (con 325.358 residentes), la británica (con 272.402) y la alemana (con 115.099). Otra vía de entrada es la reagrupación familiar. En 2024 el número de autorizaciones de residencia por reagrupación familiar llegó a 55.150, lo que representa el 8% del total de permisos concedidos ese año. A ello habría que sumar los que llegan por reagrupación familiar con ciudadanos comunitarios (en su mayoría anteriores migrantes ya nacionalizados), que son muchos más.

Pero la principal vía de entrada para los extranjeros no comunitarios es el arraigo, es decir, la regularización por condiciones excepcionales de residencia, trabajo, formación y relaciones familiares. En 2023, la cifra de regularizados por arraigo alcanzó los 203.969, lo que representa el 44% del total de autorizaciones iniciales de residencia a extranjeros no comunitarios. De estos, 86.324 se regularizaron a través del arraigo social, 86.738 del arraigo familiar, 23.097 del arraigo por formación y 14.295 del arraigo laboral. Respecto a años anteriores, cabe destacar el aumento del número de personas regularizadas a través del arraigo familiar, que a diferencia del resto de modalidades no exige acreditar un periodo previo de residencia en el país. La importancia numérica del arraigo indica que la mayoría han pasado por un periodo de irregularidad, lo que no quiere decir que hayan entrado irregularmente. De hecho, la mayoría entra con un visado de turista (o sin necesidad de él, en el caso de la mayor parte de ciudadanos latinoamericanos) y caen en la irregularidad tras sobrepasar el límite de tiempo establecido.

¿El acceso al permiso de residencia a través de la regularización es una confirmación del mal funcionamiento de las políticas migratorias? ¿Estamos

ante un modelo de gestión roto? Sí y no. Por un lado, es obvio que los canales que deberían regular la entrada por razones laborales no funcionan. Esto implica que una parte sustancial de los residentes extranjeros no comunitarios han tenido que pasar por un periodo relativamente largo de irregularidad. A finales de 2023, las personas migrantes que se regularizaban habían pasado una media de 2,9 años en la irregularidad y, por lo tanto, con derechos limitados. Por otro lado, esta política tiene su lógica. Formalmente, España tiene una política sobre el papel relativamente cerrada y, por lo tanto, en línea con las demandas restrictivas de la Unión Europea. Informalmente, es una política abierta que permite cubrir casi de forma inmediata las demandas del mercado laboral y lo hace, además, dando preferencia a los inmigrantes más “deseados”, que son los ciudadanos latinoamericanos.

OPINIÓN PÚBLICA

En términos de opinión pública, España ha sido una excepción, en el sentido de que las actitudes hacia la inmigración han tendido a ser más favorables que la media europea. Esta tónica más acogedora de la opinión pública se ha explicado por razones históricas, desde el carácter reciente de la democracia, el rechazo al nacionalismo originado por la experiencia franquista o la memoria de la emigración entre muchas familias españolas. Esta excepcionalidad también se puso de manifiesto por la ausencia de un partido de ámbito nacional con un discurso claramente antiinmigración. Sin embargo, a partir de 2018, Vox rompió esta tendencia.

Si analizamos con detalle los datos de opinión pública, queda claro que la percepción de la inmigración como problema social ha aumentado en momentos de supuestas “crisis migratorias” en la frontera, siempre acompañadas o coproducidas por procesos de politización y mediatización. Así fue en los años 2001, 2002 y 2005, cuando los debates sobre la inmigración y las campañas de regularización pusieron el tema sobre la agenda. Pasó de nuevo en 2006, con la denominada crisis de los cayucos, y otra vez en 2020, con más imágenes de cayucos y la incapacidad de las distintas administraciones de ponerse de acuerdo. En esos momentos, y de

nuevo en 2024 con la crisis de acogida de los menores sin referentes familiares, la inmigración pasó a ser vista como uno de los principales problemas del país. En comparación, pocos percibían la inmigración como un problema que les afectara en el día a día.

En este sentido, podemos concluir que la preocupación por la inmigración en España no responde tanto a la experiencia diaria como a la percepción de descontrol provocada por las crisis de recepción en frontera, las discusiones inacabables entre administraciones por distribuir responsabilidades y, sumado a todo ello, por el sobredimensionamiento de ciertas cuestiones, voces y perspectivas por parte de los medios de comunicación. Dicho en otras palabras, es la “crisificación” de las migraciones, alimentada por los procesos de politización y mediatización, lo que en el fondo genera alarma y preocupación. A nivel europeo, los datos apuntan en la misma dirección: las encuestas muestran que solo el 25% de los ciudadanos europeos expresan actitudes negativas hacia la inmigración. La mayoría no problematiza la inmigración, sino la percepción de falta de control, muy directamente ligada al clima político y a menudo al (mal) funcionamiento de las políticas migratorias.

A modo de conclusión, hay que distinguir entre la irregularidad en frontera, a menudo sobredimensionada por las crisis de acogida, la dificultad de acuerdos entre administraciones y los medios de comunicación, y la irregularidad que genera el modelo de gestión migratorio español, que acaba siendo para muchos el precio a pagar por acceder al permiso de residencia a través de la regularización. La preocupación está en lo primero y no en lo segundo, puesto que lo segundo, el “no tener papeles”, se vive con cierta normalidad por parte de la ciudadanía en general y, además, queda integrado dentro de un mercado informal (precarizado y sin contrato) que forma parte de la realidad de muchos ciudadanos. En resumen, preocupa la irregularidad en frontera mientras que los números realmente relevantes son los otros, la irregularidad que se impone tras llegar a España de forma regular y no volver antes del plazo establecido. Esto demuestra que las preocupaciones —y la alarma social— no siempre están en los números, sino en las percepciones.

BIBLIOGRAFÍA

GARCÉS MASCAREÑAS, Blanca (2012): *Labour migration in Malaysia and Spain: Markets, citizenship and rights*, Ámsterdam, Amsterdam University Press.

GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Carmen (2019): “Inmigración en España: una nueva fase de llegadas”, Real Instituto Elcano, <https://n9.cl/tec7v>.

GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Carmen y RINKEN, Sebastián (2021): “La opinión pública ante la inmigración y el efecto de Vox”, Real Instituto Elcano, <https://n9.cl/b2yhe>.

RINKEN, Sebastian (2015): “Actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes: ¿en qué es España excepcional?”, *Migraciones. Revista del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones*, nº 37, pp. 53-74.

SOBRE LOS AUTORES Y LAS AUTORAS

Ferran Archilés Cardona (ed.)

Doctor en Historia y profesor de Historia Contemporánea en la Universitat de València. Especialista en el estudio de los nacionalismos y de la identidad nacional. Su trabajo más reciente es la coordinación de *Contra la homogeneidad. La difícil presencia de la diversidad cultural en España (1975-2024)* (2025, en prensa).

Inmaculada Blasco Herranz

Doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza y profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad de La Laguna. Sus investigaciones han incorporado el enfoque de género para analizar los procesos de secularización y recomposición religiosa, la construcción nacional española, el reformismo social y el feminismo histórico. Entre otros muchos trabajos, ha coordinado *Mujeres, hombres y catolicismo en la España contemporánea* (2018).

Ana Cabana Iglesia

Profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela. Su investigación se ha centrado en las actitudes sociales durante la dictadura franquista, la conflictividad rural y la historia de las mujeres y el género en la sociedad rural del siglo XX. Su último libro es *Mujeres y agricultura en la política española del siglo XX* (2024), junto a Teresa Ortega, Laura Cabezas y Silvia Canalejo.

Jorge Cagiao y Conde

Catedrático de Civilización Española Contemporánea en la Université de Nantes. Su trabajo de investigación se ha centrado en el estudio del federalismo y del nacionalismo español y comparado. Entre sus publicaciones recientes destacan *Micronacionalismos ¿No seremos todos nacionalistas?* (2018) y *La legitimidad de la secesión a debate* (2022), con Gennaro Ferraiuolo.

Miguel Díaz Sánchez

Doctor en Historia Comparada, Política y Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, es investigador posdoctoral en la Universidad de Alicante y especialista en el estudio de las migraciones en la España contemporánea, destacando al respecto su libro *Fronteras de papel: franquismo y migración interior en la posguerra española (1939-1957)* (2024).

Carlos Fuertes Muñoz

Doctor en Historia Contemporánea y profesor titular de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universitat de València. Ha estudiado las actitudes sociales durante la dictadura franquista, los manuales escolares, la formación del profesorado y la construcción de identidades a través de la enseñanza de la historia. Entre sus trabajos destaca la coordinación y coautoría de [*La España reciente \(c. 1931-c. 1982\): actualización para una educación crítica*](#) (2023), junto a David Parra.

Damián A. González Madrid

Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, e investigador del Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición (SEFT). Especialista en la historia social y política del periodo franquista, es coautor y coordinador del libro *Violencia franquista y gestión del pasado traumático* (2021), junto a Manuel Ortiz.

Eduardo González Calleja

Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. Sus investigaciones se han centrado en la violencia política y su desarrollo histórico en la España contemporánea, la evolución de los grupos de extrema derecha y fascistas, la historia social y política de los instrumentos estatales de orden público, así como la historia de la Segunda República española. Su último libro es *1934. Involución y revolución en la Segunda República* (2024).

Blanca Garcés

Investigadora sénior del área de Migraciones del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). Se dedica al estudio de las políticas y discursos sobre migración y asilo desde una perspectiva comparada.

Jacobo López Felipe

Investigador predoctoral contratado en Historia Contemporánea de la Universitat de València. Trabaja en torno al discurso nacional español de la derecha desde la transición a la actualidad, con especial atención a los usos públicos del pasado. Su aportación más reciente es “Hacer España grande otra vez: el relato nacional español en el discurso de Vox” (2023).

Guillermo María Muñoz

Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis doctoral sobre la monarquía en la dictadura de Primo de Rivera. Entre sus publicaciones recientes cabe destacar *La Corona como telón de fondo. La nueva derecha monárquica en el periodo de entreguerras (1917-1939)* (2023).

Aurelio Martí Bataller

Profesor titular de Historia Contemporánea de la Universitat de València. Su trabajo se ha focalizado en el estudio del proceso de construcción de la identidad nacional española y la participación en el mismo de la cultura política socialista, así como en la historia comparada del antifascismo. Es autor de *España Socialista. El discurso nacional del PSOE durante la Segunda República* (2017).

Emilia Martínez

Asistente de investigación del área de Migraciones del CIDOB (Barcelona Centre for International

Affairs). Actualmente, trabaja sobre cuestiones de la intersección entre inmigración, género y resolución de conflictos.

Marta del Moral Vargas

Profesora titular de Historia Contemporánea, filiada al Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria investigadora ha atendido especialmente a la historia de la acción colectiva femenina en la España contemporánea, especialmente en el primer tercio del siglo XX. Entre sus trabajos recientes destaca la coordinación de *Cultura material e historia de las mujeres* (2020), junto a Ángela Muñoz, y *Género e historia pública* (2021), con Margarita Sánchez.

Manuel Ortiz Heras

Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha y coordinador del Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición (SEFT). Sus líneas de investigación se han centrado en torno a la historia social de la dictadura franquista y la transición democrática. Entre otros muchos trabajos, ha coordinado, junto a Damián González, *El estado del bienestar: entre el franquismo y la transición* (2020).

Bárbara Ortuño Martínez

Doctora en Historia y profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Alicante. Ha centrado su investigación en el estudio de las migraciones en el siglo XX y actualmente trabaja en el ámbito de la educación en igualdad y memoria democrática a través de la inclusión del género y de las migraciones forzadas. Entre sus obras destaca *Hacia el hondo bajo fondo... Inmigrantes y exiliados en Buenos Aires tras la guerra civil española* (2018).

Sofía Rodríguez Serrador

Profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid. Ha centrado sus investigaciones en el estudio de la enseñanza secundaria y la historia social y política de las mujeres en la España de la primera mitad del siglo XX, en especial en la Segunda República y el primer franquismo. Es autora, junto a Jesús María Palomares, de *Fiestas, conmemoraciones, manifestaciones: Valladolid 1931-1959* (2020).

María Pilar Salomón Chéliz

Profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Sus investigaciones se han centrado en la movilización anticlerical española contemporánea, en los sectores republicanos y obreros, así como en las culturas políticas católicas del primer tercio del siglo XX. Sobre ello ha coeditado, junto con María Cruz Romeo y Nuria Tabanera, *Católicos, reaccionarios y nacionalistas. Política e identidad nacional en Europa y América Latina contemporáneas* (2021).

Sergio Sánchez Collantes

Doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Burgos. Es especialista en la historia política y social del republicanismo español, particularmente en el siglo XIX. Entre sus libros destacan [*El pueblo a escena: republicanismos y tradición democrática en la Asturias del siglo XIX*](#) (2019) y, como editor, junto a Nicolas Berjoan y

Eduardo Higuera, *El republicanismo en el espacio ibérico contemporáneo* (2021).

Julián Sanz Hoya (ed.)

Doctor en Historia por la Universidad de Cantabria, es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universitat de València. Ha investigado sobre la historia de la Segunda República y la dictadura franquista. Su último libro es *España en camisa azul. Falange, cultura política y poderes locales* (2022).

Ismael Saz Campos

Catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de València. Ha publicado numerosos trabajos sobre fascismo, franquismo, nacionalismo(s), culturas políticas y relaciones internacionales. Entre sus numerosos libros, como autor o coordinador, puede señalarse la reciente edición renovada del trabajo colectivo, del que es coordinador, junto a José Alberto Gómez Roda, *El franquismo en Valencia. Formas de vida y actitudes sociales en la posguerra* (2025).

Sergio Valero Gómez

Profesor de Historia Contemporánea en la Universitat de València. Sus investigaciones se han centrado en el socialismo español durante la Segunda República y la Guerra Civil, así como en el estudio comparado del antifascismo. Entre otros muchos trabajos, ha coordinado, junto a Santiago de Miguel, *Captar, votar y gobernar. Movilización y acción política en la España urbana, 1890-1936* (2021).